

Resistencia chilena



Pasada la fecha de cierre de esta edición (N. 13) de "Resistencia Chilena", publicación de la Comisión Exterior del MAPU OBRERO Y CAMPESINO de Chile, se produjeron los acontecimientos relativos a la llamada "consulta nacional". El Comité de Redacción estimó necesario agregar este anexo que comenta dichos antecedentes, y, además, transcribe la declaración del Secretariado del Comité Central del MAPU O-C titulada "A constituir un Gobierno Democrático Provisional", emitida en Santiago algunos días antes de que la dictadura anunciara la "consulta".

PLEBISCITO Y CRISIS DE LA DICTADURA: UN PRIMER ANALISIS

Es difícil analizar más allá de lo puramente coyuntural los resultados de la "consulta nacional" de Pinochet apenas tres días después de producida. Hay, por cierto, algunos hechos que ya son claros, para todo el mundo: el carácter absolutamente fraudulento de los resultados, denunciado antes y después del Miércoles 4 de Enero por toda la oposición y por la opinión pública internacional (incluso el Gobierno de los Estados Unidos); la fractura de la unidad interna de la Junta, puesta en pública evidencia por la discrepancia de dos de sus miembros con la iniciativa de Pinochet; la fuerza alcanzada por el movimiento democrático, capaz de desarrollar una movilización impresionante en diez días sin medios ni garantías, en condiciones de represión y terror, etc. Es demasiado temprano para sacar de modo definitivo todas las conclusiones del intenso enfrentamiento vivido en estos días y para avaluar cabalmente sus consecuencias. Sin embargo, a la luz de los hechos, es posible y necesario esbozar un primer análisis, sobretodo en momentos en que la actividad política y el movimiento de solidaridad en torno a Chile recrudece.

Dos cosas saltan a la vista al leer el texto de la consulta y el discurso en que el tirano la anunció. La primera es el carácter contradictorio de la maniobra con todo lo obrado y declarado por Pinochet hasta la fecha. En efecto, este es el Gobierno que quemó hace tres años los registros electorales y que ha negado sistemáticamente toda relevancia a cualquier forma de expresión popular. El calendario fijado por el propio Pinochet para su "institucionalización" no prevé ninguna forma de consulta por varios años más. Tampoco en la "legalidad" creada por la Junta (Actas Constitucionales y Decretos Leyes) existe como posibilidad este mecanismo. Y he aquí que de un día para otro Pinochet da un vuelco de 180 grados y, olvidándose de la "normalización", de "Chacarillas", del "Consejo de Estado" y de todos sus inventos anteriores convoca a la "consulta nacional", de manera apresurada y — según se sabrá después — sin siquiera consultar de antemano a los propios miembros de la Junta.

La segunda cosa que impresiona es el grado de aislamiento que Pinochet está dispuesto a reconocer en su convocatoria. En ella existen los ataques virulentos en contra del "marxismo internacional" que son usuales en él; pero son además acusadas las potencias occidentales, que se han unido en un "contubernio contra Chile". Del mismo modo en lo interno hay quienes diciéndose "de

inspiración cristiana" son viles, canallas y antipatriotas. A todos éstos Pinochet los declara la guerra y a todos ellos pretende enfrentar con su "consulta nacional".

¿Un dictador huérfano de apoyo, que busca reforzarse a través del fraude electoral? ¿Un megalómano que está dispuesto a llevar su política fascista y chovinista hasta sus últimas consecuencias? Sin duda, hay mucho de lo uno y de lo otro. Pero más allá de consideraciones simples, el plebiscito tenía una lógica bien precisa, que con los días fue quedando en descubierto con mayor claridad.

En efecto, los últimos meses habían presenciado una profundización cada vez mayor de la crisis de la política fascista. La situación económica se torna cada vez más deteriorada; la cesantía y la miseria alcanzan niveles insostenibles; crece la fuerza de masas y la movilización sindical; el caso de los desaparecidos sigue abierto y se torna inmanejable; la Iglesia asume un papel cada vez más crítico; la oposición política es cada vez más amplia, visible y organizada; desde el punto de vista internacional Chile sigue aislado y se agudizan sus problemas limítrofes con Argentina y Bolivia. El Gobierno de Pinochet no ha sido capaz de superar ninguno de estos problemas y muchos más que no nombramos. Por el contrario, ellos se han ido agravando creando un clima de inseguridad e inestabilidad para el país, que no pasa desapercibido para las Fuerzas Armadas, único sostén de Pinochet.

Debilitado, Pinochet retoma la iniciativa política con una maniobra que persigue tres objetivos, a nuestro juicio: fortalecer su mando personal (en desmedro de la Junta) de modo de recomponer la unidad del fascismo en torno a su persona; crear una apariencia de consenso tras él para desdibujar su imagen de creciente aislamiento; y, restar legitimidad a la oposición interna para incrementar y ampliar aun más la represión. El plebiscito planteado en términos personales, en un ambiente represivo y con resultados preparados de antemano, podrá servir para cumplir los tres objetivos. Su citación a muy corto plazo impediría organizar cualquier oposición y el carácter "patriótico" de la alternativa haría fácil la descalificación del adversario.

Los hechos ocurridos en los diez días de "campana electoral" demostraron claramente que los problemas de Pinochet eran mucho más serios de lo que él creía y que la crisis política por la que atraviesa su gobierno no tenía ya salida fácil. En primer lugar, la oposición democrática fue capaz de enfrentar con solidez y eficacia el desafío y demostrar como la mayoría del país está por una salida diversa de las que ofrece el tirano. Los partidos de la U.P., la Democracia Cristiana, las organizaciones sindicales, la Iglesia, manifestaron su oposición a la farsa, sorteando con acierto el falso dilema que Pinochet quería crear entre él y "la agresión internacional" y no cayendo en el error de llamar de modo excluyente a la abstención, en circunstancias que todo indicaba que para muchos esa opción era imposible. La lucha quedó así planteada como un claro enfrentamiento contra el régimen en que el abstenerse o votar "no" significaba rechazar a Pinochet y en que el problema de Naciones Unidas era colocado en su justa dimensión. Es difícil decir, sin embargo, qué efecto tuvo una campana opositora breve, sin publicidad y con

toda la maquinaria represiva en su contra. Lo que sí es posible afirmar es que la capacidad de movilización y el vigor de la oposición democrática superaron toda previsión.

A esto se agregó a poco andar un factor que alteró radicalmente la situación y por algunos días concentró la atención nacional e internacional: el estallido del conflicto abierto entre dos de los miembros de la Junta (Leigh y Merino) y Pinochet. Ya la inesperada negativa del Contralor a tomar razón del decreto que llamaba a la consulta había mostrado discrepancias claras entre los antiguos incondicionales del régimen. Luego se conoció la carta de Leigh, inesperada tanto por su existencia como por su durísimo contenido. En ella Leigh acusa a Pinochet de querer sustituir el gobierno "institucional" de las Fuerzas Armadas por un gobierno puramente personal; de haber pasado a llevar la propia legalidad de la dictadura que no contempla el mecanismo del referendum y de haberlo hecho sin consultar a los demás integrantes de la Junta, que supieron del asunto momentos antes de la grabación del discurso de Pinochet. Haciendo alusión al hecho de que son dos miembros de la Junta los discrepantes, comunica oficialmente, a nombre de la Fuerza Aérea, su rechazo a la consulta, por considerarla inconveniente e ilegal. Un par de días después la Marina y la Fuerza Aérea comunicaron su decisión de no participar en el control del acto y permanecer acuartelados el día en que se realizaría, lo que en los hechos significaba que la oficialidad de ambas ramas decretaba su abstención y se desvinculaba de la suerte de Pinochet en una coyuntura política decisiva para él.

Pinochet se movió con rapidez para reducir los resultados de la ruptura, conferenciando con Leigh y Merino, pero la carta era ya de dominio público y ante su texto era difícil ocultar la gravedad de la situación. La atención principal del tirano debió ser, de allí en adelante, el buscar recomponer la unidad interna de lo que hasta hoy fue su punto de apoyo principal, o al menos afianzar su mando en el Ejército y en Carabineros. De allí el hecho inusual de que en los días anteriores a la consulta el "Presidente" haya tenido que hacer una gira como Comandante en Jefe del Ejército por las guarniciones del norte del país, para explicar los alcances de su acción. Y aunque la Marina y la Fuerza Aérea al final participaron en la consulta (condicionalmente) para todo el mundo quedó claro que la crisis era bastante profunda y continuaría después del plebiscito. Como para demostrarlo se produjo la inasistencia de Leigh al acto de celebración de Pinochet y la junta se reunió a puertas cerradas durante todo el día posterior a la consulta.

Es demasiado pronto aún para saber qué profundidad tiene la crisis abierta al interior de las Fuerzas Armadas y qué desenlace puede tener. Agregamos sólo algunas ideas generales a este respecto: En primer lugar es evidente que el problema no es repentino y que constituye la aparición pública de un conflicto que se arrastra hace bastante tiempo. Desde su autodesignación como Presidente de la República, Pinochet busca afianzar su mando personal y prescindir del resto de la Junta en la toma de decisiones fundamentales. Los demás integrantes en cambio (salvo tal vez Mendoza, incondicional de Pinochet) exigen la mantención del esquema inicial, según el cual

este era el Gobierno de las Fuerzas Armadas, representadas todas al más alto nivel por sus Comandantes en Jefe, en igualdad de condiciones. De hecho, la tendencia ha sido siempre la que propugna Pinochet y su actitud la de consultar al resto cada vez menos. Ya con ocasión del discurso de Chacarillas, que fijaba la línea del Gobierno fascista en materia institucional. Leigh planteó públicamente sus discrepancias y su molestia por no haber sido consultado.

En segundo lugar, sin embargo, es necesario aclarar que la fuerza material que Leigh coloca tras su "disenso" (la Fuerza Aérea) no es suficiente para desbalancear la fuerza del resto de las ramas y en concreto del Ejército, lo que lo obliga a buscar otros apoyos para hacer pesar sus puntos de vista. En tercer lugar, estas discrepancias de Leigh y Merino no deben hacernos perder la perspectiva que ellos están igualmente por una institucionalización fascista y sus diferencias tienen que ver fundamentalmente con problemas de fuerza al interior del mando militar. Lo que sí interesa destacar es que estas discrepancias en la Junta abren espacios de discusión en las Fuerzas Armadas y posibilidades de desarrollo de los sectores democráticos en su interior.

Terminado el plebiscito hemos conocido los resultados que eran de esperarse y el fraude ha quedado de manifiesto. Este se ha expresado en el proceso electoral mismo (mantención del Estado de Sitio y las zonas de emergencia, propaganda unilateral incesante hasta las últimas horas y en los propios lugares de votación, cédulas transparentes, falta de garantías mínimas en la constitución de las mesas y en el propio recuento, etc.) y, fundamentalmente, en el clima de atemorizamiento que rodeó todo el proceso. Se trataba en suma de que nadie se atreviera a votar "No" sin temer por su integridad, su libertad o su trabajo. A pesar de ello no se atrevió Pinochet a hacer un escrutinio público. Los votos los contaron los partidarios de la Junta, los sumaron sus alcaldes e intendentes y los publicó el Ministerio del Interior. Aún así, no pudo dejar de reconocer al menos un millón de votos por el "No", para que los resultados publicitados no fueran absolutamente ridículos. Y, por último, las informaciones coinciden en que uno de los aspectos más destacados del fraude estuvo en la suma final, que apareció con más de cinco millones de votantes, cifra inflada al menos en un millón respecto de los que efectivamente concurren. La abstención de al menos 1.500.000 electores fué de este modo escondida ante la opinión pública.

El resultado final de todo el proceso es, a nuestro juicio, más favorable para la oposición que para Pinochet. Por cierto, este último reporta algunas ventajas de carácter inmediato, pero los problemas que tenía o se ha creado no disminuyen, sino se agrandan con motivo del referendun. Pinochet puede utilizar — y lo hará sin duda — los resultados falsos de su plebiscito para mostrar a la oposición aislada y golpeada. Pero su pretensión de neutralizar la opinión pública internacional y poner a la defensiva a las fuerzas democráticas ha sido rechazada.

En lo externo, nadie — como lo pronosticó el propio Leigh — ha creído en los resultados de Pinochet y en lo interno las fuerzas democráticas

han condenado de inmediato el fraude. Pasa pues la ebriedad de la gloria ficticia, el fascismo enfrenta los mismos problemas que antes; debe buscar salida a la situación económica, y a la inquietud empresarial y sindical; abrir alguna brecha en el plano internacional; etc. Y para ello, Pinochet no cuenta ya con el conjunto de las FF.AA., sino que debe reajustar cuentas en su interior por la vía de las concesiones o de la represión.

Desde el punto de vista de las fuerzas democráticas, las jornadas de Enero marcan un nuevo hito. La Democracia Cristiana jugó un rol importante que no solo confirma más claramente aún su oposición al fascismo sino que le da también carácter público a su acción. La salida a las calles de su juventud, encabezada por sus dirigentes conocidos, da a la DC prestigio en el movimiento antifascista y le genera confianza de parte de sus bases.

Al mismo tiempo, no cabe duda que la ampliación del campo opositor le abre, como partido de centro, mayores posibilidades de maniobra. Es de esperar que esas nuevas perspectivas se vuelquen hacia una mayor dedicación unitaria, que ha demostrado hasta hoy ser el único camino eficaz, y no dar en cambio lugar a nuevas actitudes sectarias, diversionistas o excluyentes que a la larga sólo debilitan a la oposición democrática. Los hechos de Enero demuestran que todos tenemos algo que ganar con la unidad democrática y que las divisiones artificiales solo aligeran el camino a Pinochet y el fascismo. Desde el punto de vista de la UP, el plebiscito también significó una mejor coordinación y acción de masas, a la vez que el desarrollo en la práctica de nuestra política unitaria. La principal cuestión es ahora cómo llevar adelante la iniciativa política dentro y fuera del país, de manera de poner en jaque a la dictadura y acorralarla en los momentos en que su debilidad es manifiesta.

Hoy la consigna de derrocar a la dictadura no aparece como un sueño descabellado sino como un objetivo posible de ser planteado en términos reales. Lo cual no quiere decir que sea tarea fácil o que el fascismo no conserve fuerza.

En nuestra opinión, la UP y las fuerzas democráticas deben avanzar resueltamente en su proposición de un Gobierno Democrático Provisional que integre a civiles y militares para una real normalización del país. La declaración del Secretariado del Partido emitida en Chile en Noviembre, antes del plebiscito, tiene hoy más vigencia aún que ayer. La "consulta nacional" ha abierto nuevas perspectivas que el movimiento popular tiene el deber de aprovechar cabalmente.

A CONSTITUIR UN GOBIERNO DEMOCRATICO PROVISIONAL

*Declaración del Secretariado del Comité
Central del MAPU OBRERO Y CAMPESINO*

I.— *Crece la conciencia de que es posible poner fin a la Dictadura Fascista*

Desde el golpe militar, la UP y nuestro partido han denunciado el carácter fascista de la dictadura y por tanto su incapacidad para conducir al país por un camino de progreso.

Durante estos cuatro años la gran mayoría de los chilenos ha comprobado, en el empobrecimiento acelerado de sus propias condiciones de vida, que la dictadura fascista está al servicio de los intereses de un reducido grupo de chilenos y del capital extranjero.

El profundo deterioro de los ingresos de la masa laboral del país, provocado por los altísimos índices de inflación y de cesantía y la drástica reducción de sueldos y salarios, agudiza el empobrecimiento de las capas medias, profesionales, técnicas, artesanales, de pequeños industriales, comerciantes y propietarios agrícolas.

El cerco establecido por la política económica de la dictadura a la industria nacional y al comercio de consumo con la política fascista de desnacionalizar nuestra economía mediante la eliminación de la legislación que protegía a la economía nacional de la intromisión y voracidad del capital extranjero. Por otro lado, se despilfarra los recursos del país con la importación de suntuarios para el consumo lujoso de una ínfima capa de la población, enriquecida a expensas de la mayoría de los chilenos. Esta política que perjudica el interés de Chile y su gente solo puede ser sostenida mediante la supresión de todos los derechos y libertades que la constitución y las leyes garantizaban a todos los chilenos; y la represión sobre la mayoría de la nación y en especial de la clase obrera y sus organizaciones, como baluartes consecuentes de la lucha democrática y de los intereses del pueblo.

Los cuatro años de dictadura del fascismo han demostrado ampliamente las posiciones sostenidas por la UP y nuestro partido, en el sentido que la victoria definitiva de la democracia, su consolidación y desarrollo exigen la derrota total del fascismo; y que esto sólo es posible con el esfuerzo unitario de todas las corrientes y sectores de nuestra sociedad que sinceramente anhelan la democracia y no están comprometidas con el fascismo y sus crímenes. En este sentido, entendemos con claridad las diferentes responsabilidades y compromisos que le caben a los uniformados en los crímenes de la dictadura, tanto por el carácter vertical del mando, como porque en los hechos, quienes gobiernan son la camarilla corrompida que encabeza Pinochet.

Por otra parte, cada día es más evidente que esta situación no se mantendrá por mucho tiempo. Ha crecido la conciencia de los chilenos acerca del carácter criminal y antinacional de la dictadura fascista y es clara la con-

vicción mayoritaria que es necesaria y posible poner fin a la dictadura e iniciar un proceso de restauración y profundización de la democracia que los chilenos constituyeran y que un grupo minoritario ha intentado cancelar.

II.— *Por un gobierno democrático y provisional*

El MAPU O-C, teniendo en cuenta los intereses y sentimientos de la mayoría de los chilenos, llama a todas las fuerzas políticas y sociales y a los uniformados no comprometidos con el fascismo a desarrollar todos los esfuerzos para dar paso a la constitución de un Gobierno Democrático y Provisional.

El GDP, constituido por la voluntad y anhelo de la gran mayoría de los chilenos, gobernará hasta la plena normalización democrática del país de conformidad a la constitución y legislación vigentes al 11 de septiembre de 1973 y en todo aquello que no sea aplicable, sobre la base del consenso de todas las fuerzas y sectores democráticos que le otorguen su apoyo y confianza.

III.— *El programa democrático del Gobierno Democrático Provisional*

El GDP, una vez constituido, iniciará el proceso de democratización del país adoptando las siguientes medidas:

- 1.— Restauración inmediata de todos los derechos y libertades políticas, sociales, gremiales, individuales, vigentes al 11 de septiembre de 1973.
- 2.— Libertad inmediata para los presos políticos y sindicales, esclarecimiento total de la situación de los chilenos desaparecidos y retorno de los exiliados.
- 3.— Concertación de un acuerdo con todos los sectores interesados en un Plan Económico de Emergencia que considere:
 - a) contener el proceso inflacionario;
 - b) reajustes de sueldos y salarios que hagan posible disminuir la angustia de los hogares de la mayoría de los chilenos;
 - c) inversión estatal, estímulo a la inversión privada, y ayuda del Estado a los pequeños y medianos empresarios industriales y agrícolas, víctimas de la recesión a fin de avanzar en resolver el problema de la cesantía;
 - d) adopción de las medidas legislativas que protejan la industria y el comercio nacional de la competencia desleal y voraz del capital extranjero;
 - e) abolición inmediata de la legislación y normas administrativas dictadas por el gobierno fascista que han permitido el derroche de la riqueza nacional y el consumo lujoso y suntuario de minorías privilegiadas.

4.— Elevar los niveles de la producción agrícola y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, a través de las siguientes orientaciones:

- a) restitución de la asistencia crediticia y técnica del Estado a las actividades agropecuarias;
- b) adopción de un Plan Nacional de Dignificación de la Agricultura;
- c) reinicio del proceso de Reforma Agraria, interrumpido por la dictadura, conforme a la Ley N. 16.640 aprobada durante el gobierno de Frei;
- d) dictación de las medidas legislativas y administrativas que garanticen la propiedad de los pequeños y medianos propietarios agrícolas y de las formas de organización productiva conforme a la voluntad de los campesinos.

5.— Disolución y abolición de las instituciones represivas y de los símbolos creados por el fascismo y ajenos al espíritu y tradición democrática del pueblo chileno.

6.— Investigación y castigo a los responsables y culpables de asesinatos, torturas, y represión de los chilenos de conformidad a la legislación civil y militar vigente al 11 de septiembre de 1973, por los Tribunales Ordinarios de Justicia.

7.— Iniciar el proceso de democratización de las FF.AA., teniendo en cuenta estos criterios:

- a) determinación de las concepciones de Seguridad Nacional, sobre la base del Proyecto político, económico y social resultante de la voluntad mayoritaria de la nación;
- b) respecto al principio de la verticalidad del mando y generación de la oficialidad a partir de la condición de soldado;
- c) aprobación de los organismos representativos de la soberanía popular, los planes de formación y de la estructura orgánica de las FF.AA.

8.— Desarrollar el papel que las FF.AA. deben cumplir en el progreso del país en conformidad a estos criterios:

- a) defensa de la soberanía e integridad territorial de la nación;
- b) vinculación estrecha en función de la defensa nacional, al desarrollo científico, técnico y cultural del país;
- c) participación activa en el rescate de los sectores desnacionalizados de la economía, y en la orientación y gestión de las áreas estratégicas de ésta que digan relación con la seguridad nacional;
- d) desarrollo de los aspectos profesionales y de la infraestructura de las FF.AA., sobre la base de la independencia, la soberanía nacional y el proyecto del desarrollo del país, sin que ello signifique, por tanto, subordinar nuestras FF.AA. a intereses extraños a Chile.

9.— Adopción de las medidas legislativas y administrativas pertinentes que impidan el terrorismo de las minorías fascistas o de cualquier otro signo ideológico.

10.— En conformidad a los principios constitucionales y a la legislación vigente, al consenso democrático o a la voluntad soberana del pueblo chileno, el GDP deberá poner en marcha las medidas legislativas y administrativas que permitan normalizar y mejorar el proceso político y democrático del país.

Sólo un gobierno democrático que cuente con el respaldo y la confianza de la mayoría del país, aún cuando tenga el carácter provisional, pero que no sea una mera autoridad administrativa, podrá gobernar con la autoridad y solidez necesaria y llevar adelante las medidas urgentes que la nación reclama. Cualquier otra alternativa carecerá de apoyo suficiente para concertar el acuerdo nacional de todas las fuerzas y sectores democráticos, a fin de restablecer la convivencia en el país; y se verá impotente para contener a las minorías fascistas que con espíritu revanchista intentaran crear una nueva situación de caos, anarquía y confusión para restablecer la dictadura y el terror.

En la perspectiva de luchar por el Gobierno Democrático Provisional debemos redoblar nuestros esfuerzos en todos los planos, elevar sustancialmente el trabajo político y la lucha ideológica; multiplicar la propaganda y agitación y en especial desarrollar las actividades de masa en torno a sus problemas y reivindicaciones. Cada lucha concreta nos pone en la perspectiva del GDP. Avanzar hoy día en la conquista de los derechos sindicales y en mejorar condiciones salariales nos permite abrir camino hacia la plena democracia.

Tras estos objetivos, el MAPU O-C llama a todos los sectores, organizaciones y corrientes políticas, gremiales, culturales y militares al conjunto del pueblo chileno, sin distinción de credos, sexo y edad, a multiplicar los esfuerzos en la perspectiva de poner fin a la dictadura y de establecer un GDP con el apoyo y el consenso de la nación entera, tome en sus manos los destinos de la Patria y ponga a Chile en la senda de la democracia y del progreso.

SECRETARIADO DEL COMITE CENTRAL
DEL MAPU OBRERO Y CAMPESINO

Santiago de Chile, Noviembre 1977

mapu obrero y campesino



*Resistencia
chilena*

*comisión exterior
N°13-nov.dic.77*

SUMARIO

EDITORIAL El "Plebiscito" no resuelve ninguno de los problemas de la Patria	1
ANALISIS Como avanzar en la nueva situación política - <i>Jaime Gazmuri</i> Algunos problemas de la Institucionalidad Democrática <i>José Miguel Insulza</i>	5 20
CRONICA La resistencia Democrática-Nacional y el Partido <i>Entrevista al Encargado del Partido en Chile</i>	40
SOLIDARIDAD Repudio mundial a la Junta abre perspectivas más avanzadas a la Solidaridad <i>Horacio Silva</i> "El derecho a vivir en la propia patria"	57 63
INTERNACIONAL Comunistas y Católicos en Italia: Una nueva etapa en el diálogo <i>Gabriel Rodríguez</i> Brasil: crece el aislamiento del régimen <i>Antonio Potiguar</i>	65 78
PARTIDO Comunicado de la Comisión Exterior de la U.J.D. Actividad Partidaria	83 87

EDITORIAL

Al cierre de este número el dictador Pinochet convocó la llamada "consulta nacional" del 4 de enero. Al respecto nuestro Partido emitió en Santiago, el 28 de Diciembre pasado, una declaración que en esta oportunidad reemplaza al comentario editorial.

EL "PLEBISCITO" NO RESUELVE NINGUNO DE LOS PROBLEMAS DE LA PATRIA

Pinochet ha llamado a los chilenos a "pronunciarse" en un "plebiscito" para que lo apoyen frente a una supuesta agresión externa de las Naciones Unidas contra el país.

La Patria sufre efectivamente una violenta agresión desde hace cuatro años. Pero el agresor es el propio gobierno fascista que Pinochet encabeza en nombre de los grandes financistas nacionales y extranjeros. Todos los chilenos sufren en carne propia los efectos de la violencia antinacional del régimen.

La Patria está agredida:

— porque hay más de 500.000 chilenos cesantes, sueldos miserables para los trabajadores urbanos y rurales; una situación económica sin futuro aqueja a los pequeños propietarios y trabajadores independientes; la industria nacional se desmantela,

— porque el terror, la represión y la más absoluta arbitrariedad gubernamental desconoce a los chilenos y a todas las instituciones nacionales todos sus derechos individuales y sociales,

— porque hay decenas de miles de exiliados políticos, porque más de 2500 chilenos detenidos por la DINA y el CNI se encuentran desaparecidos, porque la violencia y no la paz reina en Chile,

— porque la soberanía nacional se encuentra seriamente amenazada debido a la delicada situación limitrofe que enfrenta. Una Patria dividida por un go-

bierno ilegítimo no puede defender con fuerza y dignidad la integridad territorial de la nación.

Pinochet y su camarilla son quienes han conducido a Chile a la más grave crisis económica de su historia, a la bancarrota moral, al caos institucional, a la ilegitimidad política y a la quiebra de los fundamentos nacionales y militares de la seguridad de la Patria.

La crisis nacional ha socavado todos los apoyos que la dictadura tuvo en un comienzo. La constatación de su carácter minoritario y de su ilegitimidad inquieta a los grupos militares y civiles más cercanos al gobierno. Para afirmarse y neutralizar el desconcierto en sus filas, Pinochet montó la farsa de un "plebiscito" y busca aparecer con una fuerza y legitimidad que no tiene.

Pero el "plebiscito", por el contrario, demuestra la absoluta ilegitimidad de la dictadura y su total incapacidad e incompetencia para conducir la Patria. Ni uno solo de los problemas que afectan a los chilenos se resuelve con el "plebiscito". Con o sin "plebiscito" la crisis nacional continúa profundizándose. Frente al drama de la Patria, responden con una farsa publicitaria!

El "plebiscito" es un intento terrorista de falsear la opinión de los chilenos

Esta mascarada electoral nada tiene que ver con las formas en que el pueblo chileno ha expresado su voluntad en el historial democrático del país.

No puede ser democrático este "plebiscito" que se realiza bajo el imperio de un estado de emergencia que no reconoce ningún derecho individual ni social y en donde opera un aparato policial y de terror que no se detiene ante el amedrentamiento, las detenciones arbitrarias y todo tipo de coerción para quien se atreva a disentir con la dictadura.

No puede ser democrático este "plebiscito" que se desarrolla sin ningún tipo de libertad de expresión, opinión y reunión y cuando la minoría fascista en el poder, con el control absoluto de los medios de comunicación, ha desatado la más gigantesca campaña propagandística totalitaria que conoce la historia de Chile.

No es democrático este "plebiscito" convocado en un plazo de 10 días para evitar de esta forma la más mínima posibilidad de discusión y de debate democrático de la ciudadanía. Pinochet se tomó sólo el tiempo necesario para hacer el fraude electoral y montar el show de apoyo ciudadano.

No tiene legitimidad democrática una elección en que el gobierno controla y manipula todo el proceso electoral. Pinochet ha borrado de una pluma todos los mecanismos democráticos que garantizaban la limpieza de

los procesos electorales anteriores.

No hay ninguna garantía ni seguridad de voto secreto que exprese la libre determinación de cada ciudadano. El proceso está organizado de manera de ejercer todo tipo de presiones y coerción antes, durante y después de la emisión del voto.

No tiene, en suma, legitimidad democrática alguna un "plebiscito" convocado al margen de toda legalidad, incluso violando la legislación que la propia Junta ha dictado.

A repudiar la dictadura!

La ilegitimidad del "plebiscito" queda en evidencia por cuanto la dictadura llama a decidir sobre cuestiones que no tienen nada que ver con los problemas reales de los chilenos. Además, el proceso de consulta se desarrolla en un clima de abierta represión.

Por otra parte, la dictadura tiene en sus manos todo el proceso electoral, de allí que no será sorpresa para los chilenos el resultado pinochetista y fraudulento de la consulta.

Pese a todo, el "plebiscito" es expresión de la debilidad y desaliento del fascismo. En esa medida se abre la posibilidad, aunque mínima y restringida, de expresar el repudio a la dictadura.

Hacer públicas sus opiniones, poner de manifiesto la crisis a que el país ha sido conducido, combatir ideológicamente al fascismo, exigir garantías democráticas y denunciar el carácter fraudulento del proceso electoral y, finalmente, no votar o votar no, son las posibilidades que se abren a los chilenos para manifestar su oposición a la dictadura y avanzar hacia la conquista de la democracia y la libertad.

En consecuencia, aún cuando los resultados de la votación se acomodarán a los intereses de la dictadura, no votar o votar no, exige a Pinochet que consume el fraude. No votar o votar no, exige que Pinochet y su camarilla adulteren de manera abierta la voluntad de los chilenos. No votar o votar no, obliga a Pinochet y su camarilla a hacer el trabajo sucio de adulterar los votos. No votar o votar no, permite poner en evidencia que Pinochet no es otra cosa que un politiquero de baja monta que, una vez más, compromete la honra, el prestigio y la integridad profesional de las Fuerzas Armadas.

A constituir un Gobierno Democrático Provisional que ponga fin a la crisis nacional

En este cuadro general es evidente para todos que la dictadura sólo podrá sobrevivir en la medida que, desde los sectores interesados en restau-

rar el imperio de la democracia, la legalidad y el progreso económico y social del país, no surja una alternativa concreta que recoja la voluntad y la fuerza de la mayoría. La amplia disposición de la UP y de nuestro Partido en hacer todos los esfuerzos para caminar hacia la constitución de un Gobierno Democrático Provisional, abre al Partido Demócratacristiano y al conjunto de las fuerzas democráticas, civiles y militares, la posibilidad histórica de contribuir a poner fin al drama de Chile.

EL MAPU OBRERO Y CAMPESINO reafirma en esta hora su convicción de que es posible, sobre la base del consenso de todas las fuerzas y sectores democráticos, constituir un Gobierno Democrático Provisional que ponga término a la dictadura y tome en sus manos la tarea patriótica de renovar la democracia, de restablecer la convivencia nacional y de avanzar por la senda del progreso económico y social.

NO AL FRAUDE DE PINOCHET: VOTE NO O NO VOTE

Partido MAPU OBRERO Y CAMPESINO
Santiago, 23 de diciembre de 1977

ANÁLISIS

COMO AVANZAR EN LA NUEVA SITUACION POLITICA

Jaime Gazmuri

El 2 de Noviembre se produjo un paro masivo de los trabajadores de la Mina El Teniente. El país fue informado por diversos medios de comunicación que “el 50% de los trabajadores de la Mina Norte y el 25% de los de la Mina Sur, no se presentaron al primer turno de ese día”¹. Los dirigentes oficialistas que han sido colocados a cargo de los sindicatos, declararon que se trataba de “actitudes de trabajadores que van más allá de las acciones sindicales”. Son — dijo el Presidente del Sindicato Profesional de Culetones — “grupos aislados que tienen conductas negativas no controladas por las directivas”. El carácter parcial y contradictorio de las informaciones oficiales, no fue capaz de ocultar el hecho macizo de que se había producido la primera acción masiva de carácter huelguístico, en uno de los centros obreros más importantes del país después del golpe del 73. Resulta evidente, además, que este movimiento se había realizado en uno de los sectores donde el Gobierno ha realizado los mayores esfuerzos por destruir el movimiento sindical. En efecto, en 1976, fue intervenida la Confederación de Trabajadores del Cobre, y destituidos los últimos dirigentes nacionales que habían sido elegidos por sus bases, con el propósito de imponer por designación gubernamental “dirigentes” absolutamente oficialistas. El objetivo concreto del paro era exigir el pago atrasado de bonos de producción, y demandar mejorías salariales. Dado su carácter, la respuesta inicial del Gobierno podría definirse como cautelosa. Admitió que efectivamente por problemas administrativos, se habían incumplido algunos pagos, que prometió efectuar a la brevedad; luego el General Urbina, Presidente de Codelco, anunció la caducación de 32 contratos, por razones de “ausentismo laboral”.

¹ Fuentes fidedignas del propio “El Teniente”, no oficiales por cierto, indican que el paro fue acatado por el 70% de los trabajadores de la Mina y el 40% en la Fundición, que no era el centro de la acción en este caso. Se agrega que a nivel de empleados paró más del 30%.

Pocos días después, frente a la Cancillería, en pleno centro de Santiago y con ocasión de la presentación de credenciales del nuevo embajador de los EE.UU., se desarrolló una manifestación de varias decenas de personas, que portaban lienzos y fotografías de los desaparecidos, y que exigían se aclarara la situación de las miles de personas secuestradas por la DINA y los servicios de seguridad.

Por otra parte, se informa de movimientos huelguísticos de los trabajadores portuarios y del transporte, en San Antonio y Valparaíso.

Se ha creado una nueva situación política. El aporte del Movimiento Popular

Todos estos hechos, a los que se podrían agregar muchos otros, sin duda espectaculares ya que se realizan en un país sometido a un régimen como el de Pinochet, no corresponden a situaciones aisladas ni han surgido obviamente de la nada. Se insertan en un proceso muy vasto de creciente movilización de las fuerzas opositoras contra la dictadura y su política. Demuestran a un tiempo, la fuerza que va alcanzando la movilización antifascista en el país, y la debilidad del Gobierno, que no tiene las condiciones nacionales ni internacionales para usar la represión en la forma que a ellos les gustaría.

Por ello, se puede decir en propiedad que durante 1977 se ha ido configurando en Chile una nueva situación política. Su análisis atento y riguroso es fundamental para diseñar la táctica del movimiento democrático, así como no pocos aspectos de su estrategia.

En la base de la actual situación se encuentra, sin duda, el aislamiento político y social producido por la política del fascismo. El desarrollo creciente de las contradicciones entre la minoría en el poder y la mayoría de la nación; así como los efectos desastrosos en todos los planos de la gestión gubernativa de los fascistas. Sin embargo, todo ello no es suficiente para producir una nueva situación política. Ha sido fundamental la existencia de una política antifascista que ha puesto como un elemento central de su estrategia, el desarrollo de un amplio movimiento social de carácter democrático, capaz de expresar las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores y del pueblo, y de abrirse paso a formas cada vez más abiertas de lucha, en medio del régimen represivo imperante. Esta ha sido, básicamente, la línea sostenida por los partidos obreros y por la Unidad Popular en el interior del país, prácticamente desde 1974. No hay que olvidar que lo que aparece ahora tan obvio, no lo fue así en los primeros años de la dictadura. Existía en muy amplios sectores la idea de que era imposible organizar algún tipo de resistencia en las condiciones del fascismo. Ello explicó el inmovilismo inicial de vastos sectores democráticos, ubicados especialmente al centro del arco político. No faltaron tampoco quienes en la izquierda sustentaron que sólo era posible una resistencia de carácter exclusivamente clandestino, en la perspectiva larga de crear “un poder armado del pueblo”, supuestamente la

única forma para derribar a la dictadura. En la práctica, ambas actitudes conducían al inmovilismo: la primera por derrotista y la segunda por plantear una política imposible. Lo común entre ellas era la desconfianza y la subvaloración de la capacidad de las masas para sobreponerse a la liquidación de la democracia chilena, y encontrar las fórmulas y los métodos que les permitieran luchar por sus derechos en las condiciones del fascismo.

Ya en Mayo de 1974, nuestro Partido planteaba que “nuestra línea de masas se orienta con el criterio de la máxima amplitud en la base social. La línea divisoria no pasa hoy día entre aquellos que estuvieron con el Gobierno Popular o en la oposición. Todos aquéllos que de una u otra manera repudian la política de la dictadura, deben ser incorporados a la resistencia y a la lucha por los intereses concretos de cada sector del pueblo. Desde el punto de vista organizativo, deben aprovecharse todas las organizaciones de masas que no han sido proscritas (juntas de vecinos, centros de madres, clubes juveniles, colegios profesionales, etc, etc.), y especialmente los sindicatos que siguen funcionando, a pesar de las restricciones a que están sometidos”². Dos años después, en Marzo de 1976, afirmábamos que entre los principales problemas políticos planteados “el primero es el desarrollo de una línea de masas, que logre transformar el repudio general de la población en movilización efectiva de las más amplias masas — obreras, juveniles, campesinas, de las capas profesionales y técnicas, de los pequeños y medianos empresarios, etc. — contra la política de la Junta. Si bien se ha avanzado en estos años en este terreno, en especial en la clase obrera y el movimiento sindical, es evidente que existe un potencial de lucha antifascista que no ha sido aún puesto en movimiento”³.

Sin embargo, el problema principal no era tan sólo el de formular una línea política, sino el de realizarla. Desde la más profunda clandestinidad, y sometido a los duros golpes represivos que se conocen, los partidos de la Unidad Popular en el país han logrado activar y orientar una parte sustantiva del movimiento de masas antifascista, que hoy día se expresa cada vez más abiertamente. Ello ha sido el producto de un tenaz, perseverante, y a veces heroico trabajo de miles de militantes a lo largo y ancho del país. Hoy día, la presencia del movimiento popular y de la izquierda en el terreno sindical, juvenil, poblacional y cultural, es de una importancia indiscutible aunque no sea siempre evidente para quien mire superficialmente el proceso en curso. Sin duda ella no alcanza aún la dimensión que quisiéramos, pero es asimismo innegable que la actual situación política que

² “Las Tareas del Pueblo en la Hora Presente”; documento del Comité Central del MAPU-OC, Febrero 1974.

³ “La Crisis de la Política Fascista y las Perspectivas del Movimiento Democrático y Popular”; Boletín Informativo Exterior N. 3.

vive el país sería inimaginable sin la presencia subterránea pero activa, en Chile, de los partidos de la clase obrera y de la Unidad Popular. Quienes pretenden desconocer este hecho, se colocan simplemente de espaldas a la realidad.

La Iglesia Católica: un actor democrático decisivo

Sería, por otra parte, profundamente erróneo decir — y pensar — que el grado que hoy día ha alcanzado la oposición democrática es producto solamente de la acción de la izquierda y de la Unidad Popular. El otro gran actor democrático de estos años ha sido la Iglesia Católica. Escapa a este comentario el análisis de las razones que pueden explicar el hecho sin precedentes de que la Iglesia Católica Chilena, en un momento particularmente duro de la vida nacional, se haya convertido en un bastión de la defensa de los principales derechos del pueblo. El proceso que la ha llevado a asumir este papel, no ha sido por cierto linear ni exento de contradicciones y de problemas. En los hechos, sin embargo, se ha producido un antagonismo profundo entre la Iglesia y el fascismo. “Las Iglesias en Chile, especialmente la Iglesia Católica, se han visto afectadas por la política del fascismo. La amenaza que representa el fascismo a todas las formas de libre expresión del pensamiento, a los derechos y libertades del hombre que se desprenden del pensamiento cristiano, y la necesidad de aquél de controlar las formas de expresión independiente a los objetivos políticos del Gobierno, lo ha llevado a buscar contener la acción pastoral de la Iglesia, profundamente ligada a los problemas del pueblo. Esta acción pastoral responde al Concilio Vaticano II y a la reunión de Obispos latinoamericanos en Medellín... El fascismo no puede soportar la consecuencia de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos, en la denuncia de las arbitrariedades, y en su permanente disposición a la vuelta de la normalidad jurídica, en la búsqueda que el país se reencuentre con sus tradiciones democráticas y libertarias, por medio del ejercicio de la soberanía popular”⁴.

Desde su punto de vista y en función de su propia evolución, la Iglesia ha tenido un papel decisivo en la denuncia de la política del fascismo en sus diversas manifestaciones — represivas, educacionales, económicas y culturales — y en la preservación de los valores democráticos. Esta actitud ha ejercido una profunda influencia en vastos sectores de la sociedad chilena.

⁴ “Revista de la Resistencia N. 2”; entrevista al Encargado del Partido en Chile, Agosto de 1977, Santiago.

Sin embargo, el rol de la Iglesia no se ha limitado al de la denuncia. A nuestro juicio, lo más significativo de su acción ha sido el desarrollo de una práctica — en su lenguaje, una pastoral — centrada en los problemas de los sectores más afectados por la política del fascismo. Es decir, los trabajadores y las masas populares. Hemos asistido así, en estos años, al desarrollo del llamado “movimiento solidario”, que bajo la orientación de la Iglesia ha movilizado a miles de chilenos en la solidaridad con los perseguidos y los presos políticos; en la organización de los cesantes; en el establecimiento de comedores infantiles para atender las necesidades básicas de alimentación de los niños de las poblaciones; en la colaboración con las múltiples necesidades que tiene hoy día el movimiento sindical; en la preocupación por enfrentar los problemas que crea a los jóvenes estudiantes el sistema educacional impuesto por el fascismo. Se trata, sin duda, de un fenómeno nuevo, que ha tenido una gran influencia en la revitalización de la actividad social independiente en el país, y que asume, por la lógica misma de la situación, un carácter democrático necesariamente antifascista. Quisiéramos subrayar tres características de este movimiento de solidaridad: su intención no paternalista; su atención preferente a los problemas concretos de los sectores populares, con lo que trasciende una dimensión puramente religiosa; y su carácter no sectario, es decir, abierto tanto a los creyentes como a los no creyentes. Estas características las expresa, por ejemplo, el Obispo Auxiliar de Concepción, Secretario General Subrogante de la Conferencia Episcopal: “Se está dando una cosa que es muy interesante: un ecumenismo no tan marcado por la confrontación doctrinal, sino uno que se expresa en la unión para resolver problemas que son comunes. Y una disposición de apertura muy grande hacia la temática del hombre, sea o no creyente. Y cuando se trata de crear una respuesta a la necesidad que este hombre tiene, se le invita a participar en la solución de su problema, sin exigirle como premisa previa que profese la fe. No es que la Iglesia, al entrar en este diálogo oculte su identidad propia, sino que no hace cuestión de la ideología que pueda tener la persona del necesitado”⁵.

Un largo camino por recorrer

Se ha creado así un vasto movimiento en que participan católicos y no católicos, y que se organiza en función de intentar resolver los más agudos problemas que enfrentan muchos sectores populares. De manera natural, se ha producido una nueva práctica de trabajo común entre miles de cristia-

⁵ “Solidaridad N. 28”; entrevista concedida por el Obispo Auxiliar de Concepción, 1^a quincena Octubre 1977, Mons. Sergio Contreras.

nos y marxistas, por el inmenso peso que tiene la izquierda en los medios obrero y popular chilenos. Esta situación ha tenido sin duda una gran influencia en las poderosas tendencias unitarias que se desarrollan en la oposición de masas antifascista. Atribuimos una enorme importancia, no sólo coyuntural, a la confluencia práctica en función de la defensa de los intereses de las masas populares y de la afirmación de los valores democráticos, que se ha producido en estos años entre miles de chilenos de inspiración y tradición cristiana, con otros ligados al pensamiento y la práctica del movimiento obrero, de inspiración marxista y socialista. Este proceso tiene — y puede tener en el futuro — una notable influencia en la unidad de nuestro pueblo, y en su lucha por conquistar la democracia y transformar la sociedad chilena en el camino de la justicia, la igualdad y la independencia.

Para que ello sea efectivamente así, se requieren esfuerzos tanto de los partidos — y en particular de los obreros — como de la jerarquía de la Iglesia Católica.

Por nuestra parte, debe evitarse con toda decisión la tentación de “politizar” en el sentido estrecho del término, el movimiento de solidaridad; más aún, intentar su instrumentalización con propósitos partidistas. Tentaciones ambas no pequeñas, en circunstancias de tan extrema represión de la actividad y de los partidos políticos. Nuestra actitud es de valoración y de respeto de la autonomía de la actividad solidaria en su propia esfera de acción.

Por otra parte, se nos impone en el terreno de la elaboración teórica desarrollar el esfuerzo ya iniciado — no sólo por nuestro Partido — de adecuar el pensamiento tradicional de la izquierda respecto del papel que puedan jugar las concepciones cristianas y la propia Iglesia en la vida social, a las nuevas experiencias de que somos testigos ⁶.

Desde el punto de vista de la Iglesia, nos parece indispensable que se evite comprometer su influencia y su prestigio — notablemente acrecentado estos años, particularmente en los medios populares — con una determinada concepción, estrategia o partido político.

Hacerlo así, llevaría inevitablemente a graves e infecundas fracturas en la unidad de nuestro pueblo. Hemos vivido en el pasado reciente la experiencia de la intervención activa de la Iglesia en función de un proyecto político concreto — el de la “revolución en libertad” — y a nuestro juicio sus resul-

⁶ Ejemplos de estos esfuerzos de la izquierda chilena son el artículo de Luis Corvalán “La Iglesia Chilena y las Persecuciones Fascistas”, aparecido en el Boletín del Exterior N. 22 del PC de Chile, y el tratamiento del problema de las Iglesias latinoamericanas que hace Carlos Altamirano en su libro “Dialéctica de una Derrota” (Cap. 15).

tados no fueron buenos, ni para el país ni para la propia Iglesia Católica. No estamos para nada entre quienes pretenden reducir la función de las Iglesias al ámbito de las sacristías, pero reivindicamos con fuerza la autonomía de la política y la función de los partidos, como protagonistas principales de la misma.

La D.C. se vuelca a la oposición

Ha jugado un papel destacado, asimismo, en la ampliación de la oposición a la dictadura, las definiciones políticas que ha ido asumiendo la Democracia Cristiana, y que la han convertido en una importante fuerza política de oposición. La actitud opositora de la DC ha ejercido sin duda influencia en las organizaciones y sectores de masas mayormente ligados a ella. Paralelamente, la acción de miles de dirigentes y militantes de la DC en las organizaciones sindicales, en el terreno juvenil y estudiantil, y en el movimiento en defensa de los derechos humanos, ha permitido un crecimiento significativo del movimiento de masas de carácter democrático.

El Movimiento Social Antifascista en el centro de la Lucha contra la dictadura

En la situación actual, el movimiento de masas antifascista es amplio, tanto por los sectores sociales que se movilizan contra la dictadura, como por la orientación ideológica y política de sus componentes. La clase obrera y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, constituyen el pilar fundamental de este movimiento. Durante este año, a través de diversos manifestos, las principales organizaciones han levantado plataformas reivindicativas; han exigido la restauración de las libertades sindicales; y han dado su opinión sobre el principal problema político que enfrenta el país: la necesidad de una profunda transformación democrática. Sus acciones son crecientemente unitarias y combativas. Otro tanto ha ocurrido este año en el terreno estudiantil. En la Universidad de Chile y en otras Universidades del país, se han librado las primeras batallas realmente de masas en torno a la cuestión de las matrículas y de la democratización de la Universidad. Se reactiva, por otra parte, la movilización de los pobladores, a través de sus variadas organizaciones vecinales, de solidaridad y femeninas.

Comienzan a surgir actitudes opositoras en algunos Colegios Profesionales, dominados en los últimos años por direcciones fascistas o reaccionarias. Se asiste al surgimiento de un poderoso movimiento cultural, que en la juventud adquiere características masivas, y que expresa una orientación resueltamente vinculada a la tradición popular y democrática de lo mejor de la cultura chilena.

En suma, la lucha de estos años nos ha demostrado que incluso en las condiciones del fascismo, es posible ir articulando un amplio movimiento democrático, que paso a paso conquista su lugar y una presencia pública en el país; que aísla social y políticamente a la dictadura; que exacerba sus contradicciones internas, e incluso le crea problemas en sus bases mismas de sustentación.

Desde nuestro punto de vista, desarrollar, fortalecer y unificar este poderoso movimiento social antifascista, es la tarea principal del momento que vive Chile. A ella deben dedicarse los mayores esfuerzos de todas las fuerzas democráticas, y en primer lugar los de la clase obrera y el movimiento popular.

Nuestra concepción del frente antifascista

Nuestra política de Frente Antifascista encuentra en el desarrollo de la movilización popular unitaria contra la dictadura, su primera y principal expresión. Hoy día se pretende caricaturizar esta línea, reduciéndola a la búsqueda desesperada de un mero acuerdo a nivel de las direcciones de la UP y de la Democracia Cristiana. Nuestro propósito es mucho más ambicioso. Se trata de desarrollar una nueva alineación de fuerzas sociales, ideológicas y políticas, que se ponga como objetivo la eliminación radical del fascismo del país, y la construcción de una democracia de nuevo tipo. El acuerdo político de las fuerzas democráticas es sin duda un aspecto importante de esta línea, pero entendemos que éste sólo será posible y tendrá un contenido real en la medida en que las principales fuerzas sociales democráticas y sus diversas formas de expresión, recorran un largo camino de lucha y de acción conjunta. La experiencia demuestra que en la medida en que ello ocurre, se van creando las bases y los contenidos de la unidad antifascista. Tomemos por ejemplo lo ocurrido este último tiempo en el movimiento sindical campesino.

Después de un período de relativa inacción, la carta de cuatro organizaciones nacionales campesinas a los Obispos⁷, trasciende con mucho la mera protesta por la situación de las masas campesinas. Constituye una plataforma y un programa, capaz de movilizar al campesinado tras sus intereses, y da las líneas fundamentales para resolver los principales problemas que enfrenta la agricultura del país. La multiplicación de iniciativas de este tipo irá sin duda dando consistencia programática al vasto frente que impulsamos. Es en el terreno de la movilización de masas, por otra parte, donde la clase obrera es

⁷ Documento titulado "Unidad, Justicia y Paz", enviado a la Conferencia Episcopal por cuatro de las principales Confederaciones campesinas de Chile, el 22 de Agosto de 1977, en respuesta a la carta pastoral que esa Conferencia había hecho pública, respecto del problema campesino.
(Publicada in extenso en Resistencia Chilena N. 12).

capaz de derrotar con mayor facilidad las tendencias antiunitarias, que aún se expresan con fuerza en muchos sectores democráticos. Se van creando allí las condiciones subjetivas y políticas que hacen posible superar las divisiones del pasado.

Nuestro énfasis, entonces, en la importancia actual del impulso a la movilización antifascista de los más amplios sectores, no tiene una pura dimensión táctica; no corresponde solamente al hecho de que esta es una de las principales formas de lucha posibles en las circunstancias actuales. Corresponde a una concepción respecto del método que será capaz de terminar con la dictadura y crear las bases de una democracia plena y estable. El bloque de fuerzas que derrotará al fascismo y sobre el cual se cimentará la futura democracia chilena, se construye y se desarrolla de manera principal a partir de la acción práctica común antifascista.

El fascismo es aún poderoso

No debe perderse de vista que los avances logrados este último tiempo en el desarrollo de una oposición de masas, son el producto de duras conquistas del movimiento democrático, y no de concesiones de la dictadura. Esta, por su parte, aunque debilitada, mantiene aún una fuerza considerable, particularmente en el terreno represivo, y hará todo lo posible por impedir el crecimiento de la oposición. Las últimas medidas represivas, que incluyen la relegación de varios de los principales dirigentes sindicales del país, son una constatación clara de este aspecto de la realidad de la lucha actual, y una advertencia para quienes caen en fáciles triunfalismos en base a los avances del movimiento democrático. Estos se dan en medio de la lucha contra una feroz dictadura, y no serán irreversibles hasta el momento en que no sea derrotada.

Los "espacios" políticos

Otro aspecto en que se ha demostrado en este período el crecimiento de la oposición democrática, es la relativa fuerza con que se abre camino la discusión abierta sobre los problemas políticos del país. Cuando en Julio, con el discurso pronunciado en Chacarillas y el anuncio de su programa de institucionalización, Pinochet intentó dar una respuesta a los problemas que sobre el futuro del régimen se venían planteando entre sus propias fuerzas de apoyo, se generó un debate en torno — en esencia — al problema de la democracia, que la Junta fue incapaz de detener. De una u otra forma, participaron en él los sectores oficialistas, la Iglesia Católica, la Democracia Cristiana y el centro político del país, y diversas organizaciones sindicales y ju-

veniles. Obviamente, la izquierda y la Unidad Popular estuvieron ausentes de la expresión tolerada de ese debate. Con todo, este proceso demostró por lo menos dos cuestiones relevantes: primero, el gran aislamiento político de la Junta y su incapacidad para dar una salida con perspectivas a la crisis en que está sumida; en segundo lugar, que se va abriendo camino una convergencia objetiva entre las diversas fuerzas opositoras respecto de algunos elementos programáticos centrales, de una salida política de carácter democrático. Quedó claro, además, que existen condiciones para avanzar con mayor decisión en la conquista de ciertos espacios de expresión independientes del fascismo. Concretamente, para la izquierda y la Unidad Popular. Constituye una tarea actual desarrollar mayores iniciativas en este terreno de la lucha antifascista.

Es en el contexto de esta nueva situación, que se da el problema de la unidad política de las principales fuerzas democráticas. Nuestra posición a este respecto es conocida. Buscamos la convergencia y el acuerdo más amplio posible de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana. Pensamos que existe a estas alturas base suficiente para concordar acciones comunes en todos los frentes de masas, y un programa mínimo de renovación democrática. Ello, en función de la política que tanto nosotros como la Democracia Cristiana, independientemente hemos formulado, particularmente en el último período. No pensamos que un acuerdo explícito entre las principales fuerzas políticas democráticas tenga efectos mágicos, ni mecánicos, ni, incluso, inmediatos. Es evidente que no basta un simple acuerdo para derrocar a la dictadura. Esta caerá como el producto de la acción combinada de una movilización de masas antifascista cada vez más amplia, unificada y enérgica; del desarrollo en el interior de las FF.AA. de sectores que estén dispuestos a poner fin al gobierno de Pinochet y abrir peso a una nueva situación; y del aislamiento y la presión internacionales. Los días de la dictadura se acortarán en la medida en que se avance en estos tres procesos. Es también claro que el problema mayor que enfrentan las fuerzas democráticas es la debilidad con que se desarrollan hasta ahora las fuerzas de oposición a la dictadura en las FF.AA., cuestión que debe estar puesta hoy día con gran énfasis en una política antifascista con perspectivas de éxito. Con todo, nos parece también evidente que el acuerdo de los partidos democráticos constituye un factor decisivo para que la oposición se desarrolle con la fuerza con que potencialmente ya cuenta.

Las posiciones de la D.C.

En función de estas consideraciones es que juzgamos las últimas definiciones políticas de la Democracia Cristiana, que se expresan fundamental-

mente en su documento oficial "Una Patria para Todos"⁸. Compartimos el juicio que ha expresado la Unidad Popular al respecto: "Lo valoramos como una contribución importante en la búsqueda de acuerdos que expresen el sentir de la mayoría de los chilenos, y faciliten la organización de acciones que terminen por convertir en irreversible la actual tendencia de los hechos, claramente adversa al fascismo"⁹. Sin repetir los argumentos ya dados por la Unidad Popular, se desprenden de las posiciones de la DC al menos dos tipos de coincidencias que consideramos importantes. La primera es la urgencia en encontrar una salida política que signifique una profunda renovación democrática del país. En este mismo sentido, se produce consenso respecto de los contenidos principales de la futura ordenación democrática tanto en términos políticos, como de los procedimientos para instaurarla. La afirmación DC de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sirva como criterio básico a la nueva constitución, y una Asamblea Constituyente como la instancia de su aprobación popular, son elementos de convergencia importantes. La segunda es la función que hoy día da la DC al desarrollo de un vasto movimiento social de carácter democrático, que encabece la lucha por las libertades, como se desprende de su proposición de dar forma a un Movimiento Nacional de Restauración Democrática.

Avanzar unitariamente con decisión sobre la base de los consensos actuales

Desde ya, estas convergencias deberían dar lugar a poderosas iniciativas en el terreno de la lucha política y de masas. Existen condiciones para impulsar en el país una vasta y unitaria iniciativa, que convoque a todos los sectores patrióticos a terminar con el Gobierno de la Junta, a establecer un gobierno provisorio que dé garantías democráticas y que se ponga como objetivo principal la organización de una Asamblea Constituyente. Una proposición de este tipo tendrá sin duda profundos efectos en la activación de la oposición antifascista. Desde nuestro punto de vista, ella no agota nuestro programa para esta fase. Hemos planteado muchas veces que los problemas del país son de una magnitud tal que no se resuelven a través de la mera transformación de la estructura política. Es por ello que proponemos un acuerdo de más vasto alcance entre todas las fuerzas democráticas, que contenga junto con la reivindicación de la plena democracia, un programa económico-social capaz de enfrentar globalmente los más agudos problemas nacionales, que se ponga como objetivo destruir la dominación imperialista-monopólica, que está en la base del fascismo y del atraso de Chile. Sin em-

⁸ Documento de la Democracia Cristiana, dado a conocer simultáneamente en Chile y en el exterior, en Octubre de 1977.

⁹ La Unidad Popular al Pueblo de Chile, Octubre de 1977.

bargo, un acuerdo de esta naturaleza no es aún posible. Pensamos, por otra parte, que la liquidación de Pinochet y el establecimiento de la democracia, es la condición indispensable para que las principales fuerzas sociales y políticas puedan avanzar en convergencias sustantivas sobre los innumerables problemas que dejará el fascismo como herencia. Son las condiciones de la democracia política las que permitirán que estas fuerzas se expresen con libertad, demuestren su peso y su influencia real en la sociedad, y sobre esa base establezcan los acuerdos y alianzas capaces de profundizar la democracia y resolver los problemas del atraso y la dependencia. En este marco, además, será posible enfrentar las divergencias y resolverlas sobre la base del diálogo y de la decisión popular.

Otro tanto debería ocurrir en el movimiento de masas. Como hemos intentado demostrar en toda la primera parte de este artículo, lo que la DC denomina un “movimiento de recuperación democrática”, se desarrolla ya con fuerza en el país desde hace bastante tiempo como un poderoso movimiento social antifascistas. Se puede y se debe avanzar en la articulación, incluso orgánica, de sus diversos componentes. Esa es nuestra política permanente, y en este sentido la discusión de la proposición demócratacristiana nos parece interesante y positiva. Subrayamos sin embargo que hay tareas urgentes y concretas respecto de las cuales una actitud común de las fuerzas políticas de la oposición sería de extraordinaria importancia. Nos referimos al problema de la unidad del movimiento sindical, y al desarrollo unitario de las luchas que se están llevando a cabo entre la juventud y los estudiantes. En el movimiento sindical, están ya maduras las condiciones para superar la política de los “grupos” e ir a una coordinación más estrecha del conjunto de las Federaciones y Confederaciones sindicales democráticas que funcionan abiertamente. En el terreno juvenil, pese a las dificultades que crea la inexistencia de organizaciones abiertas y democráticas de tipo gremial, es posible avanzar en la misma dirección. Por cierto, entendemos que el movimiento de masas debe mantener su autonomía respecto de los partidos políticos; pero sin duda una política común de éstos en las cuestiones que señalamos, tendría una evidente influencia en su desarrollo unitario.

El acuerdo político de los partidos democráticos: una cuestión insoslayable

Sin perjuicio de nuestra valoración general positiva de las últimas formulaciones políticas de la DC, nos resulta por lo menos incomprensible su actitud respecto de los partidos políticos democráticos y del indispensable diálogo y concertación entre ellos. En la lucha por la democracia, el papel de los partidos es indiscutible. En la realidad actual, también. Ya hemos destacado el rol que ha jugado la Unidad Popular todos estos años en la lucha antifascista en el país, y es evidente para todos su peso en el terreno de

la solidaridad y las relaciones internacionales. La acción de la DC, por su parte, es también un elemento importante en el actual cuadro político. No es serio, pues, soslayar o minimizar el papel actual y futuro de ellos en la lucha antifascista.

Por otra parte, los partidos políticos chilenos se encuentran profundamente enraizados en la historia social y política del país, prácticamente desde los inicios de su evolución independiente. Han sido los vehículos principales de los intereses y objetivos de las diversas clases, así como de las tendencias fundamentales del pensamiento político. Algunos años de fascismo y represión no serán capaces de destruir esta realidad construida en decenios. Ello no significa que el fascismo sea un mero accidente y que los partidos políticos saldrán de esta experiencia tal y cual eran antes de 1973. Su vigencia futura dependerá en gran medida de su capacidad para “aprender las lecciones del pasado” y para interpretar adecuadamente los intereses del pueblo y de la nación en las nuevas circunstancias. Con todo, se equivocan quienes piensan, superficialmente, que los partidos — en particular los de la izquierda — han perdido vigencia actual y futura. La reciente experiencia electoral de España y el peso que han alcanzado allí las fuerzas políticas históricas de la izquierda española después de 40 años de represión, debería constituir un llamado de alerta al realismo en este sentido.

Las referencias que a este respecto desarrolla el documento que comentamos, son elusivas, no argumentadas, y con proposiciones planteadas en tono más bien negativo. Se afirma, por ejemplo, que la “formación de frentes tradicionales, inevitablemente dirigidos desde el exterior, no ayuda a la causa de la restauración democrática”. No se explica porqué dichos frentes serían tradicionales, ni en virtud de qué consideraciones deberían dirigirse desde el exterior. En otro párrafo se sostiene que “a los partidos políticos se les propone que reflexionen sobre la naturaleza de la situación actual, la que no admite ni particularidades ideológicas ni dogmas. Ellos pueden concentrarse en la gran tarea de pasar a un período de restablecimiento de las libertades, dentro del marco de una sociedad democrática, y no obstaculizar la libre unión del pueblo chileno”. Que nosotros sepamos, la libre unión de muchos sectores democráticos en el país ha sido obstaculizada precisamente por actitudes políticas que en no pocos casos han venido de la Democracia Cristiana, más que por la espontaneidad del pueblo que, al contrario, tiende a enfrentar unido los problemas comunes. Esta suerte de llamado a la inactividad de los partidos, por otra parte, queda desmentida por la propia práctica de la DC, especialmente durante los dos últimos años. Se pretende, por fin, sustituir a los partidos por el movimiento social de carácter antifascista, en circunstancias de que la práctica común de estos años demuestra precisamente que la actividad de los partidos es un factor que impulsa y no frena el movimiento social de oposición.

Son varias las razones posibles de esta omisión tan importante en el di-

seño político de la Democracia Cristiana. Al intentar desconocer la existencia real de la Unidad Popular, es posible que la Democracia Cristiana quiera evitarse los problemas que, sin duda, le crea el diálogo político en la perspectiva de un acuerdo con quienes han sido tradicionalmente adversarios suyos. Intentar evitarse estos problemas significa no haber aprendido la cuestión básica de que una de las razones principales que condujeron a la destrucción de la democracia chilena, fue precisamente la incapacidad de muchas de las fuerzas democráticas de advertir el peligro del fascismo y de enfrentarlo unitaria y consecuentemente.

Por otra parte, muchas veces hemos escuchado el argumento de que el diálogo abierto de la DC con la Unidad Popular le restaría audiencia y capacidad de influencia entre la disidencia militar. Si esta fuera la razón para postergar un acuerdo político indispensable sobre cuestiones en las que ya hay consenso, correspondería a un cálculo estrecho y a nuestro juicio equivocado. Sin duda, hay militares que no estando completamente de acuerdo con Pinochet y su política, mirarían de mal manera un entendimiento de todas las fuerzas democráticas. Son quienes sueñan con la posibilidad de salir de la crisis a través de un intento de "democracia restringida", a la brasileña. Lo que no queda claro es cómo un acuerdo con tales militares puede servir al propósito expreso de la DC de la restauración democrática plena. El cálculo es equivocado porque los sectores militares que están por abrir camino a una nueva situación política, de una u otra manera perciben con claridad que no habrá paz, estabilidad ni democracia en Chile, sin el acuerdo de todas las fuerzas democráticas, que expresan a la mayoría abrumadora del país. Y para esos militares, que son los que interesan desde el punto de vista de la lucha democrática, no cabe duda que la explicitación política de los consensos que ya existen en la oposición democrática, sería un factor de estímulo, ya que la oposición aparecería con la fuerza suficiente, tanto para enfrentar al fascismo como para crear las bases de un régimen de reemplazo.

Es por todo ello que reiteramos una vez más nuestra disposición a la concertación política con la Democracia Cristiana. En este proceso, cada cual asumirá sus responsabilidades frente a nuestro pueblo y su historia. Por nuestra parte, seguiremos agitando la necesidad de una tal política en todo nuestro trabajo, especialmente entre las masas.

Poner a la U.P. a la altura de los desafíos

La nueva situación política creada, nos plantea como Unidad Popular inmensos desafíos. El principal de ellos es incrementar de manera sustantiva nuestra presencia orgánica, política y de masas en el país, así como nuestra acción conjunta en los diversos frentes en los que hoy día se desarrolla ¹

lucha antifascista. Pensamos que en función de esta necesidad debe orientarse lo principal de nuestros esfuerzos comunes. Sólo una presencia activa de la clase obrera, de los trabajadores y de sus vanguardias políticas, será capaz de extraer de la actual situación todo su potencial democrático y antifascista. La hegemonía a la que aspiramos legítimamente, sólo se conquistará en la medida en que seamos capaces de ser los más numerosos, activos y resueltos en la lucha por derrocar a la dictadura, y crear una nueva democracia.

Nos parece que otro aspecto fundamental de nuestra política en las presentes condiciones, es avanzar en las formulaciones programáticas de la UP. La clase obrera y los trabajadores conquistarán el papel que les corresponde, en la medida en que sean capaces de ofrecer una alternativa política al fascismo, que permita resolver los principales problemas de la nación, comprometer al conjunto de las fuerzas democráticas, y señalar su perspectiva socialista. En este terreno, si bien se ha avanzado, nos parece que aún tenemos deficiencias y, en algunos casos, existen problemas que aún no nos hemos planteado. En síntesis, pensamos que debemos perfilar los rasgos básicos de la perspectiva actual y futura que la izquierda y la Unidad Popular le propone al conjunto del pueblo para superar la crisis histórica de nuestro país.

Nuestra lucha en el terreno internacional sigue teniendo una gran importancia. El aislamiento internacional del fascismo constituye una de sus debilidades sustantivas. En las actuales circunstancias internacionales es posible profundizarlo aún más. El trabajo paciente, tenaz y continuado del exilio chileno, dirigido políticamente por la UP, es un factor fundamental para conseguir este objetivo. Debemos insistir en nuestra línea de incorporar con la mayor amplitud a todas las fuerzas democráticas y antifascistas a las tareas de la solidaridad internacional, convirtiendo también este frente de lucha en lugar de encuentro y acción común de todos los demócratas. Al mismo tiempo, el apoyo a la lucha de la resistencia en el país, debe ponerse a la altura de sus crecientes necesidades de todo tipo. Existe también en el exterior la posibilidad de realizar una contribución importante a las formulaciones programáticas indispensables de la Unidad Popular. En el desarrollo de estas líneas de trabajo, se ha venido avanzado sostenidamente, sobretodo después de la creación de la Secretaría Ejecutiva de la UP en el exterior, en 1976.

Quisiéramos esta vez enfatizar solamente dos aspectos del trabajo exterior de la UP, que deben merecer creciente atención.

Uno, es el problema nacional de las dimensiones que ha adquirido el exilio chileno, tanto político como económico, y que se estima en un 10% de la población total del país. Está planteada la urgencia de diseñar una política y una acción coherente y global para enfrentar los múltiples problemas de esta inmensa masa de compatriotas esparcidos en todo el mundo. En su centro, debe colocarse el desarrollo de una gran batalla — nacional e

internacional — por conquistar el derecho de vivir en la propia patria.

El otro, es el impulso a nuestro trabajo y presencia internacional en el ámbito latinoamericano. Hasta ahora, estos han estado constreñidos, en una buena medida, por la situación política regresiva que caracteriza al continente. Con todo, nuestra experiencia es categórica en el sentido que la articulación de las fuerzas populares, democráticas y revolucionarias de América Latina, es una necesidad para enfrentar adecuadamente la lucha antiimperialista. En muchos países se van evidenciando los primeros síntomas de que el proceso de profunda regresión política y social que ha caracterizado a estos últimos años, comienza a tocar fondo. Ello hace más urgente aún avanzar con rapidez en el desarrollo de las indispensables vinculaciones de las fuerzas democráticas y antiimperialistas del continente en todos los planos. La izquierda chilena, y en particular la Unidad Popular, por el nivel de unidad política que han alcanzado en el país las fuerzas obreras y populares, y por su activa presencia internacional, puede — y debe — jugar en este proceso un papel destacado.

☆ ☆ ☆

ALGUNOS PROBLEMAS DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA (1ª Parte)

José Miguel Insulza

1.— Dos debates sobre la Institucionalidad

La nueva institucionalidad es el tema de hoy en Chile. A pesar de los plazos y normas fijados por Pinochet para la aprobación de una constitución que debería perpetuarlo en el poder, el debate se desarrolla con más rapidez y en términos mucho más amplios que los que el dictador quisiera.

El interés real de todos por “institucionalizar” parece genuino. La razón es obvia: en Chile no existe hoy institucionalidad, sino arbitrariedad. En otras palabras, mientras subsista un sistema en el cual la Junta Militar controle tanto la facultad de reformar la Constitución como la de dictar leyes y en ambos casos lo pueda hacer incluso con efecto retroactivo, la precariedad de todas las instituciones, incluso de los organismos del Estado, es evidente. La “institucionalización”, entendida como la formulación de un conjunto de normas e instituciones estables, que regulen la actividad del Estado y sus relaciones con los ciudadanos, aparece hoy como una necesidad tanto para aquellos que están excluidos del poder como para los que, usufructuando de él, se percatan, con razón, de que este orden arbitrario y unipersonal no puede continuar indefinidamente.

La discusión abierta entre los partidarios de la dictadura, tiene dos bandos: unos quieren consolidar lo existente, mantener el poder unipersonal, dilatar cualquier descentralización, conservar la prohibición sobre cualquier forma democrática de representación política, y mantener el rol permanente de los altos mandos militares sobre el Gobierno y la dirección del país. Otros, por diversas razones, buscan una apertura más que formal que podríamos llamar genéricamente “democratización a partir del actual régimen”. Se trata, en este caso, de avanzar paulatinamente hacia formas de Gobierno civil, en los marcos de una democracia restringida, conservando un rol para las Fuerzas Armadas que les permita arbitrar los conflictos entre los titulares formales de poder e intervenir directamente cuando la estabilidad del régimen se vea amenazada.

Por cierto, las dos posiciones coinciden en términos gruesos con los sectores de la burguesía que hoy tienen la mayor influencia y con los que, por el contrario, se sienten desplazados de toda ingerencia en la conducción de la economía y en la toma de decisiones a nivel de Gobierno. Entre estos la discusión no es sino un debate pragmático: el hecho de que el anuncio de Pinochet haya sido bien recibido por Jaime Guzmán y rechazado por Pablo Rodríguez, que argumenta ahora a favor de los partidos políticos, no engaña a nadie acerca de los sentimientos democráticos de este último. Lo que ocurre es que uno tiene acceso directo a Pinochet y el otro ha sido totalmente desplazado. No es extraño, pues, que Guzmán se ponga de parte de quienes quieren institucionalizar lo existente y Rodríguez, en cambio, abogue por formas más amplias de participación, conservando no obstante su adhesión absoluta al fascismo.

Pero el debate no se limita, como quisieran Pinochet y la Junta, a la “institucionalización” del régimen existente. En la medida en que la división de los grupos dominantes abre la puerta al tema, por ella pasan también de manera cada vez más abierta grupos, sindicatos, personalidades, instituciones, que en creciente número se pronuncian por un verdadero retorno del país al sistema democrático¹. Todo aquel que puede hacerlo, de manera formal o informal, ha participado en esta instancia. Sus posturas, por diversas que a veces sean, van dejando en claro un punto central: no es posible desarrollar la democracia en Chile a partir de la actual situación, es decir como una evolución llevada a cabo por los militares titulares del poder. Tal premisa es inaceptable, no sólo porque Pinochet ha declarado reiteradamente su propósito de institucionalizar *su* régimen antidemocrático, sino porque si-

¹ Véase, entre otros, el documento que 479 organizaciones sindicales hicieron llegar a los Miembros de la Junta el 30 de Agosto pasado (Reproducido en Resistencia Chilena N. 12, págs. 79 a 91); la carta que los Presidentes de cuatro Confederaciones campesinas dirigieron a los Obispos de Chile, del 22 de agosto (id. págs. 92 a 98); y la carta que varios cientos de jóvenes dirigieron a Pinochet el 19 de agosto (Chile-América 35-36, págs. 141-142).

gnifica pretender que quienes han usurpado el poder, destruido la democracia, asesinado al Presidente de la República, y violado la Constitución y las leyes del país, dicten a su arbitrio las normas de una institucionalidad democrática. La única institucionalidad que es posible esperar de Pinochet es aquella que debe perpetuarlo en el poder. Hay, por lo tanto, dos debates distintos y la línea divisoria a veces confusa — por el cuidado que deben tener quienes expresan su opinión públicamente — separa a los que quieren mantener o modificar el actual orden de cosas y los que están dispuestos a romper definitivamente con él como condición esencial para el establecimiento de una democracia real.

2.— Un Punto de Partida

Construir una nueva institucionalidad sobre las ruinas dejadas por el fascismo no será tarea fácil. Menos aún lo es poner de acuerdo a la variedad de fuerzas que profesan hoy una línea democrática. Por una parte, la imposibilidad que algunos enfrentan — en concreto los Partidos de la UP — para participar en el debate abierto hace que sus proposiciones no lleguen a la opinión pública con la claridad y oportunidad necesaria; menos aún cuando hay siempre quien se encarga, por cuenta del fascismo, de tergiversarlas o esquematizarlas. Además, las principales fuerzas que podrían participar en un diálogo de esta índole suman a su diversidad ideológica la suspicacia y la desconfianza que es producto de un pasado de enfrentamientos. La mejor demostración de esta dificultad está en el hecho de que allí donde tal diálogo sería posible, — en el exterior, p. ej. — sólo se ha logrado en instancias limitadas (*) y esporádicas, como la reunión de Colonia Tovar (Junio de 1975) y el Seminario de Nueva York (Septiembre de 1976). Sin negar el mérito de tales iniciativas y el gran valor de sus resultados, no cabe duda que el diálogo que hoy se requiere es mucho más amplio y continuado. Elaborar y discutir sobre los temas de la nueva institucionalidad es fundamental no sólo para el futuro político de Chile, después del fascismo, sino también imprescindible para la lucha política de hoy. En efecto, no es posible acumular la fuerza necesaria para terminar con la dictadura si no se entrega claridad suficiente acerca de lo que vendrá después. Pinochet y su camarilla combaten su aislamiento echando mano al recurso de la incertidumbre; después de ellos vendría solo el caos y la anarquía. El argumento es particularmente fuerte para los militares y para parte de los sectores medios en los que el problema del orden tiene siempre un gran peso.

(*) Limitadas en el sentido de que reunían, de manera no oficial, a militantes de un sector del PDC y de algunos Partidos de la UP, todos ellos residentes en el exterior.

No obstante, algo se ha avanzado, particularmente en el último año. En la Unidad Popular se ha iniciado ya un trabajo de elaboración sobre los aspectos centrales de la nueva institucionalidad. Crecientemente los documentos oficiales y las publicaciones de los Partidos contienen proposiciones más concretas sobre lo que deberá ser el Chile del futuro². Igualmente los documentos más recientes del Partido Demócrata Cristiano avanzan sus opiniones sobre algunos aspectos fundamentales del problema³. Finalmente, en los marcos del debate abierto en Chile se refieren a estos temas diversas personalidades e instituciones⁴. La necesidad de pronunciarse sobre las propuestas que se avanzan en todo este tipo de materiales es evidente, toda vez que ellas se insertan en un desarrollo creciente de la lucha democrática del país, que crea posibilidades reales de concretar determinados objetivos en plazos más breves.

Se une a esta preocupación paralela de las fuerzas que postulan la democracia, el hecho de que, a lo largo del debate, vayan apareciendo coincidencias objetivas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la consigna de la Asamblea Constituyente, sobre la cual van expresando opiniones favorables las fuerzas políticas tanto de izquierda como de centro. Estamos de acuerdo con esa proposición. El concepto esencial que está implícito en ella es que toda formulación acerca de la nueva institucionalidad requiere una instancia concreta en que, desde el punto de vista político y jurídico, se opere el traspaso de un régimen de facto a un régimen de derecho. Tal momento no puede ser otro que una Asamblea Constituyente elegida soberanamente por sufragio universal y secreto, de la cual emanen las normas fundamentales de la misma institucionalidad.

3.— Las Etapas del Proceso de Democratización

Pero si la Constituyente es, objetivamente, un primer punto de acuerdo posible de las fuerzas democráticas y debe marcar la puesta en marcha de un nuevo orden institucional, no es en caso alguno el punto de partida del proceso democrático. En la medida en que exista acuerdo en que no es

² Véase el Informe de Luis Corvalán al Pleno del Partido Comunista (Boletín Exterior del P.C., N. 26); los acuerdos del Pleno del Partido Socialista en el interior (Chile-América 35-36, pag. 111); la Declaración de la UP del 31 de Octubre (La UP al Pueblo de Chile); el "Mensaje a los Socialistas en el Interior de Chile", de Carlos Altamirano (Orientación, órgano oficial del P.S., N. 21).

³ Véase los documentos firmados por Andrés Zaldivar y Tomás Reyes con motivo del Consejo Nacional de la DC, en Diciembre de 1976 (Chile-América 31-32) y la reciente declaración del PDC (Una Patria Para Todos, Chile-América 35-36, Pags. 75-79).

⁴ A las numerosas declaraciones y artículos aparecidos en órganos de prensa, se agrega en el plano de las publicaciones una reciente del Centro de Investigaciones Socio-Económicas

la Junta la llamada a institucionalizar la democracia, se hace evidente que corresponderá a alguna forma de poder de facto el actuar en un período de “transición” entre el fin de la dictadura y la aplicación de la Constitución fijada soberanamente por la Asamblea y ratificada en plebiscito.

Es posible, por lo tanto, distinguir al menos dos períodos en el retorno del país a la institucionalización democrática. Uno de facto, (el período de “transición”) y otro que se caracteriza por la puesta en marcha de las nuevas instituciones. La Asamblea Constituyente marca el punto de división entre ambas etapas.

Al primer período se refiere — sin llamarlo así — la Democracia Cristiana en su reciente declaración, al hablar de “las etapas de la restauración democrática”:

“La primera (fase) está constituida por el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales, en particular los que se refieren a la libertad personal. Esto significa:

1) Dejar sin efecto las disposiciones sobre el estado de sitio y zona de emergencia.

2) Normar las actuaciones de los organismos policiales de inteligencia o información, de conformidad a los principios del estado de derecho debiendo mantenerse en forma estricta la responsabilidad penal, judicial, administrativa y moral de sus funcionarios.

3) Restituir integralmente la libertad de expresión, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, esto es, derogando o haciendo inefectivas las disposiciones de decretos leyes, resoluciones, instrucciones o bandos militares que puedan haberse dictado, como asimismo quitando toda atribución a organismos de estado para aplicar censuras o sanciones a los medios de comunicación”⁵.

Sólo después de esta fase ubica la DC la Asamblea Constituyente, dejando ambigua la autoridad que debe llevar a efecto la transición (“una autoridad administrativa abierta a tales finalidades”). La frase, unida a otros textos igualmente poco claros⁵, deja dudas razonables acerca de si la DC cree aún que la Junta puede tener alguna participación en la transición. Sobre este punto no pueden haber contradicciones ni ambigüedades. La primera característica del período de transición es que la autoridad que lo preside es una autoridad democrática. Aunque se trate de un Gobierno de hecho, su acción no está marcada por la arbitrariedad sino por la naturaleza

misma de los objetivos que persigue. No podría, pues, entenderse un Gobierno de transición que no base su acción, por ej., en el respeto irrestricto de los derechos humanos y que no tenga en cada una de sus acciones una actitud democrática.

No descartamos en caso alguno que la autoridad provisoria esté constituida en parte por miembros de las Fuerzas Armadas que hayan probado en los hechos, rompiendo con Pinochet y el fascismo, su vocación democrática. Por el contrario, pensamos que el concurso de tales elementos es decisivo para garantizar la fuerza necesaria en un período inestable y difícil. Lo que interesa recalcar no es el carácter civil o militar del gobierno transitorio, sino su ideología democrática, que lo constituye en el opuesto de la actual dictadura fascista.

En cuanto a su composición, hemos dicho numerosas veces que a nuestro juicio todas las fuerzas políticas y sociales que participen en el derrocamiento de la dictadura, deben formar parte del gobierno de transición. Identificamos nuestra opinión sobre dicho gobierno con nuestra línea de frente antifascista: la misma amplitud que damos al frente debemos dar al gobierno que suceda a la dictadura.

En cuanto al término de su acción, el gobierno de transición debe preparar, convocar e instalar una asamblea constituyente y entregar el poder a las autoridades que se elijan de acuerdo a la nueva constitución. Pretender extender más de lo necesario el período de transición sólo serviría para aumentar la incertidumbre y dilatar el retorno del país a la normalidad democrática.

En todo caso, en la transición se presentan, de hecho, problemas jurídicos e institucionales que es imprescindible resolver. Como lo señala la propia cita del documento DC, hay cuestiones que no pueden postergarse hasta la nueva institucionalidad, como el fin de los estados de sitio y de emergencia, el restablecimiento de las libertades individuales, el desmantelamiento total del aparato represivo, etc. El restablecimiento de los derechos políticos, de las libertades de prensa, reunión y asociación, la legislación y actividad de los partidos, el montaje de un sistema electoral mínimo, el castigo a los cabecillas del golpe, el establecimiento de responsabilidades por los crímenes cometidos contra las personas, etc., son también cuestiones que, por lógica elemental, no pueden sino ser abordadas en el período de transición. No obstante, pensamos que ello no debe llevarnos a la tentación de dedicar largos debates a la transición y elaborar detallados programas para enfrentarla. La respuesta a los problemas institucionales de la transición no puede ser dada aparte de una proposición general sobre la nueva institucionalidad en la cual esos problemas encontrarán solución definitiva. Lo contrario — distinguir proposiciones institucionales para la transición y para la nueva institucionalidad — da la impresión de que se postulan dos criterios diversos para el Chile post fascista: uno para el poder de

(CISEC) institución de Iglesia, que publica un libro en que, bajo el título de “Futura Institucionalidad de la Paz en Chile”, nueve autores de muy diversas corrientes ideológicas exponen sus opiniones sobre el tema. (Edición Privada del Centro Belarmino).

⁵ “Una Patria Para Todos” (Cit. Pag. 77).

facto, otro para la legitimidad democrática. Lo cual en el ambiente de suspicacia que aún reina entre las fuerzas democráticas, es un grave error.

Lo dicho hasta aquí dice relación con la limitación explícita del tipo de medidas institucionales que atañen a un gobierno de transición. Ello no significa que imaginemos una especie de poder destinado exclusivamente a preparar una institucionalidad, haciendo caso omiso de los problemas que en otros campos enfrenta el país en este período. Aunque sea redundante, es preciso aclarar que todo gobierno, de cualquier naturaleza, debe gobernar efectivamente el país por el período en que le corresponde actuar. Los criterios económicos y sociales que deben presidir su acción en otros terrenos, siendo esenciales a la formulación de un programa coherente para la recuperación del país, exceden, en todo caso, los límites que hemos fijado a este trabajo.

Desde nuestro punto de vista, en resumen, el poder transicional que se establezca a la caída de la dictadura debe orientarse principalmente, en el plano institucional, a la restauración de los derechos humanos, garantías individuales, derechos políticos y libertades sindicales; a poner de nuevo en marcha las organizaciones y partidos democráticos; y a convocar en plazo breve a una Asamblea Constituyente, elegida por sufragio universal, directo y secreto, que dicte una nueva constitución, sancionada por un plebiscito.

A partir de ello, es necesario entregar los elementos generales de nuestra propuesta institucional, que deberían a nuestro juicio orientar el nacimiento en Chile de una nueva democracia.

4.— Los problemas de la nueva institucionalidad

La discusión sobre la nueva institucionalidad debe necesariamente partir de una definición general de lo que cada cual pretende de ella. En lo que respecta a nuestra posición, no creemos que puedan existir dudas. Ella fue formulada con claridad poco tiempo después del golpe militar:

“Desde el punto de vista del programa, el derrocamiento de la dictadura y la destrucción del estado totalitario y policial que ésta ha constituido, supone su sustitución por un estado de nuevo tipo, un estado democrático. No se trata, sin embargo, de postular hoy día la simple restauración de la organización estatal democrática que Chile tuvo hasta el 11 de septiembre. La vieja institucionalidad ya está superada por la historia. Muchos de sus pilares, como la organización de la justicia, por ejemplo, son instrumentos de la política y del estado fascista.

Se trata de construir una nueva institucionalidad, profundamente democrática, pluralista y popular, en la que se respeten las libertades públicas individuales, se reconozcan los derechos conquistados por

los trabajadores en sus largas luchas, se asegure una real participación del pueblo en la conducción efectiva del país, y se elimine para siempre el fascismo”⁶.

Estos dos párrafos contienen la línea que sobre esta materia propuso el Partido en un documento redactado en diciembre de 1973 y aprobado, en la clandestinidad, por el Comité Central en Febrero de 1974.

Recordemos que en esa época algunos que hoy adhieren con sinceridad a la democracia — y hacen de ella cuestión de principios — tenían reservas respecto a ella, y justificaban la violenta ruptura de la institucionalidad de pocos meses antes. Al decirlo no nos anima un espíritu polémico o reivindicativo, sino sólo mostrar cómo nadie tendría títulos para dudar de lo que hoy postulamos, que es idéntico a lo que proponíamos en los momentos de mayor represión y predominio fascista.

Los párrafos citados plantean, además, con plena vigencia actual, los principales problemas que es preciso resolver en el nuevo orden institucional, si éste ha de ser verdaderamente democrático. Estos problemas son, a nuestro entender, cinco: a) El problema del pluralismo; b) El problema de la participación; c) El problema de la homogeneidad democrática; d) El problema de la fuerza; e) El problema del desarrollo.

5.— Democracia y Pluralismo

Hasta ahora no existe nadie en el campo democrático que no haya afirmado el carácter pluralista que la nueva institucionalidad debe tener. No obstante, la cuestión es más compleja de lo que parece. En términos ideales podemos compartir las palabras de Claudio Orrego cuando define la actitud pluralista como “el estar dispuesto a compartir con los demás un punto de vista en condiciones de igualdad y respeto”⁷. En el plano institucional, este primer nivel del pluralismo consiste en la posibilidad de profesar y difundir las propias ideas que se garantiza cada individuo. No obstante, es esta una definición limitada e incompleta, desde dos puntos de vista: por una parte, la opción ideológica no es por lo general puramente individual; el pluralismo debe también expresarse en la aceptación de todas las corrientes ideológicas organizadas que existen en el seno de la sociedad democrática. Nada sacamos con garantizar al individuo su libertad ideológica, si se ponen trabas a su asociación con otros individuos para promover sus ideas en el seno de la sociedad.

⁶ “Las Tareas del Pueblo en la Hora Presente”. Documento del Comité Central del MAPU O-C, Febrero 1974, pag. 28.

⁷ “Futura Institucionalidad de la Paz en Chile”. Prólogo. Pag. 8.

En segundo lugar, la mera garantía de las libertades de pensamiento, expresión y asociación, no basta para configurar un efectivo pluralismo. Este sólo existe cuando el Estado, la institucionalidad democrática, crea condiciones reales de igualdad para que todas las opiniones se expresen efectivamente en el proceso político.

En la medida en que el estado democrático garantice estas tres dimensiones del pluralismo — la libertad individual, la expresión libre de las organizaciones y la igualdad efectiva de las posibilidades de expresión — se podrá hablar de pluralismo efectivo.

Surgen de inmediato dos preguntas: ¿cómo garantizar efectivamente la expresión de todas las corrientes de opinión? y ¿cuáles serían — si las hay — las limitaciones al pluralismo?

La primera pregunta dice relación con el predominio de determinadas posiciones ideológicas en la actividad del estado y con el control que determinados grupos — sobre la base del poder económico — ejercen sobre los medios de comunicación social.

Toda forma estatal expresa en alguna medida una ideología, tanto en su forma de organización como en el modo en que se desarrolla su actividad en diversos planos. En algunos casos dicha ideología es adoptada de manera oficial: en otros, existiendo una garantía formal de neutralidad, la ideología dominante se expresa en la educación, en las manifestaciones culturales, en las medidas represivas, en suma, en las múltiples actividades que el estado moderno ejerce en el plano de la socialización de las ideas. Por ejemplo, la libertad de pensamiento, de asociación y de expresión están plenamente garantizadas en la constitución de los EE.UU. de América; lo cual no significa que en la práctica ciertas formas ideológicas, sobre todo las que profesan el cambio del sistema o su transformación, no estén en evidente desmedro, sea por la vía institucional — sistema electoral que privilegia a dos formaciones partidarias del sistema — por la vía represiva — baste recordar todas las recientes revelaciones acerca de la acción del FBI en contra del movimiento pacifista — o por medio de una cantidad de mecanismos de expresión que terminan por hacer del capitalismo la ideología oficial y de su defensa la medida del patriotismo.

El mismo ejemplo, en un país donde no se discute la existencia bicentenaria de una democracia formal, nos sirve para ilustrar el segundo aspecto de la cuestión. En una nación con más de 200 millones de habitantes nadie está en condiciones de difundir sus propias ideas masivamente de modo de disputar una hegemonía sobre la sociedad, a menos que cuente con los medios de comunicación suficientes, lo cual supone un poder económico al alcance de pocos. En la medida en que sólo determinadas posiciones tienen expresión en los medios de comunicación, y que éstos transmiten por lo general mensajes que responden sólo a algunas concepciones, el pluralismo efectivo no está garantizado.

Con todo, esa situación de limitación no es ni siquiera comparable al caso de nuestro país, donde a la inexistencia de toda libertad de pensamiento, expresión o asociación, se unen el absoluto predominio de la ideología fascista sobre los medios de socialización del aparato estatal — educación, cultura, televisión, universidades, etc. — y el control por la burguesía monopólica dominante de casi todos los medios de comunicación privada. Pasar de este extremo a uno de pluralismo, aunque sea imperfecto, tiene numerosas dificultades, entre las cuales está la desconfianza de ciertos sectores democráticos ante cualquier ingerencia reguladora sobre los medios de comunicación y la mella que en los sectores medios han hecho cuatro años de prédica fascista y “antipartidista”. No obstante, creemos que el esfuerzo por abrir la organización estatal y los medios de comunicación y socialización del país a una pluralidad de formas ideológicas, es un requisito sustancial de la institucionalidad democrática.

Lo dicho puede parecer una ingenuidad o al menos una aberración teórica. La pretensión sería suponer para Chile un estado no ideológico, lo cual en buenas cuentas significaría un estado que supere el contenido de clase para ser absolutamente neutral. Por el contrario, postulamos un estado con una definición ideológica clara, que pretenda hegemonía sobre la sociedad: es un estado democrático, y hablar de ideología democrática en el Chile de hoy no es hablar de una generalidad o de un concepto obvio. El nuevo estado debe expresar en su institucionalidad el postulado central de nuestra lucha en esta etapa: unir a todas las fuerzas antidictatoriales para eliminar el fascismo y construir una nueva democracia. En ese sentido el nuevo estado es una prolongación institucional de las fuerzas que contribuyen a la caída del fascismo. Esta realidad debe quedar plasmada en su acción. La difusión en los medios de comunicación, en la educación, en la política cultural, de la ideología democrática, es una tarea necesaria si el estado ha de consolidar su institucionalidad. “Las instituciones del estado no serán doctrinariamente neutras. Al contrario, tendrán una clara filosofía democrática y antifascista. Ella se declarará por la constitución y se impartirá en la educación pública y privada y deberá impregnar el cuerpo institucional y social”⁸.

La cita anterior nos introduce en la respuesta a la segunda pregunta, sobre las limitaciones al pluralismo. Se trata en concreto de saber si cualquier opinión o concepción es aceptable en virtud del pluralismo. Los distintos niveles que hemos usado para los párrafos anteriores nos serán útiles para definir la cuestión. En primer lugar, digamos enfáticamente que consideramos que la libertad de pensamiento y opinión no debe, a nuestro juicio, admitir excepciones. No somos partidarios del delito de opinión, por conde-

⁸ Julio Silva Solar. “Notas Sobre un Proyecto Político”, documento presentado al Seminario de Nueva York. (Chile-América 25-26-27, pag. 68).

nables que nos parezcan ciertas opiniones desde el punto de vista de nuestras ideas. El problema comienza en realidad cuando se trata de organizaciones creadas y acciones llevadas a cabo con el objetivo preciso de destruir la democracia. Le eliminación de esas organizaciones y la supresión de esos actos — excluimos por cierto los claramente delictuales que se castigan en cuanto tales — ¿forma parte del legítimo derecho de defensa del estado democrático o constituye una limitación antidemocrática del pluralismo político?

Hay quienes levantan hoy esta cuestión en relación al carácter antifascista que nosotros, entre otros, damos al nuevo orden democrático. Para ellos hablar de antifascismo es dar pábulo al odio y la represión ideológica. En realidad, el término sería casi redundante — el fascismo es la antítesis de la democracia — si no fuera porque indica una imperiosa necesidad de lucha en la nueva democracia. La monarquía y la esclavitud son también, como el fascismo, antagónicos con la democracia. Sin embargo, a nadie se le ocurriría definir la nueva democracia en Chile como “antimonárquica” o “antiesclavista”. Por que el problema de Chile hoy no es la existencia de grupos monárquicos ni esclavistas; el problema es que el país ha vivido ya cuatro años de fascismo y probablemente deberá vivir algunos más. No estamos, pues, en presencia de una mera concepción ideológica, sino de una realidad muy concreta, de una forma de práctica política antidemocrática que es responsable de la mayor tragedia de nuestra historia. En la política concreta del nuevo estado para la construcción de la democracia, la erradicación del fascismo presente en todos los ámbitos de la sociedad, adquiere importancia capital.

Desde luego, somos partidarios de que el estado tenga facultad para impedir la creación de organizaciones fascistas, dedicadas a la destrucción de la democracia. Pero el problema del fascismo no se resuelve sólo ni principalmente a través de medidas represivas. La cuestión principal es si el estado democrático es capaz de transmitir y socializar su ideal democrático a todo el conjunto de la sociedad de modo de convertir la adhesión a la democracia en una adhesión activa de masas. En suma, la acción antifascista del estado democrático no se mide por su eficiencia en castigar a los fascistas o impedir su organización, sino por su capacidad de aislarlos ideológica y políticamente de manera creciente, hasta su total desaparición.

6.— El Problema de la Participación

Al comienzo de este capítulo, señalábamos que la “representación” en la democracia obedece a la imposibilidad que en las actuales condiciones históricas tienen los ciudadanos de un estado moderno de ejercer directamente el poder. De este modo, el poder lo ejercen representantes elegidos

por los ciudadanos, quienes “participan” en su sola generación y no en su ejercicio real.

Sin embargo, un sistema mediante el cual los individuos votan cada cierto tiempo para elegir, es un sistema que de hecho da una participación puramente formal. En la práctica, las instituciones así generadas serían demasiado débiles para llevar a cabo el proceso de democratización real de la sociedad en todos sus niveles.

De allí el papel fundamental que tienen en una efectiva democracia las organizaciones intermedias, que por una parte sirven de nexo entre el estado y el ciudadano y por otra constituyen en su conjunto el tejido social y político que puede hacer de la democracia un sistema sólido. Al hablar de organizaciones intermedias no nos referimos a las formas de poder estatal intermedio — que veremos a continuación — sino a aquéllos órganos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones vecinales, que representan posiciones ideológicas, de clase, o intereses determinados.

El tema tiene vigencia por la sencilla razón de que en el colapso de la antigua institucionalidad democrática, son sin duda este tipo de organizaciones las que han mantenido la mayor solidez para enfrentar la embestida antidemocrática. La reorganización y actividad clandestina de los partidos, la acción de las iglesias, la lucha de los sindicatos, la solidaridad de las organizaciones vecinales, son la base de lo que es hoy en Chile el movimiento democrático. Sería absurdo pensar en una nueva democracia que al restablecer la formalidad de la superestructura, desconociera o disminuyera el rol de estas organizaciones.

Lo dicho nos plantea el problema de encontrar formas concretas de integrar las organizaciones intermedias a los mecanismos de dirección del aparato estatal, sin por ello desvirtuar la autonomía que deben mantener para cumplir su papel efectivo. Las respuestas serán variadas según el área de problema y el tipo de organización. Lo importante es evitar la tentación de proponer formas de organización y participación que, siendo coherentes con otras realidades, pierden de vista lo que ha sido la experiencia de los trabajadores chilenos.

El examen cuidadoso de las experiencias históricas desarrolladas en nuestro país en materia de participación y la proposición de formas de desarrollarla efectivamente en el nuevo Estado es una de las principales líneas de trabajo para el diseño de una nueva institucionalidad. Nuestra posibilidad de profundizar el programa democrático y avanzar hacia la transformación de la sociedad con sentido socialista está ligada en medida importante a nuestra capacidad de extender la práctica democrática efectiva a las masas, lo cual no se logra sólo con la creación y promoción de organizaciones sino con una institucionalidad estatal que las considere efectivamente en la toma de decisiones.

La persecución física e ideológica del fascismo contra la “politiquería” y los “intereses mezquinos” ha ido dirigida principalmente contra las organizaciones populares. Es fácil entonces — y de hecho ocurre — caer en la tentación de esquivar el bulto al problema y minimizar el rol que los Partidos y las organizaciones de base deben cumplir en la democratización del país. Por el contrario, pensamos que no hay verdadera democracia sin el pleno funcionamiento de tales organizaciones, cuya inserción en la vida nacional debe estar consagrada en la institucionalidad democrática. El rol de los partidos políticos como entes que expresan y canalizan la opinión de masas en la gestión del Estado; el papel de los sindicatos en el plano de la dirección económica nacional y sectorial; la activa presencia de las organizaciones vecinales en la solución de los problemas de su medio ambiente; son cuestiones que no basta con aceptar como parte del derecho de asociación o como expresiones de la libertad individual. Su existencia y acción es parte esencial de la institucionalidad democrática; su ausencia, su precariedad o su falta de importancia son signo inequívoco de una democracia que tiende a aislarse de las masas y a convertirse en ejercicio formal, sujeto por ende a la acción de minorías influyentes e inerte frente a los golpes de fuerza.

Ligada a este tema se nos plantea también la cuestión de la descentralización del poder del Estado. El punto es delicado porque ha sido el que en épocas pasadas dio lugar a los mayores ejercicios demagógicos: no había parlamentario o candidato que no prometiera “hacer escuchar la voz de las provincias”; y las promesas de fortalecer el poder comunal chocaban con la realidad de municipios desfinanciados y desvinculados de la comunidad a la que debían servir. Sin embargo, una efectiva descentralización de las funciones del Estado es útil para permitir una mayor participación de base en la solución de los problemas, para reducir el tamaño — que lleva necesariamente a la burocratización — de los servicios públicos e incluso para asegurar un mayor pluralismo en la difusión de las ideas, toda vez que en muchos casos las autoridades locales corresponden a corrientes ideológicas diversas de los titulares del poder central. Existen ejemplos de Estados no federados que, sin perder su carácter unitario, entregan a las administraciones regionales o comunales una parte importante de los servicios públicos, como la salud, la vivienda e incluso la educación.

Una real descentralización de la administración estatal supone al menos tres condiciones: primero, que las autoridades regionales o locales no sean un mero apéndice del poder central, es decir que sean generadas democráticamente por elección; segundo, que las administraciones tengan un real manejo de recursos para cumplir sus funciones, recursos que también se generen (al menos en parte) de manera independiente del poder central y, tercero, un adecuado funcionamiento de las organizaciones intermedias en el nivel regional o local. También en estos niveles la posibilidad de una acción efectiva y de un manejo democrático de la gestión pública están condiciona-

das por la real participación y acción de los Partidos, las organizaciones vecinales y los sindicatos en la formulación y decisión de los problemas.

7.— Homogeneidad de las Instituciones Democráticas

Del examen de los numerosos documentos que hasta ahora se han publicado surgen algunas cuestiones claras en materia de marco institucional, sobre las cuales no creemos necesario abundar aquí⁹. En general se parte de la base de que la nueva democracia debe tener, al menos, los siguientes rasgos:

- 1) Respeto irrestricto de los derechos humanos individuales, económicos y sociales¹⁰.
- 2) Sufragio universal, secreto e informado para la elección de autoridades.
- 3) Creación de nuevas instituciones del Estado (poder Ejecutivo y Legislativo) en el caso de aquellos desaparecidos durante el fascismo y reforma profunda de aquellas (Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Contraloría) que le han servido de base.

Varios trabajos anteriores se han referido en detalles a estos y otros aspectos de la institucionalidad democrática. Mas que abundar en ellos la cuestión que interesa examinar es la forma en que pueden evitarse o resolverse los conflictos al interior del Estado, al menos aquellos que pueden repercutir seriamente en la estabilidad de las instituciones democráticas. El punto ha sido formulado, entre otros, por Luis Corvalán, al referirse a los preceptos en que debe basarse el nuevo régimen político:

“Homogeneidad de las instituciones democráticas de modo que se eviten los conflictos entre los poderes del Estado. Esto se puede asegurar por medios tales como la elección simultánea del Parlamento y del Presidente, con la elección del Presidente por la mayoría absoluta si se elige directamente”¹¹.

⁹ Sobre una más completa caracterización de la Institucionalidad Democrática, véase José Antonio Viera-Gallo, “Reflexiones para la Formulación de un Proyecto Democrático en Chile”, documento presentado al Seminario de Nueva York. (Chile-América 25-26-27. Pags. 50-65).

¹⁰ La clasificación nos parece inadecuada e equívoca, pero la usamos por ser la más frecuente. En concreto, no entendemos bien porque el derecho al trabajo, al salario justo, a la salud, a la educación, es menos “individual” que otros. Nos preocupa sobre todo la tendencia, a partir de la distinción, a privilegiar unos sobre otros.

¹¹ Luis Corvalán, “Informe al Pleno del P.C.”, cit. Pag. 73.

Nos parece particularmente feliz el término empleado, que tiene un sentido más amplio que el de la búsqueda de mecanismos electorales como los propuestos. El problema consiste en la coexistencia dentro del Estado, en un momento dado, de fuerzas antagónicas, sea por ser generadas de modo diverso o porque, aunque ambas elegidas, lo han sido en tiempos distintos. Esto ocurría en el caso del sistema anterior al 11 de Septiembre no sólo entre el Presidente y el Congreso, sino que se producía con otras instituciones como el Poder Judicial y la Contraloría, no sujetos a forma alguna de elección o sanción popular. Todo ello era útil y funcional a quienes aspiraban a conservar a toda costa el régimen vigente. No lo era en caso alguno para quienes pretendían cambiarlo. De este modo en el Gobierno de la Unidad Popular se llegó al extremo en el uso de las formas de obstrucción institucional a través del Parlamento, el Poder Judicial, la Contraloría y se desvirtuó completamente el supuesto carácter prescindente de estos dos últimos organismos convirtiéndolos en elementos de oposición política; se abusó hasta su total desprestigio del mecanismo de la acusación constitucional antes raramente utilizada. Todo ello paralizó el funcionamiento del sistema democrático, creando las condiciones para el golpe militar.

La experiencia de la institucionalidad anterior hace necesario examinar y resolver el problema de la homogeneidad en dos sentidos: primero, la institucionalidad debe garantizar que la mayoría que existe en el país en un determinado momento, pueda gobernar, con todos los atributos de esa función y sin perjuicio de asegurar mecanismos adecuados de expresión a la oposición política para que esta pueda cumplir su rol fiscalizador. Homogeneidad en este sentido quiere decir evitar un excesivo antagonismo entre los poderes elegidos y crear mecanismos justos para resolver los conflictos cuando se produzcan. La elección simultánea del Presidente y el Congreso, la posibilidad presidencial de disolver las ramas del Parlamento, creación del Tribunal Constitucional, etc., son mecanismos posibles. Todo esto partiendo de la base, por cierto, de que las elecciones reflejan mayorías reales, esto es que el Presidente de la República debe ser elegido por mayoría absoluta y los parlamentarios con mecanismos proporcionales en zonas de igual población.

Segundo, la homogeneidad dice relación con el carácter democrático de cada una de las instituciones del Estado. La institucionalidad no es democrática si no lo es la estructura y funcionamiento de cada una de sus partes componentes, por cierto cada una dentro de sus especificidades. Veamos un par de ejemplos de la anterior Constitución: el llamado poder Contralor consiste en Chile en una sola persona designada de manera indirecta, con carácter vitalicio, que solo puede ser removida por medio de una acusación constitucional. No existe sobre él ninguna forma de control permanente y el servicio público que de él depende está organizado verticalmen-

te, con el Contralor en la cúspide. Sin embargo, esta persona está facultada para controlar la legalidad de los actos del Presidente de la República y representar sus opiniones disidentes ante el Congreso. Otro ejemplo: los Tribunales de Justicia se designan (rémora de la Constitución de 1833) en conjunto entre el Ejecutivo y ellos mismos, quedando en el Poder Judicial la facultad de proponer; existe, por consiguiente, un poder del Estado que es autogenerado y que no responde sino ante sí mismo. No es extraño, pues, que en estas instituciones del Estado se radiquen principalmente las posiciones reaccionarias y reacias al cambio. La democratización de estas instituciones, la creación de mecanismos responsables de fiscalización, la generación democrática de los jueces y su sujeción a alguna forma de control son requisitos indispensables para homogeneizarlas con un sistema democrático moderno y progresista.

8.— El problema de la Fuerza

A los ejemplos dados en el párrafo anterior deberíamos haber agregado el principal: el de las Fuerzas Armadas. En efecto, la democratización de las Fuerzas Armadas no es consigna táctica, sino una garantía de supervivencia de la democracia. Un Estado sin cuerpos armados destinados a la defensa del país no es concebible hoy. La nueva institucionalidad democrática debe incluir pues Fuerzas Armadas homogéneas con el resto del aparato estatal, esto es profundamente democráticas. Lo sostenía así, nuestro Partido hace cuatro años:

“Instaurar un estado democrático requiere inevitablemente una profunda transformación de las Fuerzas Armadas y policiales del país. Ellas nunca más podrán convertirse en instrumentos de represión al servicio de intereses minoritarios, antipopulares y antipatrióticos, como ocurre hoy día. Nuestro pueblo ha aprendido duramente la lección de que un estado democrático sólo es tal — en último término — si las Fuerzas Armadas efectivamente lo son. Sólo la existencia de unas FF.AA. y policiales democráticas, pluralistas, patrióticas, estructuralmente vinculadas al pueblo y sometidas efectivamente a su control, serán garantía suficiente de que el fascismo no podrá repetirse en Chile”¹².

El tema de la democratización de las FF.AA. es demasiado complejo y extenso para pretender aquí algo más que algunas ideas generales. Ade-

¹² “Las Tareas del Pueblo en la Hora Presente”, cit. pag. 28-29.

más, él está íntimamente vinculado a otro de igual complejidad y envergadura: el de la seguridad nacional. Una real democratización de las FF.AA. parte de una revisión de las concepciones en las cuales se basa su quehacer. Supone, pues, una revisión a fondo de la llamada “doctrina de la seguridad nacional”, que no haremos, por cierto, ahora¹³. Baste decir que sin un cambio radical en estos principios, nos parece que las FF.AA. seguirán siendo una amenaza, en la medida en que basan toda su acción en concepciones que vinculan el interés nacional a los intereses de una potencia extranjera, y se expresan en el rechazo ideológico a determinadas corrientes del movimiento popular.

La revisión de la doctrina oficial de las FF.AA. debe ir acompañada necesariamente de mecanismos que aseguren la participación de los militares en el proceso de desarrollo democrático.

No parece probable que en un futuro inmediato o cercano se altere la situación que entrega a las FF.AA. el monopolio del uso de la fuerza en el país. Pensar en alguna forma de acción armada que varíe esta realidad, es una solución de muy largo plazo que, por lo demás, nos parece de éxito dudoso. De ello se desprende una conclusión simple: las FF.AA. son decisivas para la mantención de la dictadura o el retorno del país a la democracia, y toda transformación — mas aún la de su carácter y estructura interna — es muy difícil sin su concurso. Razón demás para estimar indispensable la participación de las FF.AA. en el derrocamiento de la dictadura, en el período de transición y en la discusión de una nueva institucionalidad.

De este hecho algunos sacan una conclusión que no compartimos; si la participación militar es inevitable, es preciso ver forma de canalizar esa participación en los marcos de la nueva institucionalidad. En otras palabras, el “elemento militar” se insertaría en cuanto tal en la dirección política del país con facultades específicas garantizadas. Esta actitud oportunista significa, en la práctica, una tergiversación de la democracia, al subvertir los conceptos de igualdad y electividad que son sustanciales a ella. Nada puede justificar que determinados individuos, miembros de una institución del Estado, tengan por el sólo hecho de serlo, canales propios de expresión privilegiada en la conducción de la vida del país.

Por lo demás, la sola mención de semejante posibilidad es contraproducente. Garantizar un rol militar permanente es alentar de hecho las tendencias militaristas y fascistas que son las que aspiran precisamente a ese rol, y desalentar en cambio a los sectores democráticos que proponen el traspaso pleno del poder a manos civiles.

¹³ Véase sobre el particular Jaime Rojas y Jose Antonio Viera-Gallo, “La Doctrina de la Seguridad Nacional y la Militarización de la Política en América Latina”, (Chile-América 28-29-30).

Desde nuestro punto de vista, la participación de los militares en la vida nacional no significa, en caso alguno, que los cuerpos armados en cuanto tales tengan poder de decisión sobre determinadas cuestiones de gobierno. Sólo las autoridades democráticamente elegidas pueden realizar esta tarea. Participación de los militares quiere expresar dos cosas: integración ciudadana en la vida política del país y vinculación a las tareas del desarrollo. Lo primero significa desde luego la posibilidad de elegir y ser elegido — sin perjuicio de las incompatibilidades que podrían existir para ciertos Altos Mandos —, de participar en organizaciones civiles, el libre ejercicio de todos los derechos individuales — incluidos por cierto los de reunión, asociación y opinión — etc. El precepto de que “ningún cuerpo armado puede deliberar” se ha convertido siempre en la práctica, en la deliberación privada de los generales y la obediencia sumisa e irreflexiva del resto. Mejor es integrar a los militares a la vida civil, que mantener la actual compartimentación que, lejos de obtener prescindencia, demostró ser nefasta para la vida nacional.

La cual supone, por cierto, un gran esfuerzo de democratización interna. La ideología democrática del nuevo estado debe ser la base de la formación de las FF.AA.; debe manifestarse en sus concepciones de seguridad y enseñarse en sus escuelas y academias.

En cuanto a la vinculación a las tareas del desarrollo nacional, éste concepto dice también relación con el nuevo carácter de los cuerpos armados. En efecto, es posible diseñar una serie de formas a través de las cuales las FF.AA. pueden cumplir una labor de servicio público, sin perder por ello su carácter profesional. El contar con un contingente armado numeroso, dedicado de manera exclusiva a tareas de defensa a veces esporádicas, acentúa la desvinculación y crea un clima inadecuado a la democratización. Un ejército comprometido, en cambio, con el desarrollo del país, es también un ejército comprometido con la tarea de renovación democrática.

9.— El Problema del Desarrollo

Un sistema democrático, por perfecto que sea desde el punto de vista formal, sólo servirá para consagrar la desigualdad y la injusticia si no es capaz de crear condiciones para romper la situación de crisis económica del país, dar origen a un auténtico desarrollo y crear un nuevo orden económico de cuyos beneficios puedan participar todos los individuos. La dimensión económica de la democracia es parte absolutamente integral del concepto: mientras existan desigualdades en la económica, ni la democracia ni el pluralismo serán realidades plenas.

Exponer aquí nuestras opiniones acerca de la forma de reflejar este principio, en la nueva institucionalidad, es una tarea que tiene de partida dos limitaciones: la primera es que no quisiéramos, en este trabajo, entrar a propo-

ner las tareas económicas que a nuestro juicio debiera enfrentar el nuevo estado. La segunda es que, para nosotros, sólo en el socialismo es posible alcanzar la plena democracia en lo económico. Y aunque esperamos, a través de la nueva institucionalidad democrática, avanzar a ese objetivo, estamos concientes, como lo dice el texto citado, de que no es hoy el momento de proponer medidas socialistas para ser incorporadas a la nueva institucionalidad.

Con estas salvedades, interesa en todo caso referirse a las medidas democráticas que en el plano económico debería instaurar el nuevo estado. El problema que salta a la vista es la aparente contradicción entre la plena democratización de la nueva sociedad y la economía, y la imperiosa necesidad de superar la crisis y desarrollar el país. En efecto, superar la crisis e iniciar una nueva etapa de desarrollo, parece significar un alto grado de centralización en la toma de decisiones económicas y un nivel elevado de acumulación que aunque beneficioso a la larga, es en una primera etapa contradictorio con la necesidad imperiosa de consumo de la población, pauperizada por el fascismo. Al mismo tiempo, la posibilidad de captar excedentes de otros sectores se ve limitada por la ruina en que ha sido sumida la industria nacional y, en lo político, por las condiciones de la alianza que queremos integrar para derribar la dictadura.

No pensamos que, a la caída del fascismo sea posible instalar lisa y llanamente un programa de centralización de la economía, sin al mismo tiempo crear mecanismos de participación de los trabajadores y los empresarios en su gestión e integrar a la mayor cantidad de corrientes políticas y sectores sociales posibles a un acuerdo acerca de la forma de dirigir la economía del país. El dilema “democracia o desarrollo” no puede ser resuelto ni limitando las libertades democráticas ni llevando la acción reivindicativa y el juego de intereses a tal extremo que toda acumulación se haga imposible. El necesario proceso de acumulación, la planificación de nuestra economía y la satisfacción mínima de las necesidades inmediatas de los trabajadores, sólo pueden compatibilizarse por medio de un amplio consenso político que evite la alienación y la disgregación de los múltiples intereses representados.

A nuestro juicio, el programa económico debe expresarse en los siguientes aspectos de la nueva institucionalidad:

- 1) Consagración constitucional de los derechos económicos de las personas: derecho al trabajo, al salario justo, al retiro por edad o por años de trabajo, etc.
- 2) Limitaciones sociales a la sociedad privada y consagración constitucional de otras formas de propiedad: estatal, mixta, cooperativa, etc.
- 3) Restablecimiento pleno del rol del Estado en la economía. Ello si-

gnifica al menos, restitución al Estado de las empresas estratégicas privatizadas por la dictadura, la creación de un sistema de planificación central y regional, y el control de las instituciones de crédito, seguros y comercio exterior.

4) Nacionalización de los recursos naturales y riquezas básicas y reserva para el Estado del derecho a establecer sus modalidades de explotación.

5) Dictación de una serie de normas que permitan la expropiación de los monopolios, los grupos especulativos y los latifundios reconstituídos por la dictadura. Esta medida y la anterior dice relación directa con la destrucción de las bases materiales del fascismo, como condición necesaria para una efectiva democratización en todo los niveles. En efecto, “no es posible eliminar el fascismo sin recuperar para el pueblo y la nación los resortes básicos del poder económico y social de las minorías que han desatado el fascismo y mantenido el país en la dependencia”¹⁴.

La incorporación de estas y otras eventuales disposiciones en la nueva institucionalidad no significa, desde luego, que pensamos que su aplicación será fácil, mecánica o automática. La lucha por una transformación de la economía en un sentido democrático pasará sin duda por un largo período de dificultades fruto de la recomposición del capitalismo y de la influencia de los monopolios que son producto de la política del régimen fascista. Se trata en la nueva institucionalidad de crear las bases mínimas para desarrollar esa lucha, que será orientada por un programa económico y que tiene necesariamente características de masas.

Se plantea en este último punto de manera evidente — aunque el problema no puede reducirse a una pura dimensión económica — la necesaria relación que para nosotros debe existir entre la lucha por la democratización del país y avance hacia lo que es nuestro objetivo histórico: el socialismo. Los complejos problemas que esta relación plantea y las características que asignamos a un proyecto socialista que nazca de nuestra experiencia, serán objeto de la segunda parte de este trabajo.

⊕ ⊕ ⊕

¹⁴ Jaime Gazmuri, “La Crisis de la Política Fascista y las Perspectivas del Movimiento Democrático y Popular”. (Boletín Informativo Exterior del MAPU O-C, N. 3, Febrero-Marzo 1976, pag. 23).

C R O N I C A

LA RESISTENCIA DEMOCRÁTICA-NACIONAL Y EL PARTIDO

Entrevista al Encargado del Partido en Chile

Esta entrevista ha sido publicada en el N. 2 de la "Revista de la Resistencia", órgano del Comité Central del Partido, que circula clandestinamente en Chile. "Resistencia Chilena" la publica textualmente.

Pregunta: *El Mapu Obrero y Campesino ha planteado desde el comienzo de la dictadura fascista la necesidad de constituir un gran frente que agrupe a vastos sectores nacionales. ¿Qué significado tiene para el partido este frente?*

Respuesta: La contrarrevolución surgida el 11 de septiembre es la victoria de los monopolios y del capital imperialista.

Hoy, el fascismo deja en evidencia lo que durante el gobierno de la Unidad Popular estaba poco explícito: son los monopolios y el imperialismo los que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas del país y por lo tanto su desarrollo democrático.

La tarea principal del programa de la U.P. era la transformación democrática y revolucionaria del país y tenía por objetivo la eliminación de los obstáculos que impedían su desarrollo independiente y soberano: eliminación del monopolio, expropiación de los intereses del imperialismo y reforma agraria profunda.

La realización de estas tareas no fue posible porque el frente político no incorporó a todas las fuerzas políticas necesarias para la realización de este programa.

La crisis generada por el fascismo saca a la luz del día la falta de la revolución democrática y nacional que desarrolle las fuerzas productivas del país, desmantele el estado fascista y represivo e inicie la construcción de una sociedad de democracia plena.

La revolución democrática nacional permitirá el desarrollo independiente

del país sobre bases sólidas. Al eliminar las trabas para este desarrollo permite la expresión de las fuerzas productivas y su elevación a un nivel superior.

La gran tarea está planteada. La revolución democrática nacional es la gran tarea del Frente Antifascista.

El frente antifascista es la alternativa que la U.P. ve al gobierno fascista. En este frente concurren todas las fuerzas democráticas del país.

El frente antifascista surge de la lucha de las fuerzas que se ven afectadas por la política de los monopolios y el imperialismo.

El frente antifascista es la culminación del largo proceso de unidad de estas fuerzas.

La expresión política del frente antifascista es la Unidad Popular, la Democracia Cristiana y todas las otras fuerzas políticas democráticas que no expresen los intereses monopólicos.

El frente antifascista es la única alternativa capaz de asegurar el desarrollo democrático del país. Por tanto debe enfrentar a fondo, de raíz, todo lo que atente contra éste.

El frente antifascista tiene, pues, una gran tarea por delante. Esta es la realización de la revolución democrática nacional.

La perspectiva socialista está presente en el desarrollo del frente antifascista porque permite la expansión y el desarrollo de las clases hoy oprimidas y abre camino para que éstas se expresen desde el punto de vista productivo y orgánico.

Pregunta: *Usted ha planteado que la Democracia Cristiana debe formar parte del frente. Sin embargo, la conducta política de dicho partido mostraría lo contrario. ¿Cuáles cree Usted que son los obstáculos para su incorporación al frente?*

Respuesta: Durante el gobierno de la U.P. no se entendió el papel revolucionario que la Democracia Cristiana debía jugar.

La DC debe formar parte del frente antifascista. El monopolio pone cortapisas a la existencia de la DC; prueba de ello es su ilegalización. La DC se plantea como alternativa al movimiento popular. Mientras la DC no abandone la ilusión de ser capaz, por sí sola, de resolver los problemas que impiden el desarrollo del país y no comprenda que su política alternativista sólo la lleva a componendas y concesiones al fascismo, mientras persista en esa política, se retarda la solución de la crisis.

El proyecto de "revolución en libertad" fue un intento fracasado porque la DC no fue capaz de resolver la crisis. Esta radicaba y radica en la ingerencia imperialista y monopólica, en el carácter dependiente de nuestro país.

Con mayor razón, es imposible que la DC sea capaz de resolver esta

crisis hoy elevada a nivel superior y con un poder mayor de los monopolios y el imperialismo.

En la medida que la DC no abandone sus intenciones de dividir el movimiento popular, retrasa la posibilidad de consenso de las fuerzas democráticas. Por su parte la Unidad Popular ha demostrado una solidez suficiente para haber resistido 7 años de experiencias distintas y adversas. Los profundos lazos creados y las experiencias vividas hacen que los intentos de la DC no encuentren acogida.

En la medida que la DC avance en la comprensión de las causas que impiden el desarrollo del país cambiará su actitud. Esto se expresa hoy, en la convergencia de la DC y la UP en los frentes juveniles, de pobladores, trabajadores. Este hecho obligará a los directivos de la DC a cambiar su perspectiva.

Hoy, la dirección de la DC tiene una comprensión insuficiente de las causas que originaron la crisis democrática, social y política del país.

Se estaría desconociendo lo que ha significado la dominación imperialista y monopólica en Chile al pensar que se puede llegar a un sistema democrático sin la concurrencia de todos los sectores democráticos del país.

Es imposible que se dé un gobierno político democrático sin que esto se refleje en el plano productivo en la expansión de los sectores no monopólicos del país y por lo tanto en la eliminación de los obstáculos para esa expansión.

Si hay libre expresión ello llevará ineludiblemente a enfrentar la dominación monopólica. Esto hace imposible e ilusorio querer retomar a la década del 60 para establecer ese tipo de democracia.

Como ha dicho nuestro Secretario General en "Aprender las lecciones del pasado para construir el futuro", publicado en 1974: "La actitud que en definitiva asuma el PDC en la lucha por la democracia, es una cuestión que obviamente tendrán que resolverla los propios demócratacristianos. Sin embargo, para que este problema se resuelva de una manera favorable para la democracia y el pueblo, es necesario, de parte nuestra, el desarrollo de una política que tome en cuenta suficientemente los errores del pasado en el tratamiento al PDC".

Pregunta: ¿Cree usted que dicho frente es posible? ¿Por qué? ¿y Cómo se incorporarían a él otros sectores ajenos a la clase obrera?

Respuesta: La existencia en el país de una clase obrera que es capaz de entender la naturaleza de los problemas nacionales y que llama a los sectores democráticos del país a la solución de éstos, es lo que hace posible el frente antifascista. Además la inmensa mayoría de las fuerzas sociales del país se ven afectadas por la existencia del fascismo y esta alternativa les permitirá realizar la plenitud de sus aspiraciones.

El frente antifascista requiere de una amplia alianza de clases, capas, sectores, instituciones democráticas, que se ven afectadas por la política del fascismo y que deberán ser representadas en el frente en sus intereses y aspiraciones.

Esta alianza expresa a la clase obrera, asalariados agrícolas, campesinos, pequeños industriales, pequeños y medianos propietarios agrícolas, asentados comuneros, comerciantes, profesionales, artistas, intelectuales, empresariado nacional, instituciones religiosas y humanistas que en suma representan la mayoría del país. También las FFAA democráticas tienen un importante papel en el frente. Al representar a la mayoría del país representa, por lo tanto, los intereses auténticamente nacionales y patrióticos. Estas fuerzas quieren y se interesan en el destino de la Patria, su desarrollo y su progreso.

Esta amplia alianza es posible porque expresa las fuerzas que ven limitados su desarrollo y aspiraciones propias por la forma en que se da la dominación monopólica e imperialista en Chile.

Pregunta: Y ¿Cuál es el papel de la clase obrera en el frente?

Respuesta: El papel y la responsabilidad principal en esta alianza es de la clase obrera. En primer lugar por su auténtica vocación democrática, madurez y capacidad de comprensión de los fenómenos sociales que le entrega su ideología: el marxismo-leninismo y porque además está llamada a ser la gestora de esta unidad. El papel hegemónico de la clase obrera está en su capacidad de poder entregar el proyecto histórico común a las otras fuerzas sociales.

La alianza no se construye sólo en los términos de los intereses económicos de las distintas capas, además debe haber una adhesión política de éstas al proyecto. Por lo tanto debe existir una profunda difusión del proyecto común y del papel y los aportes que en él juegan las distintas fuerzas sociales del país.

Hegemonía también es la capacidad y responsabilidad de entregar y clarificar el proyecto, los beneficios y los aportes al proyecto histórico de las distintas fuerzas de la alianza.

Es preciso dar una visión de conjunto, porque no todas las clases tienen la visión del rol que juegan en la sociedad.

La clase obrera debe tener la capacidad de liberar y poner en movimiento la energía revolucionaria de las otras capas y clases para la revolución democrática y nacional del país.

Pregunta: ¿Cuáles son los principales obstáculos para la formación del frente?

Respuesta: Los obstáculos principales para la formación de esta alianza son las diferencias políticas e ideológicas y las diferencias de clases.

Las diferencias políticas e ideológicas se expresan en concepciones del frente y de las formas que adquiere el desarrollo de la sociedad. Estas se resuelven por la vía del diálogo democrático, del desarrollo y evolución de cada clase y por métodos pacíficos porque no son intereses irreconciliables para el desarrollo del país.

Este proceso hace imperioso un desarrollo teórico e ideológico que posibilite la comprensión de las dificultades y su justa solución.

Pregunta: *El partido ha planteado como tarea principal del frente la revolución democrática y nacional. ¿En qué medida la clase obrera en su historia ha contribuido al desarrollo democrático chileno?*

Respuesta: La clase obrera es el pilar más sólido sobre el cual se construye la sociedad democrática. Es importante valorar su inmenso aporte en el proceso democrático de nuestro país hasta 1973. La clase obrera es una de las fuerzas que más contribuye al desarrollo de la democracia chilena que tenía limitaciones y cuya máxima expresión fue el gobierno de la Unidad Popular.

Jamás la clase obrera ha contribuido a la paralización o cancelación de la democracia, al contrario, ha sido su más firme defensora. Un ejemplo entre muchos. Cuando el General Viaux amenazó al gobierno constitucional de Eduardo Frei, la clase obrera sale en su defensa y es ella la que impide la cancelación del desarrollo democrático del país realizando un paro nacional y aportando la oposición política de sus partidos.

Hoy, la derrota de la clase obrera como expresión de un gobierno es lo que permite la cancelación del proceso democrático que afecta a las otras clases.

La derrota de la UP es la derrota del sistema democrático chileno. Por esto es injusta y arbitraria la acusación de que la clase obrera es antidemocrática y que por lo tanto en "la alianza propuesta trata de atraer a las otras clases y utilizarlas malevolamente" y los que hacen, hoy día, esta acusación tienen el ejemplo de como las fuerzas antidemocráticas: monopolios, imperialistas y gran burgueses arrastraron bajo las banderas del anticomunismo a inmensos sectores políticos y sociales en contra del Gobierno Popular e instalado el fascismo en el poder desalojaron violenta y ferozmente a los sectores que no aceptaban su política y a aquellos que ya no le sirven (camioneros, comerciantes, etc.).

Ejemplos como estos demuestran la falta de seriedad de las acusaciones que se hacen a la clase obrera y a sus partidos, las que no tienen ningún fundamento.

Quiero citar nuevamente a nuestro Secretario General, que con respecto a este tema dice: "Lo ocurrido en nuestro país debe ser aleccionador en este sentido para todos los chilenos sinceramente democráticos. Un gobierno legal, elegido y confirmado por los organismos constitucionales, enmarcado en un estado de derecho que incluso disponía de mecanismos para destituirlo, en un régimen de las más plenas libertades democráticas (de asociación, reunión, prensa, de partidos, sindical, etc.) es derrocado violentamente en nombre de la democracia! Se instaura luego una tiranía oprobiosa que suprime todos los derechos humanos; que tortura, detiene, fucila, no sólo en los días posteriores al enfrentamiento sino 14 meses después (¡y aún a casi 4 años de su instauración!) en circunstancias de que *toda* la izquierda ha declarado públicamente que condena el terrorismo y no impulsa la lucha armada en las actuales circunstancias. Pues bien, después de todo esto nosotros tenemos que advertir que en la lucha política el movimiento popular debe considerar el factor de fuerza para poder cumplir con éxito sus objetivos libertadores. Y cuando hacemos esta constatación elemental, de toda lógica, resulta... que somos "propugnadores de la violencia"! El viejo cuento del ladrón detrás del juez. El asunto sería risible si no hubiera tanta gente democrática y de buena fe que están convencidos sinceramente que los marxistas y la izquierda son por principio "partidarios" de la fuerza y la violencia en la vida social y política".

Es indudable que la debilidad, hoy en el desarrollo de la lucha ideológica, ha permitido que vastos sectores sean engañados todavía a través de la mentira y la deformación de los hechos. A esto se debe la inmensa campaña del fascismo en contra de la clase obrera y su ideología y la ubicación de los ataques en la Unión Soviética como el enemigo de la democracia y la paz interna, con lo que pretenden hacer comulgar con ruedas de carreta a los chilenos. Esto demuestra la debilidad en la argumentación contra la profunda vocación democrática y patriótica de los partidos obreros chilenos; el no encontrar argumentos en contra de su entrega sin condiciones al progreso y bienestar de la mayoría del país, deben recurrir a la deformación y al ataque del campo socialista. Pero la verdad es otra: la URSS, el campo socialista y el desarrollo de las fuerzas populares es la alternativa que la humanidad tiene para superar los problemas que implica la dominación imperialista. La política de distensión, de favorecimiento del desarrollo democrático, la paz y el progreso del mundo, ofrecen a la sociedad chilena el camino que hoy recorre la humanidad por el progreso y la paz social.

Pregunta: *Complementando la pregunta anterior, ¿en qué medida el fascismo se opone a la experiencia histórica chilena?*

Respuesta: El fascismo es una experiencia extraña a todo el desarrollo histórico de nuestra patria. No encuentra ninguna raíz histórica y

para encontrarla tergiversa la historia y los hechos. Sólo podría encontrar una referencia en el período posterior a la derrota de los patriotas en Rancagua y la situación creada en el país con la ocupación de las fuerzas extranjeras: la restauración española. Esta es la única referencia histórica que el fascismo puede encontrar.

Explicitamente a través de las declaraciones y normas jurídicas que han impuesto al país, fundamentalmente en las llamadas Actas Constitucionales reniegan de toda la tradición jurídica y de la organización del estado desde 1810 hasta nuestros días.

Todas nuestras experiencias estuvieron orientadas por la doctrina del Derecho Natural que coloca al hombre en la cúspide del estado y en función de los derechos del hombre se organizaba éste. Hoy, las Actas Constitucionales colocan al estado en la cúpula de la sociedad y en función de los intereses del estado se subordinan los derechos del hombre.

Chile es hoy todavía una república, pero no una república constitucional organizada sobre la base del derecho que es lo que se ha sostenido desde 1810. Perfectamente hoy Chile podría ser una monarquía o una autocracia con características incluso hereditarias, porque cuando Pinochet habla de él y sus sucesores, éstos podrían ser perfectamente sus familiares.

En este marco, la resistencia retoma la tradición histórica del país, desde el sacrificio del Presidente Allende y de los patriotas que defendieron La Moneda. Este sacrificio tiene la expresión de la inmólación en defensa de los valores y tradiciones democráticas de Chile. Este hecho sí tiene tradición histórica en nuestro pueblo.

El Presidente Allende al defender La Moneda no buscaba objetivos militares, sino la defensa de los valores de nuestra historia patria. La resistencia al fascismo se expresa, entonces, desde el primer día en que el fascismo se entroniza en nuestra patria.

Nunca el pueblo chileno había sufrido una represión tan feroz desde el período posterior a la derrota de los patriotas en Rancagua y la ocupación del país por fuerzas extrañas. Las represalias, la arbitrariedad, los crímenes en contra de los patriotas, ejecutados por las fuerzas represivas del Capitán San Bruno — de triste historia en nuestro país — sumieron a la población en un clima de terror y de violencia. La violencia desatada por San Bruno y los Talaveras tienen como características los asesinatos, las violaciones, las detenciones arbitrarias, el saqueo. Las fuerzas de ocupación procedieron a confiscar los bienes de los patriotas. Las cargas tributarias y los sacrificios económicos impuestos a todos los sectores de la población en ese período, tal como ahora, responden a los apetitos del sistema colonial contrario a los intereses del país. En ese período la resistencia clandestina y de masas juega un papel principal en el proceso de liberación de la patria.

Es la resistencia clandestina y de masas en contra de la dominación española lo que hace posible la gesta libertadora. Es por eso que la resistencia

clandestina y la resistencia de masas contra la dictadura de los monopolios y el imperialismo está profundamente enraizada en la lucha del pueblo chileno.

La dictadura de Pinochet nos plantea problemas que el pueblo chileno resolvió hace muchos años. Hoy, la voracidad del imperialismo para perpetuarse en la dominación de nuestro pueblo necesita — como ocurrió en el siglo pasado — aislarlo de las corrientes renovadoras de la humanidad.

Ayer, en contra de las corrientes que sacudían las estructuras sociales y económicas del feudalismo en Europa, inspiradas, en el pensamiento de los enciclopedistas que defendían los derechos del hombre, cuestionaban la divinidad del poder real y de la tiranía con que se mantenía la sumisión de los pueblos, y que postulaban la capacidad de éstos de gobernarse a sí mismos. Estas fueron las ideas que originaron la Revolución Francesa.

Condenando el conocimiento o la adhesión a estas ideas “extranjerizantes”, instaurando severas medidas de censura a la información de lo que ocurría en el mundo y a la literatura que propiciaba estas ideas, a través de métodos inquisitivos. Sin embargo, el pueblo chileno logra romper esta barrera. Nuestros Padres de la Patria se inspiraron en estas ideas de avanzada en su época.

Hoy día, la dictadura impide también la incorporación de nuestro pueblo a la información y la participación de corrientes que hoy significan el avance y el progreso de la humanidad.

Como ayer era perseguido el pensamiento de los enciclopedistas, hoy cuestionan el marxismo-leninismo como una ideología extraña a la nacionalidad. Esto, porque en definitiva, es extraña a los intereses de la dominación del imperialismo en nuestro pueblo, como eran extraños a los intereses de la Colonia y sus representantes en Chile, las ideas de la Revolución Francesa.



Pregunta: ¿Cuál es la actitud asumida por los partidos de la clase obrera ante la usurpación del gobierno por parte de estos sectores o puestos al desarrollo democrático nacional?

Respuesta: Los partidos de la Unidad Popular llaman, el primer día después del golpe fascista, desde la clandestinidad, a los trabajadores y al pueblo de Chile a unirse contra el fascismo.

Las distintas organizaciones del pueblo enfrentan las medidas de la dictadura tendientes a congelar su funcionamiento como expresiones de los distintos sectores sociales.

La dictadura fascista se encuentra con un gran desarrollo de las organizaciones sociales, culturales y políticas de amplios sectores del pueblo que son un obstáculo para la implementación de su dominio. Por lo tanto nece-

sita imperiosamente inmovilizarlas.

El fascismo, por ser expresión de minorías, necesita implantar su dominio y por eso impide la manifestación de las otras fuerzas sociales. El fascismo es, por esto, ajeno a los intereses nacionales.

La resistencia al fascismo adquiere, así, múltiples expresiones y se da a través de todas las formas y de las distintas instituciones y organismos que reivindican sus derechos amenazados por la dictadura.

De esta manera se plantea la resistencia de masas legal y abierta que reclama el derecho de las distintas fuerzas del país a tener un lugar en la sociedad y a reconquistar sus derechos legales que la dictadura los niega.

La lucha del pueblo chileno es por reconquistar su lugar en la sociedad del país que el fascismo le niega.

Este, para asegurar su dominio sobre el país requiere acallar todas las expresiones de las organizaciones de las otras fuerzas sociales. Las medidas que toma el fascismo son la ilegalización de los partidos de la Unidad Popular, el receso de otros, la ilegalización de la CUT, disolución de sindicatos, disposiciones que limitan el funcionamiento de las organizaciones populares, todas tendientes a inmovilizar las expresiones de las fuerzas vivas del país.

Pregunta: *Usted ha hablado de resistencia legal de masas, ¿cómo esta actitud de resistencia al fascismo puede darse en forma legal?*

Respuesta: La resistencia al fascismo se expresa a través de dos líneas.

Una de ellas es la resistencia clandestina, desde la cual los partidos de la clase obrera y el pueblo resisten las prohibiciones de la dictadura manteniendo su organización, reconstituyéndola y adecuándola al trabajo en las condiciones represivas y desarrollando sus actividades de orientación y conducción política del país hacia el derrocamiento de la dictadura.

La otra es la resistencia de masas, que es la resistencia de las organizaciones que reivindican sus derechos amenazados por las disposiciones de la Junta, desde los más simples a los de mayor trascendencia.

Estas son las dos formas que adquiere la resistencia: trabajo clandestino de los partidos y lucha abierta de las organizaciones del pueblo.

La legalidad de las organizaciones es ya una conquista que permite que se expresen en todos los niveles de la sociedad.

Los partidos son clandestinos por la persecución y la violencia desatada por la dictadura.

La lucha de masas es siempre legal y abierta.

La resistencia de masas es democrática porque expresa a la mayoría de las fuerzas del país y reivindica los derechos legales y democráticos del pueblo de Chile afectados por la arbitrariedad del estado fascista. La resistencia de masas legal y abierta a la dictadura es democrática porque expre-

sa a la mayoría del país en contra de la camarilla fascista.

La resistencia de masas busca el aislamiento del fascismo y por lo tanto su derrota política.

Pregunta: *¿Por qué la resistencia chilena ha optado por la búsqueda de esa derrota política del fascismo sin recurrir a actos de terrorismo?*

Respuesta: El fascismo requiere actos de terrorismo pues viola la legalidad.

El fascismo al asaltar el poder comete un delito contra la legalidad existente, rompe un consenso que establecía un sistema democrático de gobierno.

La lucha de masas apunta a la expresión de un consenso de la mayoría del país para establecer un sistema democrático. Por esto no necesita del terrorismo.

El fascismo rompe el consenso de la mayoría y por esto le es propio el atentado, el terrorismo, el crimen político.

La clase obrera jamás requiere de los métodos que utilizan las minorías. No requiere del terrorismo, la violencia y el asesinato; estos son recursos de las minorías.

La lucha de la clase obrera por la democracia se orienta a la convergencia de todas las fuerzas democráticas para establecer el consenso.

Pregunta: *¿Cuáles son entonces los caminos que ha seguido la resistencia chilena?*

Respuesta: La resistencia se manifestó en un principio en la capacidad de los trabajadores para mantener en las condiciones adversas su funcionamiento, impulsando actividades deportivas, culturales y de reivindicaciones mínimas.

Luego, en el desarrollo de plataformas más generales de las organizaciones sindicales tendientes a mejorar las condiciones de vida y de trabajo y a cuestionar las iniciativas de modificación de disposiciones legales que afectan al movimiento sindical: rechazo a la modificación del Código del Trabajo por la mayoría de los trabajadores, a la reforma previsional y al Estatuto de Capacitación y del Empleo, siendo aprobado el último, a pesar de las objeciones de la mayoría de las organizaciones.

Estos problemas han sido discutidos por los trabajadores en reuniones de sindicatos, de empresas, de amplios de federaciones, lo que demuestra un avance del movimiento sindical en el mantenimiento de una actividad independiente y de crítica al gobierno en aquello que perjudica sus intereses.

También el cuestionamiento a la política de la dictadura se ha expresado en gremios de profesionales y empresarios, de organizaciones de comer-

ciantes, camioneros, que demuestra la distancia entre los intereses del fascismo y estos sectores del país.

El desarrollo de múltiples actividades de masas entre jóvenes, el desarrollo de éstos con las medidas tomadas en el terreno educacional, son todas pruebas del abismo que existe entre los intereses del país y los intereses de los monopolios y el imperialismo expresados por la dictadura fascista.

La permanente agresión a las iglesias por parte de la dictadura, especialmente a la Iglesia Católica, a causa del desarrollo de sus actividades pastorales tendientes a resolver problemas de atención jurídica a los perseguidos, de solidaridad y de apoyo a las necesidades creadas en la población por los efectos de la política del fascismo, es también otra prueba de lo ajena que es la política del fascismo a los más diversos sectores de la población y como esta se resiste a aceptarla.

Hoy por hoy, las organizaciones de masas que han desarrollado en mil formas su expresión son las que no sólo están preservando los valores nacionales, sino que han logrado acrecentarlos.

Pregunta: Siendo muy diferentes los métodos de lucha del fascismo y del movimiento democrático nacional, ¿cuál cree Ud. que será la actitud del pueblo chileno una vez derrotados los fascistas?

Respuesta: La lucha de la clase obrera es la lucha del pueblo de Chile por su libertad, por su derecho a una vida más digna, por su derecho al progreso, a la educación, a la cultura.

Ni la clase obrera, ni el pueblo de Chile está por la revancha.

Están por el reestablecimiento de la legalidad y por someter a juicio público, garantizando todas las normas y procedimientos jurídicos, a los responsables de los crímenes.

Tenemos confianza en que los Tribunales de Justicia serán los que dictaminen las sanciones a los que se han hecho acreedores, a los responsables de tanto delito cometido.

Pregunta: Volviendo al tema de la resistencia a la dictadura. ¿Cuál ha sido el aporte de la DC en esa lucha?

Respuesta: El PDC ha avanzado significativamente en sus posiciones antifascistas, sin embargo, hay una insuficiente comprensión en el conjunto de ese partido, que la derrota del fascismo solamente será posible en la medida que se despliegue la más amplia actividad de masas. El documento de Andrés Zaldívar no recoge suficientemente la experiencia de estos años y no valora la importancia fundamental que tiene la actividad de masas en la lucha antifascista. El diseño de la política allí presentada llevaría solamente

la conciliación y a la componenda.

El PDC expresa importantes sectores sociales independientes de los intereses del fascismo, que jugarían un rol significativo en la oposición de masas al fascismo, más aún en la nueva situación en que ha quedado ese partido después de su ilegalización.

El aporte más significativo del PDC para la democratización del país tendrá bastante relación con la puesta en acción de todas sus fuerzas sociales y en la superación de las dificultades que hoy día plantea para la unidad de todo el pueblo, el surgimiento de un anticomunismo de nuevo cuño que hoy utilizan como pretexto para impedir esta unidad, abandonando su política alternativista y excluyente del movimiento popular. Una política de este tipo sería la expresión de su vocación democrática. Porque una política que no exprese la unidad de los patriotas — de todos los demócratas — lleva a la conciliación y a la componenda y no tiene otro futuro que lograr un lavado de cara de la dictadura.

Tenemos confianza que los demócratas cristianos serán capaces de superar las dificultades que hoy día encuentra el proceso de unidad.

Pregunta: ¿Qué papel ha jugado la Iglesia Católica?

Respuesta: La política de la dictadura le crea un enorme campo de conflictos.

A lo largo de estos tres años, la dictadura ha tenido frecuentes roces con la Iglesia Católica.

Es indudable que el fascismo es incompatible con los principios y doctrina del cristianismo. Esa es la gran contradicción entre la Iglesia y la dictadura.

Las iglesias en Chile, especialmente la Iglesia Católica, se han visto afectadas por la política del fascismo. La amenaza que representa el fascismo a todas las formas de libre expresión del pensamiento, a los derechos y libertades del hombre que se desprenden del pensamiento cristiano y la necesidad de éste de controlar las formas de expresión independiente a los objetivos políticos del gobierno, lo ha llevado a buscar contener la acción pastoral de la Iglesia profundamente ligada a los problemas del pueblo. Esta acción pastoral responde al Concilio Vaticano II y a la reunión de obispos latinoamericanos en Medellín. Además, la dictadura militar ha intervenido en los organismos de educación superior (Universidades Católicas) y en general, el sistema de enseñanza que la Iglesia ha desarrollado en el país.

La Iglesia Católica, pues, como el conjunto de las instituciones del pueblo chileno, ha tenido una posición de defensa de sus derechos y prerrogativas al interior de la sociedad, amenazados por el fascismo.

El fascismo ha desplegado inmensos esfuerzos por restringir la acción de la Iglesia a la liturgia, buscando la sumisión de ésta a sus designios. Para

ello no se han detenido ante nada; desde el asesinato y detención de sacerdotes, la orquestración de campañas de desprestigio a su jerarquía, la agresión verbal y física a obispos por parte de miembros de la DINA. El permanente hostigamiento a que se ha visto sometida la Iglesia en estos años demuestra el fracaso de la dictadura en su sometimiento y en la búsqueda del rompimiento de la institución valiéndose de sectores católicos derechistas como la Sociedad de Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad (FIDUCIA) y grupos del integrismo católico.

El fascismo no puede soportar la consecuencia de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos, en la denuncia de las arbitrariedades y en su permanente disposición a la vuelta de la normalidad jurídica, en la búsqueda que el país se reencuentre con sus tradiciones democráticas y libertarias por medio del ejercicio de la soberanía popular.

Valoramos la consecuencia de la Iglesia Católica en la medida que ha sido una de las expresiones institucionales humanitarias que han contribuido en el pasado al progreso del país, a su desarrollo como sociedad en todos los planos de la vida nacional y en esa perspectiva valoramos, también, la contribución que prestará en el futuro de la patria

Pregunta: Todo este gran fenómeno social de resistencia contra un régimen totalitario y policial, ¿a su juicio, ha influido en las FFAA?

Respuesta: Es indudable que la resistencia democrática y la crítica de las fuerzas sociales a la dictadura influyen en la opinión de las FFAA, pero no hay una relación mecánica entre la crítica y el cuestionamiento a la dictadura y su expresión al interior de las Fuerzas Armadas. Estas tienen su propia dinámica, motivada por intereses institucionales e ideológicos.

En la formación de nuestras FFAA hay una profunda tradición democrática, constitucionalista y un alto profesionalismo. Han sido educadas en una concepción democrática y constitucionalista de la seguridad nacional. Esta concepción de seguridad nacional se expresa en la doctrina Schneider y alcanza su más alta expresión en el desarrollo del pensamiento y la práctica del General Carlos Prats que echa las bases para el desarrollo de una política de Seguridad Nacional que contempla el crecimiento político, económico y social del país como el punto de partida más sólido para garantizar la seguridad nacional.

La incorporación de las FFAA a este desarrollo del país como un factor de aporte técnico y profesional — especialmente en las áreas estratégicas de la economía — les permitiría decidir las políticas de producción en relación a los objetivos de seguridad nacional.

Al entregar Pinochet estas empresas a sectores privados o extranjeros se debilita ese aspecto de la seguridad nacional.

Importantes sectores militares, hoy día, deben considerar como un de-

bilitamiento de la seguridad nacional, las medidas económicas que entregan empresas estratégicas a intereses privados foráneos, quedando las FFAA imposibilitadas de influir en su desarrollo y en su rubro de producción.

La dictadura ha hecho de su doctrina de seguridad nacional, la ideología oficial del régimen. Esa doctrina de seguridad nacional se origina — entre otras fuentes — en la formulación de las FFAA norteamericanas para enfrentar los movimientos revolucionarios que surgen como un peligro para el dominio imperialista después del triunfo de la Revolución Cubana. Esta práctica fue iniciada en el período de John Kennedy con la instalación de centros de adiestramiento para soldados de América Latina,

La formulación de esta doctrina significa que hoy ha cambiado el carácter de la guerra convencional. El imperialismo se convence que no habrá una invasión militar del campo socialista y que el peligro del avance de las fuerzas socialistas en América Latina hay que enfrentarlo en los partidos y movimientos que adhieren al socialismo, llevando, así, la guerra al interior de la sociedad. Este concepto globalizador — que coloca la guerra en términos absolutos — explica el estado de guerra declarado al pueblo de Chile por Pinochet y su camarilla fascista y la permanencia del estado de emergencia en que ha sumido al país, llevando la acción bélica a los marxistas, a los que adhieren al socialismo, a los sospechosos de ser amigos de los marxistas, etc..., en definitiva a todo el pueblo de Chile.

Este concepto de guerra fue explicitado en los juicios de la FACH, aberración jurídica que estremeció la conciencia de toda la humanidad. Las ideas allí formuladas son similares a los escritos del oficial francés Trinquier, jefe de las fuerzas colonialistas en Argelia, quien fue derrotado por la lucha del pueblo argelino por su independencia y libertad y que resume todo el odio y el resentimiento de un soldado derrotado por un pueblo.

Por esto, es justo pensar que nuestras FFAA no serán utilizadas por mucho tiempo en una política criminal contra su propio pueblo. Es imposible que esta concepción de la guerra — que lleva a nuestra sociedad a la época de las cavernas, que no deja lugar al consenso y al diálogo para resolver los problemas sociales y que sólo utiliza el imperio de la violencia y la fuerza sobre el pueblo — pueda sostenerse por mucho tiempo.

Esta doctrina de seguridad nacional tiene como condición la dependencia militar y política de nuestro país a la defensa de los intereses del imperialismo. Ello significa que los requerimientos militares de nuestro país — técnicos y de armamento — son los necesarios para enfrentar a la población y no para enfrentar a una potencia extranjera. Por lo tanto esta política de seguridad nacional es incapaz de defender la soberanía del país porque jamás permitirá el equipamiento de nuestras FFAA con arma-

mento y conocimientos técnicos que la mantengan a la altura de las FFAA profesionales del mundo.

Esta doctrina de seguridad nacional es el barniz ideológico para ocultar su entrega a los intereses del imperialismo.

Es la doctrina de seguridad nacional y los conceptos de geopolítica como teoría de la explicación de los fenómenos sociales y de la sociedad lo que permite al fascismo dar los contenidos de su política. Hace un manejo ambiguo de estos conceptos adecuándolos a las circunstancias.

Cuando dan el golpe contra el Gobierno Popular reclaman los derechos de la nación, pero instalados en el poder y constituido el estado fascista han identificado el concepto de nación con el de estado y posteriormente con el de gobierno en un solo concepto. Porque el objetivo era la destrucción del estado democrático constituido en Chile a lo largo de su historia y no sólo destruir el gobierno del Presidente Allende. Porque la concepción de estado derivada de las ideas de la geopolítica y la ideología de la doctrina de seguridad nacional propuesta no acepta ninguna forma de expresión democrática, ni institucional, ni de grupos. En alguna medida encuentra coincidencia ideológica con los grupúsculos fascista y neofascistas de corte totalitario y sectores del integrismo católico, los cuales también ven un peligro en la democracia porque en ella no tienen ningún peso.

El pueblo chileno tiene confianza en sus FFAA, en sus tradiciones. Sabe distinguir entre los responsables — el grupo fascista — y los soldados patriotas que existen en ella. Estos deberán jugar un importante papel en el término de la situación que vive el país y en la futura construcción de una democracia más plena que le entregue a las FFAA verdaderamente posibilidades de ser garantía de la seguridad nacional y de la defensa de una patria independiente.

Pregunta: ¿Cómo se refleja la lucha antifascista en el desarrollo de su partido, el MAPU Obrero y Campesino?

Respuesta: Uno de los elementos principales que explican el actual desarrollo del partido tiene relación con la derrota de las tendencias de la pequeña burguesía revolucionaria, que se habían organizado en su interior y que fueron alejadas el 7 de marzo de 1973.

El éxito de las fuerzas de la clase obrera en el partido crea las condiciones que facilitan el desarrollo tanto en el plano ideológico como en el político y el orgánico, antes entorpecido por el trabajo fraccional.

Sin embargo, al golpe militar no están todavía solucionados todos los problemas que generó la crisis de marzo, principalmente en el terreno de la reconstrucción de las células y los comités locales.

Pero empieza a dar frutos el logro más importante que es la inmensa cohesión política e ideológica interna generada; el nuevo clima existen-

te en el seno de la organización: de solidaridad, de confianza en la clase obrera, en el partido y en su futuro. Esto significa la incorporación en plenitud de nuestro partido al movimiento obrero al definirse el carácter de clase que estuvo amenazado desde el II Congreso al detentar la dirección los sectores pequeños burgueses.

El desarrollo posterior del partido sólo se explica por la justeza de las posiciones de clase que adopta.

El partido pasa a ser una de las expresiones políticas de la clase obrera por la consecuencia en la defensa de los intereses de ésta y del pueblo chileno. Esta consecuencia de su política es lo que explica nuestro desarrollo posterior al golpe. Hoy, esto se manifiesta en la lucha contra la dictadura fascista, en la búsqueda de la unidad de todas las fuerzas democráticas — en primer lugar de la Unidad Popular — y en su consecuencia anti-imperialista.

El desarrollo de la ideología de la clase obrera y la elaboración de la teoría revolucionaria en el partido permite proponer al pueblo chileno un proyecto de construcción de una sociedad más justa, más democrática, superior a la que el capitalismo puede ofrecer: la sociedad socialista.

Además, el desarrollo del internacionalismo proletario y nuestro compromiso con la defensa de los intereses de los trabajadores y de sus conquistas en el mundo son factores que indican un claro avance de la organización, con posterioridad al golpe, y lo incorporan a las grandes tareas de la humanidad: la lucha por la paz, la democracia y el socialismo.

Lo principal es constatar nuestro desarrollo cuantitativo y cualitativo en estos años. A pesar de las dificultades para la acción política, el partido crece en las masas. Su carácter de clase es lo que lo hace indestructible a la acción de la dictadura.

La perspectiva de hoy es la permanencia en el tiempo, hasta la eternidad, como la clase obrera.

En la corta vida de la organización le ha tocado enfrentar una cantidad de experiencias diversas que han apurado su desarrollo y su madurez como partido de la clase obrera. Estuvimos en la gestación de un gobierno que expresaba principalmente a la clase obrera, en el desarrollo de ese gobierno y la experiencia; hoy, bajo el sistema totalitario de corte fascista. Esto nos ha entregado — en cada etapa — un cúmulo de experiencias que el partido ha asimilado. Ello ha conducido a un aceramiento de la organización. Somos veteranos por el conocimiento y el aprendizaje en la lucha de nuestro pueblo.

Nos ha tocado vivir los años más intensos de nuestra historia patria y hoy, al calor del combate de nuestro pueblo contra el fascismo, nuestro partido participa a lo largo y ancho del país en las tareas de la resistencia democrática de nuestro pueblo, en todos sus sectores: trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres, pobladores, intelectuales y artistas.

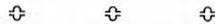
Lo principal es el hecho que el desarrollo del partido en estos años es el resultado de su justa política antifascista y de la línea de resistencia democrática y de masas del pueblo contra la dictadura.

Pregunta: Por último, ¿qué nos puede decir con respecto a la Unidad Popular?

Respuesta: Durante estos tres años ha habido un desarrollo y un fortalecimiento de las posiciones unitarias en la Unidad Popular. Los avances del trabajo de la Unidad Popular en el interior del país abren grandes perspectivas para superar las dificultades que hoy existen para un desarrollo superior de la resistencia de masas.

La Unidad Popular es una realidad política expresada por su trabajo de dirección en el país y en el exterior. Ello es garantía para el proceso de la unidad antifascista y no puede ser desconocida para entender el proceso político chileno hoy día.

La experiencia de estos años permite asegurar que la UP será capaz de superar los viejos problemas que se expresaron en el pasado.



SOLIDARIDAD

Luego de condena en la O.N.U.

REPUDIO MUNDIAL A LA JUNTA ABRE PERSPECTIVAS MAS AVANZADAS A LA SOLIDARIDAD

Horacio Silva

La comunidad internacional representada en las Naciones Unidas expresó en el mes de Diciembre su vigorosa condena al régimen de Augusto Pinochet. Este hecho, producido en el último mes de 1977, refleja de modo categórico el repudio que la inmensa mayoría de la humanidad siente por la tiranía chilena, repudio que se ha venido manifestando sin disminución desde los mismos días del golpe, que en el curso de este último año ha tenido numerosas e importantes expresiones, y que coloca a la dictadura militar en una situación de aislamiento pocas veces vista en el pasado.

En efecto, la Resolución de la O.N.U. — votada en la Tercera Comisión denominada de Asuntos Económicos y Sociales — fué aprobada por 98 votos a favor, 28 abstenciones y 12 en contra.* El voto, cursado por tan abrumadora mayoría, fué patrocinado por un amplio arco de fuerzas representativas de los más diversos sectores de opinión: Argelia, Austria, Cuba, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos, Guinea Bissau, Irak, Islandia, Italia, Libia, Luxemburgo, México, Mongolia, Portugal, Suecia, Yugoslavia, Unión Soviética, y otros países.

El importante pronunciamiento indica que la O.N.U. “deplora profundamente” la destrucción de la institucionalidad y de las garantías democráticas en Chile, señala que la Asamblea está “gravemente preocupada” por el hecho de que a pesar de los llamados de la O.N.U., de su Secretario General, de instituciones privadas y de personalidades de todo el mundo, las autoridades chilenas han insistentemente dejado de cumplir en lo que se refiere a dar una respuesta satisfactoria por los desaparecimientos de personas, y por las “constantes y flagrantes violaciones a los derechos humanos que continúan teniendo lugar en Chile”.

* Este artículo fué cerrado antes de la votación en la Asamblea General. El resultado final fué de 99 votos a favor de la condena, 14 en contra y 25 abstenciones.

En su parte resolutive, el voto expresa, en primer lugar, que “reitera su profunda indignación” por las violaciones de las libertades fundamentales y por la inexistencia de garantías a las personas, que sufren atropellos a sus libertades por medio de la intimidación, la tortura, los desaparecimientos, los arrestos arbitrarios, el exilio y la privación de la nacionalidad. En segundo lugar, expresa su “particular preocupación e indignación” por los desaparecimientos y por la negativa de las autoridades chilenas de aceptar su responsabilidad, o dar cuenta de dichas personas, o siquiera hacer una investigación adecuada en los casos que han sido puestos en su conocimiento. Y en tercer lugar, “deplora aún más la manera insatisfactoria con que las autoridades han cumplido su acuerdo con el Secretario General”, el que había solicitado una aclaración particular por un grupo de personas que motivaron una Huelga de Hambre de sus familiares, en Santiago, en Junio de 1977.

La O.N.U. deplora, además, la negativa de las autoridades chilenas a permitir el ingreso del Grupo de Trabajo al cual el organismo encargó la preparación de un Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, renueva el mandato del Grupo Ad-Hoc, e invita a la Comisión de Derechos Humanos a presentar proposiciones concretas para la constitución del fondo de ayuda a las víctimas del régimen y a definir de que manera influye en la violación de los derechos humanos la ayuda económica que en forma de préstamos internacionales recibe el gobierno de Pinochet.

El “Informe Allana”

A la base de esta Resolución estuvo el Informe entregado por el Grupo de Trabajo Ad-Hoc de la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U., también conocido con el nombre de “Informe Allana”.

Este Grupo fué creado por primera vez en Febrero de 1974, a pocos meses del golpe militar. Las sucesivas reuniones anuales de la Comisión han venido renovando el mandato, y por tanto la composición del equipo se ha mantenido. Lo integran Ghullam Ali Allana, su Presidente, de Pakistán, y Leopoldo Benites, de Ecuador, la Sra. M.T. Kamara, de Sierra Leona, Felix Ermacora, de Australia, y P. Diego, de Senegal.

La notable misión desplegada en estos años por el equipo le ha valido la negativa de la dictadura para autorizar su entrada a Chile. El sistema de funcionamiento, interesante en cuanto permite entender mejor los mecanismos que determinan finalmente el contenido de la Resolución, consiste en que el Grupo reúne durante un cierto período información y documentación de fuentes responsables y prepara una síntesis de las mismas que es entregada al Secretario General de la O.N.U. y distribuida entre los miembros de la Asamblea. Posteriormente, es de responsabilidad de la Comisión Tercera (llamada de Asuntos Económicos y Sociales) el tratar el informe en su ámbito y preparar un proyecto de Resolución. De entre los propios integrantes de esta 3ª Comisión se constituye un grupo redactor, y posteriormen-

te un grupo patrocinador un poco más amplio, que formula un proyecto que se vota en la 3ª Comisión, la cual reflejando la composición de la Asamblea General permite prefigurar el resultado final del trámite, que, como es obvio, no sufre alteraciones significativas.

Como se puede apreciar, es la etapa anterior a la votación final en la Asamblea General la fase decisiva del pronunciamiento, y de allí que el voto en Comisión, que se produjo en la primera semana de Diciembre, sea lo que nos permite evaluar la conducta de la O.N.U. con los índices que señalábamos al comienzo de esta crónica.

El Informe del Grupo de Trabajo presidido por Allana es una verdadera montaña de cargos irrefutables contra la Junta Militar chilena. Consta de 128 páginas centrales a las que se agregan 229 páginas de anexos. Cada uno de los 331 párrafos constituye una prueba de la barbarie del fascismo chileno y de la permanente violación no solo de los textos constitucionales anteriores a la dictadura, sino incluso de muchos de sus propios decretos. Para dar una imagen de la profundidad y amplitud del trabajo señalamos los títulos de los nueve capítulos del Informe: Relaciones con el Gobierno de Chile; Evolución Constitucional y Jurídica; Libertad y Seguridad de la Persona; La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; Los Organos Especializados de la Seguridad del Estado; Exilio; Libertades Intelectuales y Derechos Culturales; Derechos Económicos y Sociales; Observaciones Finales.

Sería por cierto imposible transcribir siquiera una mínima parte de las conclusiones del demoledor informe, a pesar de que muchas de ellas representan dramáticas novedades para la opinión pública internacional. El trabajo señala que “después de analizar las pruebas en nuestro poder, no podemos escapar a la conclusión de que las autoridades chilenas rechazan sistemáticamente respetar el derecho a la libertad y seguridad personal de aquellos considerados opuestos al actual régimen”. Expresa que los detenidos continúan sufriendo torturas, tanto físicas como mentales, “combinación que demuestra la existencia de un sistema concientemente planeado y designado a hacerla más efectiva”. Y analiza en detalle las mil formas en que el gobierno militar viola los derechos fundamentales.

Pero, el Informe no solo se refiere a temas que en mayor o menor medida han sido conocidos por la opinión pública, sino se refiere a aspectos que a pesar de su importancia no aparecen con la relevancia necesaria en las denuncias conocidas. Reitera, por ejemplo, que “el sistema judicial parece haber abdicado ante el ejecutivo”. Indica que hay en acto una suplantación de los arrestos masivos y largos por detenciones cortas y tortura, seguidos de vejación de los afectados y familiares. Manifiesta la ineffectividad de las llamadas “Actas Constitucionales de 1976”, diciendo que “la promulgación de esas Actas y los derechos subsecuentes solo han servido para introducir mayor confusión e inestabilidad a un sistema legal ya susceptible de

abuso, a la discreción de una autoridad militar con poderes ilimitados e indefinidamente absolutos”.

Y en otros campos señala: “el Grupo de Trabajo ha recibido informaciones fidedignas según las cuales continúa una estructura de estricto control por parte del Gobierno, de la administración de los servicios de enseñanza así como del contenido intelectual de los planes de estudio”. “El Grupo ha recibido testimonios según los cuales no basta que un profesor ajuste su comportamiento y sus clases a las directrices de la administración, sino que se espera de él también que participe en actividades fuera de programa ideadas para hacer propaganda del régimen actual”. “El Grupo ha recibido testimonios en el sentido de que se han introducido cursos sobre Seguridad Nacional en los planes de estudio en todo el sistema educacional. Pruebas fidedignas presentadas ante el Grupo indican que la supresión del pluralismo ideológico y de las libertades académicas en un clima de terror e intimidación han dado como resultado un estancamiento intelectual”.

Y agrega: “Si se hace un análisis comparativo de los gastos en servicios sanitarios se advierte una radical reducción del apoyo oficial”; “En 1976 se advirtió un notable incremento en los Servicios de Psicología y Siquiatría, el 75.8% de los casos correspondieron a este sector y los pacientes fueron, sobre todo, ex-presos políticos”.

“Durante una crisis económica mundial — señala, en fin, el Informe — el Gobierno de Chile ha venido aplicando programas que permiten que la mayor carga de las privaciones económicas y sociales recaiga de modo excesivo sobre los estratos más pobres de la población. Las restricciones al ejercicio de los derechos sindicales y el control regresivo de los salarios en una situación de inflación creciente lleva a una pobreza muy extendida”.

Una votación que refleja el año

Desde el punto de vista de la solidaridad, el voto de las Naciones Unidas cierra y refleja un año de lucha contra la Junta fascista.

En estos doce meses se desarrollaron innumerables foros y reuniones internacionales en que la opinión pública mundial y las más variadas fuerzas representativas de la comunidad internacional — donde destaca con nitidez el infatigable apoyo solidario del movimiento obrero internacional — han expresado su rechazo al gobierno de Pinochet y aportado en el aislamiento internacional de la dictadura y la búsqueda de una solución democrática para Chile.

En Marzo, la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U. aprobaba una drástica Resolución llamando a poner fin a los crímenes en Chile.

En Mayo, se celebraba en Italia el “Encuentro Internacional de la Juventud por Chile”, con participantes de 44 países y el concurso de representantes de todas las corrientes ideológicas.

En Junio, en Grenada, tenía lugar el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la O.E.A. aprobaba el Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, y se condenaba el siniestro procedimiento de las “desapariciones” de presos políticos.

En Agosto, en Ginebra, sesionaba la Sub-Comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las minorías, de la O.N.U., que centró su análisis en las consecuencias de las distintas formas de asistencia prestada a la Junta con el objeto de presentar recomendaciones para poner fin a los créditos y ayuda financiera.

En Agosto mismo, en Rotterdam, se reunía la “Conferencia sobre Perspectivas Futuras para Chile” donde la Internacional Socialista impulsaba un conjunto de iniciativas en el terreno diplomático, económico y político.

Las principales organizaciones internacionales de trabajadores y sus filiales latinoamericanas y nacionales han solidarizado con los trabajadores chilenos y su organización principal, la CUT, y la opinión pública internacional ha sido informada — en general — en una perspectiva crítica respecto de la dictadura chilena, no solo por los órganos principales de los partidos obreros, y fuerzas progresistas y democráticas, sino por los voceros fundamentales del mundo capitalista. Es interesante constatar como, por ejemplo, el “New York Times” señalaba, en Septiembre, en un editorial titulado “Un sombrío aniversario en Chile”, que “hay buenas pruebas de que el aislamiento internacional de Chile es un arma poderosa para aquellos funcionarios y oficiales militares chilenos partidarios de un retorno al gobierno constitucional”. O, el “Times”, de Londres, que en la misma fecha indicaba que “Chile sigue siendo motivo de oprobio por la represión política”. De la misma manera otros medios, como el “Christian Science Monitor”, relataba la opinión de algunas autoridades norteamericanas que luego de visitar Chile en Agosto habían regresado con la impresión de que la Junta “se estaba moderando”, para luego afirmar que “el General Pinochet ha arrojado un jarro de agua fría sobre estas perspectivas”.

Y los fascistas?

La crítica situación del país en el terreno internacional preocupa crecientemente a la dictadura.

A pesar de los grotescos grados de exaltación que los gobernantes chilenos exhibían al inicio respecto de la importancia “ejemplarizadora” del modelo militar-fascista en el mundo “cristiano-occidental”, hoy día esta conducta ha cambiado radicalmente, y comparten los editoriales de “El Mercurio” y “La Segunda” quienes — como lúcidos voceros del capital monopolico — califican de “grave” y “preocupante” la deteriorada imagen internacional del país.

En el centro de esta preocupación se encuentra evidentemente la “difícil relación de Chile con los Estados Unidos”, centro mundial del imperialismo

El 10 de septiembre pasado el General Leigh declaraba a una red televisiva de Miami — la WRHC — que “Los Estados Unidos parece masoquista, no quiere ser amigo de sus amigos”. Por su parte “El Mercurio”, aún calificando de “exitosa” la visita de Pinochet a Washington, advertía “sería peligroso creer que la situación internacional de Chile ya no debe preocuparnos”, y agregaba: “si a la incompreensión occidental se suma la hostilidad soviética el cuadro resulta altamente desfavorable”.

Para confirmar lo anterior, Pinochet — en una entrevista a la Revista Bohemia, de Caracas — declaraba “el enemigo más poderoso que tiene el régimen militar chileno son los intereses concitados en el exterior para perturbar la normalización de la vida nacional”.

Como es evidente, la preocupación fascista no basta para modificar la vergonzosa imagen del régimen. A estas alturas, ni los más ambiciosos retoques que el fascismo de a su maquillaje — como el cambio de nombre de la DINA — pueden ocultar la dramática realidad del país. Los chilenos que están en el exterior y el movimiento mundial de solidaridad no han hecho otra cosa que constatar y denunciar los crímenes y la política fascista. La imagen de la dictadura depende fundamentalmente de su propia política y de allí la imposibilidad que mejore. Es por eso que los cómplices que ocasionalmente le tienden una mano, como el Sr. Strauss, de Alemania Federal, más que mejorar su imagen terminan por compartir mundialmente el desprestigio de Pinochet.

De nuevo la O.N.U.

Esta no es una frase nuestra. Es un título de “El Mercurio”, que resume los descalabros de la Junta en el organismo internacional, para luego advertir “la opinión nacional, la ciudadanía toda que resistió la amenaza marxista y que hizo posible el 11 de septiembre, debe estar alerta frente a lo que se prepara”, y sigue, “el país se encuentra frente a una campaña internacional muy vasta y profunda. La unidad interna, la afirmación de la soberanía e independencia, y la claridad de juicio acerca de lo que es el debate leal sobre el futuro de Chile y lo que es el sistema de señales conectado con el exterior, tienen que resaltar como nunca, pues la verdadera democracia no se defiende abriéndole las puertas al marxismo sino rematando la obra de reconstrucción”.

La Resolución de la O.N.U. constituye un valioso y alentador antecedente para las fuerzas que luchan contra la tiranía en el interior del país, y un punto de referencia excepcional para avanzar en el trabajo de la solidaridad internacional. La expansión de la lucha de masas que gana cada día nuevos espacios democráticos en Chile, debe llevar aparejada una acción de la solidaridad que se oriente a generar medidas cada vez más concretas y efectivas contra la dictadura, por parte de gobiernos y organizaciones internacionales.

Transformar el consenso internacional en acciones diplomáticas, económicas y políticas contra la dictadura, ese es el desafío que la votación en la O.N.U. pone al movimiento de solidaridad.

“EL DERECHO A VIVIR EN LA PROPIA PATRIA”

“La lucha por crear condiciones en los plazos más breves posibles para que de una manera creciente los chilenos que viven en el exilio retornen al país, debe convertirse en un objetivo importante de las fuerzas democráticas, y en particular del movimiento popular. Es hoy día posible y necesario emprender una vasta movilización nacional e internacional con este propósito”. (Editorial del N. 12 de “Resistencia Chilena”)

Jaime Castillo lleva a cabo huelga de hambre en Venezuela

El dirigente democratacristiano chileno Jaime Castillo Velasco hizo una huelga de hambre de cuatro días en Caracas, Venezuela, para protestar contra los “atentados a quienes ejercitan su propia libertad de conciencia y expresión”. Como se recordará Castillo fué expulsado del país por el fascismo hace más de un año. En una carta a Kurt Waldheim, el dirigente señala que su decisión persigue llamar la atención de la opinión pública sobre los atropellos a los derechos del hombre en Chile. El personero DC recibió el apoyo de numerosas fuerzas democráticas y progresistas del mundo entero. La oficina de solidaridad para América, encabezada por Luis Maira le envió un telegrama solidario y la UP Exterior emitió una declaración oficial de apoyo.

La huelga de Castillo tuvo también repercusiones en el interior de Chile, donde la opinión pública conoció el hecho y además se produjo una acción paralela de un grupo de jóvenes democratacristianos entre ellos Guillermo Yunge, dirigente estudiantil de la DC - que hicieron una huelga de hambre en un recinto de la Iglesia Católica.

Al término de la Huelga los jóvenes improvisaron una manifestación pública con gritos y slogans antifascistas que posteriormente se autodisolvió. La acción de Castillo Velasco se inserta en la lucha que los chilenos libran en el exterior por el derecho a vivir en la propia Patria.

Expulsadas a su retorno a Chile esposas de desaparecidos

Ulda Ortiz, Ana González y Gabriela Bravo, fueron expulsadas de Chile a su llegada a Pudahuel desde los EE.UU. Las tres mujeres había salido del país a representar la protesta de los familiares de los desaparecidos que en Junio hicieron una huelga de hambre en Santiago, y cuya acción motivó un compromiso de Pinochet ante el Secretario General de la O.N.U. de aclarar la situación de tales desaparecidos. Como se sabe, la respuesta del dictador negó la participación de sus servicios de seguridad en el desaparecimiento de esas personas y desmintió que se encontraran detenidas.

Las valerosas mujeres protestaron ante las Naciones Unidas, la delegación norteamericana en la O.N.U., el Departamento de Estado, y llamaron a la opinión pública internacional a reforzar su lucha por los desaparecidos y a condenar a la tiranía de Pinochet. De vuelta al país, las mujeres fueron expulsadas con destino a Buenos Aires, desde donde viajaron nuevamente a EE.UU.

Las compañeras no han aceptado el ofrecimiento de asilo ofrecido por el

gobierno norteamericano, sino han insistido en el derecho que les cabe de vivir en Chile y de luchar por conocer el paradero de sus esposos desaparecidos.

General Poblete privado de la nacionalidad por el fascismo

La Junta de Pinochet ha quitado la nacionalidad al General Sergio Poblete. El militar constitucionalista, se opuso a la traición de los golpistas perpetrada en 1973, y posteriormente se sumó a la lucha antifascista exterior desde su lugar de exilio en Bélgica. Ante la medida el General Poblete ha dado a conocer el siguiente comunicado:

“La Junta Militar Fascista de Chile, en un nuevo arresto de prepotencia y arbitrariedad, producto de su desesperación, ha dispuesto despojarme de mi nacionalidad. Esta medida no me afecta. Mi calidad de General de la República, de soldado de la Patria y de chileno, no está sujeta a las veleidades de Generales que han arrastrado a nuestras Instituciones armadas y al país al período más nefasto de su historia.

Ante de mi, similar medida pretendieron imponerla a otros distinguidos compatriotas, sin que ello fuera reconocido por los chilenos en la Patria, ni por las naciones civilizadas del mundo que solidarizan con el drama de nuestro pueblo. Ante esta demostración de aislamiento y de repulsa mundial, la Junta ha respondido como solo ella sabe hacerlo, con métodos terroristas condenados por toda la humanidad. También el Sr. Orlando Letelier, ex Ministro de Defensa y ex Embajador en Washington, fue “despojado” de su nacionalidad pocos días antes de su brutal asesinato. Con el mismo método, respondiendo a la misma orden que fuera firmada por la misma mano, fue asesinado el Sr. General Carlos Prats González, ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile. Todo soldado constitucionalista no teme ni temerá acciones de amedrentamiento como estas. Tal medida de la Junta Militar fascista de Chile, se suma a otras medidas de intimidación derivadas de nuestra incansable labor de solidaridad y apoyo por rescatar a la Patria subyugada y devolver a nuestros institutos armados la honra perdida a partir del 11 de septiembre de 1973.

Esta medida de la Junta Militar Fascista no hace sino reafirmar mi condición de chileno y su rechazo es también una denuncia al mundo frente a cualquier hecho posterior que pueda afectar mi vida. Cuento con el respaldo de mis camaradas de armas y el pueblo de mi país, respaldo que recibiera cuando mi hijo el Capitán de Bandada Sergio Poblete muriera extrañamente en un así llamado accidente durante un vuelo de práctica de tiro, en Abril de 1976. Recibir una “sanción” de quienes han asesinado al Presidente Constitucional de la Republica y Generalísimo de las FF AA, deshonrando nuestras Instituciones armadas, aislando a nuestra nación de la comunidad internacional, sometido a nuestro pueblo al poder de las armas que este mismo le confiara y con ellas quitaran la vida a los mejores hijos de Chile, recibir, reitero, una sanción de estos, no hace sino reafirmar mi calidad de chileno, de soldado y de General amante de mi Patria. Frente a esto, cobran plena vigencia las palabras expresadas por Orlando Letelier: “Nací chileno, soy chileno y moriré como chileno. Ellos nacieron fascistas, son fascistas y morirán como fascistas”.

INTERNACIONAL

COMUNISTAS Y CATOLICOS EN ITALIA: UNA NUEVA ETAPA EN EL DIALOGO

Gabriel Rodríguez

Hace poco tiempo la prensa italiana ha dado a conocer la respuesta que Enrico Berlinguer, Secretario General del Partido Comunista Italiano, dirigió a monseñor Luigi Bettazzi, Obispo de Ivrea en Italia, respondiendo así a una carta que éste último le enviara a mediados de 1976¹.

Con la carta de Berlinguer, que trata algunos de los más actuales existentes en la relación entre comunistas y católicos, Estado e Iglesia, etc., se ha abierto en Italia un interesante debate e intercambio de opiniones.

En este debate se plantean un conjunto de posiciones que seguramente tendrán importante influencia en la recíproca actitud y relación entre cristianos y marxistas, en Italia e incluso más allá de sus fronteras.

La carta de Berlinguer ha levantado voces en múltiples sectores e instituciones, demostrando con ello la importancia del tema, ya no sólo desde el punto de vista teórico, sino fundamentalmente, como veremos, por las posiciones políticas concretas frente a la situación en Italia. Fuera de la esperada intervención del Vaticano a través de su órgano de prensa L'Osservatore Romano, ha opinado la Democracia Cristiana, la prensa representativa de la burguesía italiana, los sectores laicos especialmente a través del Partido Socialista Italiano, el Comité Episcopal Italiano, los jesuitas en su revista "Civiltà Cattolica" y diversos personeros del PC Italiano, entre ellos algunos católicos independientes que fueron elegidos parlamentarios en las listas de ese Partido en las elecciones de Junio del año pasado.

Es interesante recalcar que esta nueva etapa del debate se inicia durante la celebración del último Sinodo de Obispos en Roma (que trató los proble-

¹ Los textos de ambas cartas han sido publicados en Rinascita n. 40 del 14. Octubre 1977. La traducción de las citas es de responsabilidad exclusiva del autor.

mas de la catequesis en un mundo secularizado) y poco después de que el Episcopado francés publicara dos documentos sobre el tema. A ello se agregan las declaraciones del PC Español y catalán que muestran una reflexión muy similar sobre la materia. La situación de ascenso de la izquierda en algunos países de Europa Occidental y en concreto en Italia, donde los católicos son una mayoría importante, termina por poner el marco de relevancia a este intercambio de ideas.

I.— CONTEXTO HISTORICO Y POLITICO DEL DIALOGO

Para entender los términos y la oportunidad de este diálogo, es importante ubicarlo en el contexto actual de la política italiana y de la historia de la interrelación entre católicos y comunistas en los últimos años². Sacar el debate de este contexto podría significar extraer conclusiones apresuradas y mecánicas.

Durante todo el transcurso de su historia, el PC Italiano ha dado gran importancia al desarrollo de su posición frente al mundo católico. Ello no sólo por encontrarse la sede de la Iglesia Católica en Italia, sino por el propio desarrollo de su política en un país donde la masa de católicos es un sector importante y determinante en la vida nacional. Ya en los desarrollos teóricos de Gramsci, por la importancia que éste da a los aspectos ideológicos y al rol de relativa autonomía de ellos en el desarrollo de la sociedad, el tema de la expresión religiosa y en concreto la “cuestión católica” aparece planteada. El PCI ha recogido ese conjunto de desarrollos teóricos y los ha proyectado en su línea política actual especialmente a partir de Togliatti.

Para ubicarnos en los términos del debate entre estos dos mundos y especialmente en los argumentos comunistas, es importante analizar algunos aspectos de la línea política del PC. Deliberadamente hemos hecho abstracción de los elementos de cambio económico social para centrarnos en aquellos que tienen relación directa con el debate que analizamos.

La historia del PCI esta determinada radicalmente por la derrota del movimiento obrero en los años 20, el nacimiento del fascismo y la experiencia de la lucha antifascista a fines de la II Guerra Mundial (1943-1945). La República que nace con posterioridad a la derrota del fascismo, es el producto de la convergencia de todas las corrientes democráticas que están por reconstruir el país y eliminar de raíz la posibilidad del renacimiento de los sectores antidemocráticos. En esa convergencia de corrientes, el PCI, y a través de él la clase obrera italiana, tiene una participación fundamental, avalada

² Un documento ensayo histórico sobre las relaciones entre comunistas y católicos en Italia puede encontrarse en ROJAS, Jaime y ROJAS Clara “Católicos y Comunistas en Italia”. Rev. Chile América, Ns. 19, 20, 21. Junio-Julio 1976, Roma.

por su decidido concurso a la lucha partisana antifascista. A partir de ese hecho, nadie puede negarle a los comunistas italianos un rol clave en el desarrollo y perfeccionamiento de la democracia. La convergencia de corrientes democráticas se refleja en la Constitución de aquel entonces que los comunistas califican de Constitución democrática y no liberal-burguesa. Durante la guerra fría, la Democracia Cristiana rompió la alianza antifascista excluyendo a la izquierda del gobierno y practicando el anticomunismo. A partir de estos hechos se entiende entonces la lógica del PCI de mantener como marco de su lucha la explicitación y aplicación de esas normas constitucionales. La lucha así entendida y el ascenso en ella de la clase obrera dará a Italia un Estado realmente democrático y popular, base de una sociedad socialista. En ese sentido la democracia es para los comunistas no sólo el terreno donde se avanza hacia el socialismo, sino que el perfeccionamiento de ella, es la condición “sine qua non” para alcanzar el socialismo.

Un segundo elemento que interesa destacar para entender el contexto del artículo, es la afirmación del PCI que la democracia plena sólo se puede alcanzar con la participación de todas las fuerzas políticas que están por ella y en las cuales debe expresarse el peso del movimiento obrero. y, por tanto, esa construcción de la democracia no es un simple juego de gobiernos de mayorías transitorias. Este segundo elemento tiene consecuencias en el carácter del Estado que se quiere alcanzar, en la forma en que se da la lucha política y en los aspectos sociales y culturales.

Para el PCI el estado plenamente democrático es un estado laico, no ideológico en el sentido que no favorece o privilegia una determinada ideología o corriente filosófica³. Desde ese punto de vista, la lucha política enfatiza la lucha por la democracia y en ella tienen cabida todos aquellos partidos o sectores que están por ella. Esta línea se demuestra hoy en actitudes tan concretas como en la decisión del PCI de no constituir Gobierno utilizando mayorías producto de alianzas, si en ese gobierno no participa la DC, partido hoy día individualmente mayoritario por estrecho margen. El carácter de su actual posición frente al gobierno DC, está determinada por este concepto. No se plantea “la alternativa de izquierda” de un gobierno al margen de la DC, sino de un programa que debe ser aplicado por el conjunto de los partidos democráticos, y que en su base es la explicitación — aunque limitada — de la Constitución democrática de post-guerra. Por la fuerza electoral que el PCI hoy día dispone, por su presencia en la clase obrera y sectores de intelectuales, objetivamente es un “partido de masas” que tiene participación decisiva en la orientación de la sociedad, pese a no estar aún en el gobierno. Su perspectiva en ese sentido es la realización del “compromiso histórico” con la DC y otras fuerzas democráticas, con el objetivo de superar la crisis de la sociedad italia-

³ Cf. LONGO, Luigi “Discurso en el XI Congreso Nacional del Partido Comunista Italiano” 1966 (Publicación del PCI).

na, desarrollar plenamente la democracia y construir el socialismo, en el marco Europeo.

La perspectiva política del PC busca dar una respuesta y un camino concreto de construcción del socialismo en los países de capitalismo desarrollado ante la evidente crisis en que estos se debaten, superando las derrotas históricas sufridas por la clase obrera y las experiencias socialdemócratas.

Esa forma de respuesta es lo que gruesamente se ha dado en llamar el "eurocomunismo".

En la actualidad la línea política del PCI y la evolución de la sociedad italiana ha llevado a la conformación del acuerdo de los partidos democráticos o "arco democrático", que abarca desde el Partido Liberal pasando por la DC al PCI, no en términos de una participación formal en el gobierno, sino en una estructura mínima que permita desarrollar puntos de vista comunes para los más relevantes problemas del país. Este acuerdo no ha sido fácil y en gran medida es el producto de la presión de las masas y de la clase obrera, en su gran mayoría canalizada a través del PCI, que lucha por hacer avanzar el cuadro político hasta una plena participación suya en la mayoría parlamentaria que sustenta el gobierno y, luego, en éste.

Este resultado que tiene para los comunistas italianos una expresión más allá de lo meramente electoral, plantea si algunos serios problemas y contradicciones. Desde el momento en que el PCI no se plantea como un partido de oposición en las actuales circunstancias de gobierno DC, está por un lado comprometido con algunas de las iniciativas conjuntas del arco democrático que pueden no representar fielmente su línea, y por otro debe responder ante las masas frente a las cuales tiene un importante rol de dirección. Se plantea así la contradicción entre "partido de lucha y partido de gobierno". En gran medida los comunistas han sabido sortear esta dificultad desarrollando dos aspectos: un programa político concreto para Italia, posible de ser aplicado hoy día y con el cual se enfrentan en cada punto de la discusión al interior del arco democrático y, por otro, la aplicación y el desarrollo de ese programa en las zonas (comunidades, provincias y regiones) donde disponen de creciente influencia y forman parte de los gobiernos locales (especialmente en el norte).

La bandera de lucha que significa un programa político concreto, "para hoy" les ha permitido desarrollar una gran influencia de masas, pero al mismo tiempo los obliga a tener opiniones y entrar en debates muy concretos frente a los problemas nacionales.

Uno de ellos es el tema de la relación entre cristianos y marxistas.

Durante el desarrollo de su línea, el tema del mundo católico ha estado permanentemente presente, sea en sus aspectos teóricos, sea en los práctico-políticos. La relación no ha sido fácil, y podría decirse que sólo a partir de la Encíclica *Pacem in Terris* de Juan XXIII (que distingue entre doctrinas filosóficas erradas y movimientos históricos, como parámetros para iniciar un

diálogo con fuerzas no-cristianas en el plano político)⁴, las posiciones de la Iglesia frente a los comunistas italianos ha comenzado a evolucionar más allá de la mera condenación cerrada. La Iglesia tiene aquí una responsabilidad importante por su ausencia en el nacimiento del movimiento obrero, actitud que llega a su culminación con Pío XII, para recién entrar con posterioridad en lo que puede llamarse la apertura al diálogo. Hoy día en Italia, de una forma u otra se mantiene por parte de la Iglesia una suerte de mediatización de la relación con lo político a través de la Democracia Cristiana. En ese partido, nacido en lo ideológico de la convergencia de la Doctrina Social de la Iglesia y el humanismo cristiano desarrollado por la mayor participación de los laicos en la política, es donde la iglesia ha volcado una de sus formas de "participación" en lo temporal, cayendo en alguna medida en una nueva forma de integrismo político-religioso.

En ese sentido un diálogo "directo" Iglesia-PCI crea problemas a ambos. A la Iglesia, por cuanto deja fuera del debate al partido que de una u otra forma la "representa" en la búsqueda de unidad de los cristianos, y a los comunistas, por cuanto siendo consecuentes en su línea política, en un problema de esta magnitud, no pueden dejar de lado a quienes considera una fuerza democrática importante en el país, pese a sus diferencias.

Es en este contexto político de ascenso de la clase obrera en Italia y, por lo tanto, de los comunistas, de perspectiva democrática bajo responsabilidad del conjunto de los sectores políticos que están por ella y de un gobierno por ahora en manos exclusivas de la DC pero que en la práctica opera por el acuerdo tácito de otras fuerzas, que Monseñor Luigi Bettazzi, obispo de Ivrea (Presidente de Pax Christi Internacional y catalogado como obispo progresista) dirige una carta al Secretario General del P.C. Italiano.

II.— BERLINGUER RESPONDE A MONSEÑOR BETTAZZI

El texto de la carta de monseñor Bettazzi es una muestra de como importantes sectores de la Iglesia comienzan a enfrentar con seriedad y honestidad el creciente desarrollo del mundo marxista en los países capitalistas. Se inicia dicha carta con la constatación objetiva de ese desarrollo en Italia expresado en las últimas elecciones, buscando respuestas al porqué de ese crecimiento e influencia, partiendo explícitamente si, de la base que la ideología marxista profesada por el PCI es "evidentemente irreconciliable con la fe cristiana"⁵, por su carácter materialista y ateo. A partir de ello plantea dos cuestiones centrales:

⁴ Cf. Encíclica "Pacem in Terris" Juan XXIII, N. 36, Ed. Paulinas.

⁵ La citas de la Carta de Mons. L. Bettazzi al Secretario General del PCI estan tomadas del texto de Rinascita N. 40.

— Reconoce como positiva la presencia de cristianos en las filas del PCI en cuanto ello contribuirá a que el partido analice constantemente cuales de sus posiciones van dirigidas a luchar por la justicia y la igualdad y cuales responden a “estímulos que cumplieron su función histórica pero que no son esenciales al desarrollo de una política al servicio del pueblo”.

— Pide al PCI “un esfuerzo de respeto y de comprensión por los problemas religiosos” y “no ostigar explícita o implícitamente las instituciones religiosas”.

Termina afirmando que “El Evangelio que el obispo está llamado a anunciar no constituye una alternativa, ni menos una contraposición a la liberación del hombre, sino debe constituirse en su inspiración y su alma”.

Un año después, sin que los problemas planteados hayan perdido vigencia, el Secretario General del PCI respondió a la carta.

En su respuesta Berlinguer hace varias afirmaciones que adquieren importancia por el contexto del debate en que se plantean.

En primer lugar recuerda que el “pleno y riguroso carácter laico del Partido está desde mucho tiempo afirmado en el artículo 2 de su estatuto”⁶ que plantea que pueden inscribirse en el PCI todos los ciudadanos, independientemente de su raza, *fe religiosa* o *convicción filosófica* que acepten el programa político del Partido⁷.

Afirma que la vida y la lucha de los comunistas italianos no se habría podido desarrollar sin las lecciones transmitidas por los maestros del pensamiento político revolucionario y de los fundadores del movimiento comunista. Ese patrimonio del análisis marxista sin embargo se entiende y se utiliza críticamente como enseñanza, y no se “acepta y lee dogmáticamente como un texto inmutable”.

Más adelante se pregunta Berlinguer si de este patrimonio de orientación, “¿se sigue la concepción de un partido que profesa una filosofía y en particular una metafísica materialista y una doctrina atea y que se propone imponer, o sólo privilegiar en la actividad política y en el Estado una particular ideología o el ateísmo?” y a continuación responde “Una vez más respondo claramente que no”.

Siguiendo con su argumentación, afirma “la voluntad de construir y de hacer vivir aquí en Italia un partido laico y democrático y como consecuencia directa, un Estado laico y democrático y por eso mismo no teista, ni ateo, ni antiteista”.

⁶ Las citas de la respuesta del S.G. del PC Italiano están tomadas del texto aparecido en *Rinascita*, N. 40.

⁷ Artículo N. 2 del Estatuto del PCI (aprobado en el V. congreso de 1946): “Pueden inscribirse en el PCI los ciudadanos que hayan cumplido 18 años de edad y que — independientemente de la raza, de la fe religiosa y de las convicciones filosóficas — aceptan el programa político del partido y se esfuercen en trabajar para hacerlo realidad, a observar el estatuto, a trabajar en una organización del partido...”

La argumentación que Berlinguer desarrolla busca mostrar que la historia del PCI es consecuente con estos planteamientos. Como decíamos anteriormente, es desde Gramsci que el PCI ha dado especial importancia a la relación con el “mundo católico” entendiendo por él no sólo a la Iglesia Católica, sino a las múltiples expresiones políticas, sociales y culturales en que se manifiesta el fenómeno cristiano en Italia. Berlinguer hace referencia en su argumentación a lo planteado por Togliatti ya en 1954 cuando éste llamaba a un acuerdo con los católicos para conjurar la amenaza atómica. “Nosotros no exigimos al mundo católico” decía Togliatti “que deje de ser el mundo católico. Tendemos a la comprensión recíproca, a una comprensión que permita, sobre todo, discernir la existencia, hoy, de la tarea, del deber, de salvar la civilización amenazada; tarea en la que el mundo comunista y el mundo católico pueden coincidir en unos mismos objetivos y pueden colaborar para alcanzarlos”⁸.

Más adelante Berlinguer cita directamente a Togliatti cuando éste en 1962, desarrolla una tesis, que posteriormente aprobada por el X Congreso, significó un avance fundamental en la relación con el mundo católico: “Se trata de comprender” — decía Togliatti — “como la aspiración a una sociedad socialista no sólo puede abrirse camino en hombres que tienen una fe religiosa, sino que tal aspiración puede encontrar un estímulo en una conciencia religiosa enfrentada a los dramáticos problemas del mundo contemporáneo”.

Berlinguer avanza algunos pasos en esta argumentación a propósito del reconocimiento del aporte que al PCI hacen aquellas personalidades católicas que fueron elegidas en su lista electoral. Con ello el PCI ha querido confirmar, sostiene Berlinguer, “no sólo su respeto por la religiosidad de estos amigos, sino por sobre todo valorar el aporte que su experiencia humana y civil, formada religiosamente, puede entregar a la obra común de renovación, subrayando al mismo tiempo el carácter laico de la política y del compromiso político”. Y continúa: “no hay necesidad de destacar que esta referencia a la laicidad no implica la mínima renuncia a las respectivas tradiciones de las ideas, ni la reducción de estas a un hecho exclusivamente privado”.

Agrega luego Berlinguer “el poseer una fe, el ser inspirado por una conciencia religiosa, lejos de ser considerado un hecho de por sí incompatible con la aspiración al socialismo, es valorado como una condición que puede estimular al creyente a perseguir también él la renovación de la sociedad en un sentido socialista”.

Ante las prevenciones de Mons. Bettazzi sobre la situación del mundo católico en países socialistas, el dirigente comunista plantea que en “países

⁸ Togliatti, P. “Por un acuerdo entre Comunistas y católicos para salvar la Civilización humana”. En “La Vía Italiana al Socialismo”. Colección Roca N. 10, México 1972.

donde se está construyendo el socialismo, se ha dado vida a Estados en los cuales, por influencia de determinadas tradiciones teóricas y por peculiares razones y condiciones históricas, se ha terminado en la práctica por caer en discriminaciones sobre la base de criterios ideológicos. De esa situación se está comenzando a salir fatigosamente, lentamente, pero también contradictoriamente, por cuanto en algunos países del Este Europeo se encuentran todavía manifestaciones de intolerancia ideológica del estado". Junto a la afirmación anterior, analiza el caso del occidente europeo bajo sistema capitalista ("sistema por excelencia discriminatorio en el plano económico, social y político") donde se opera con abiertos prejuicios ideológicos (caso de Alemania Federal) o donde la religión católica continúa siendo considerada como religión de Estado (concordato entre Italia y el Vaticano de 1929).

Para los comunistas italianos dice Berlinguer "Nuestro Estado, aquél que nosotros comunistas hemos contribuido en gran medida a edificar con la Resistencia y la Constitución, es un estado democrático sobretodo por la amplitud sin precedentes de las fuerzas sociales que han sido puestas en su fundamento. Nuestro estado ha nacido como consecuencia del pleno ingreso en la vida política nacional de las masas proletarias, campesinas y populares de orientación comunista, socialista y católica... Para subsistir y desarrollarse en armonía con su impronta social y política, nuestro estado italiano no puede ser sino laico, vale decir, no ideológico". Sólo así, concluye, puede expresar verdaderamente "en toda su potencialidad, su propia naturaleza democrática original".

La parte final de la carta del Secretario General del PCI, está dedicada a entrar en el debate de la relación entre las organizaciones religiosas y el rol del estado en los servicios sociales y asistenciales. Este es un debate muy actual en Italia y a través del cual la argumentación general desarrollada entra a concretarse en torno a un problema muy específico. "Nuestro estado democrático y pluralista, sobre todo a través de sus articulaciones autónomas locales, no puede no asumir por sí mismo — pero para administrarlos democráticamente — servicios civiles y sociales fundamentales para el bien de la comunidad nacional". En esto le cabe una gran iniciativa y participación a las Instituciones religiosas y autoridades eclesiásticas, pero entendiendo que su deber es desarrollar esa democracia y no entenderla como "la multiplicación de cuerpos separados e incommunicados". "El estado democrático como principio respeta la iniciativa autónoma de los privados en el terreno social, pero no puede por un malentendido pluralismo, renunciar a sus propias funciones".

Termina Berlinguer su carta citando la intervención de Togliatti en 1963 en Bergamo en que planteaba la necesidad de "considerar el mundo católico como un complejo de fuerzas reales — Estado, gobierno, organizaciones, conciencia individual, movimientos de diversa naturaleza — y estudiar en que modo frente a la revolución del tiempo presente y a las perspectivas del

futuro, es posible una comprensión recíproca, un recíproco reconocimiento de valores y de allí un entendimiento y también un acuerdo para alcanzar fines que son comunes, en cuanto son necesarios e indispensables para toda la humanidad".

Como puede deducirse del contenido de las cartas, el Secretario del PCI, entra de lleno en el debate con el mundo católico. Las reacciones no se hicieron esperar, en especial por el carácter concreto y actual, respecto de la situación política en Italia, que las afirmaciones tienen.

III.— LAS REACCIONES AL DEBATE EN ITALIA

El tenor general de los comentarios y respuestas, ya sea directas o indirectas, podría decirse que es positivo aunque todavía persisten viejas barreras de sectarismo y falta de sinceridad en el diálogo.

Un primer grupo de comentarios proviene de la Iglesia, ya sea en forma oficial a través de un artículo de primera plana de "L'Osservatore Romano" como de algunas intervenciones de Obispos participantes en el Sínodo y el Comité Episcopal Italiano. Paralelo a estos comentarios los jesuitas han planteado su opinión a través de varios artículos en su Revista "Civiltà Cattolica," que analiza punto a punto la carta de Berlinguer y que profundiza los conceptos de "pluralismo" y "laicidad".

La respuesta del Vaticano⁹ se inicia reconociendo la importancia de la carta de Berlinguer que "exige una lectura particularmente atenta, tanto por su particular importancia, que es imposible no atribuirle debido a la autoridad de quien la escribe y por la obvia suposición de que no ha sido escrita sin el conocimiento y el consenso de otras instancias responsables del Partido del cual Berlinguer se hace portavoz, como también por la naturaleza de los argumentos que toca". El tono general del comentario vaticano no recuerda en ningún instante las condenaciones de antaño, pero si un cierto temor a abrirse a un diálogo que puede cuestionar muchos elementos doctrinales y prácticos si se hace en profundidad. La argumentación del Vaticano esta centrada en acoger la disposición expresada por el PCI en la carta, y aún valorarla, pero planteando que más allá de los escritos, las intenciones deben mostrarse en hechos.

"Ha sido destacado por diferentes sectores como la carta de Berlinguer, mientras se refiere ampliamente al artículo 2, no ponga ningún acento en el

⁹ "Partido comunista e cattolici in Italia". Artículo editorial Osservatore Romano. 17-18 Octubre 1977.

artículo 5 del Estatuto del Partido”¹⁰. Este artículo se refiere a la formación de los militantes del Partido en el marxismo-leninismo. Reconoce el articulista que en la carta de Berlinguer se habla de “una lectura crítica y no dogmática” del marxismo, pero se pregunta con cierto temor cuales son “los límites admisibles de esa lectura y utilización críticas”. Citando a Lenin, recuerda que éste planteó que el Partido debía abrirse a sectores proletarios que “conservaban trazas de viejos prejuicios” (refiriéndose a los aspectos religiosos) y se pregunta entonces cual será el destino de la política de los comunistas hacia la religión una vez que éstos lleguen al poder. “Falta un largo y no fácil trabajo de clarificación a nivel doctrinal y de aseguramiento en el plano de la praxis”, pero mientras tanto “los católicos no pueden olvidar las claras enseñanzas de la Iglesia acerca de la incompatibilidad de la profesión cristiana con la aceptación de los presupuestos doctrinales del marxismo”.

Sin embargo, para asegurar la posibilidad del diálogo, termina L'Osservatore Romano afirmando con una frase de la carta de Berlinguer que “no queremos desestimar ninguna sincera voluntad, convencidos también nosotros que se trata de problemas cuya solución positiva (donde posible, agregamos y auguramos), es muy importante para el porvenir de la sociedad y de Italia”.

El comentario vaticano aparece casi simultáneamente con un editorial del diario democristiano *Il Popolo*¹¹. Para la DC la carta entre Berlinguer y Mons. Bettazzi y posteriormente el comentario de la Iglesia, le crea una situación no muy confortable, por cuanto se produce un diálogo directo, del cual pese a su carácter de partido cristiano (aunque formalmente laico desde el Congreso de Mayo de 1976) queda al margen.

Pese a ello, su comentario es en muchos sentidos abierto y en claro contraste con otro artículo democristiano aparecido en “*Discussione*” (este último se titula sugerentemente “Sobre la cabeza de la DC”)¹², de menor carácter oficial. El artículo de *Il Popolo* comienza planteando que en la carta de Berlinguer hay “algunas afirmaciones que representan un innegable desarrollo de la posición comunista”. La argumentación se centra en la necesidad “de definir con precisión el carácter de la sociedad socialista hacia la cual el PCI pretende conducir al país”. Para la DC la preocupación está en si esa sociedad mantendría o no su carácter pluralista y por lo tanto el respeto por el ámbito religioso, argumentando que esa no es la experiencia que se ve en los países del Este. En general la DC no entra de lleno en la polémica, salvo reiterando sus puntos de vista políticos y buscando salvaguardar,

¹⁰ El artículo 5 del Estatuto del PCI afirma que “cada inscrito en el partido tiene el deber de adquirir y profundizar (salvo las disposiciones del artículo 2) el conocimiento del marxismo-leninismo y aplicar sus enseñanzas en la solución de las cuestiones concretas”.

¹¹ “Il PCI e i cattolici: Método e fini del Marxismo”. Editorial del diario *Il Popolo*. 16 Octubre 1977.

¹² “Sulla testa della DC”. Artículo en *Discussione*. 16 Octubre 1977.

poniéndose a la defensiva, su rol de partido de la “unidad” de los cristianos.

Pese a lo anterior es importante destacar que ni la Santa Sede ni la DC toman las posiciones de cerrada condenación y repetición de viejos anatemas de la Conferencia Episcopal Italiana¹³. Con estas reacciones el debate no ha quedado ni mucho menos cerrado, por cuanto las puertas recién comienzan a abrirse.

Las fuerzas laicas, especialmente a través del Partido Socialista, han tenido una opinión positiva pero planteando simultáneamente la preocupación de ampliar el debate y que este diálogo no termine solo en fórmulas de acuerdo entre el Vaticano y el PCI. Han criticado las afirmaciones de Berlinguer en contra del anticlericalismo laicista de raigambre masónica.

Son interesantes también las opiniones que han entregado los jesuitas a través de su revista *Civiltà Cattolica*¹⁴ y de un artículo que su director, el P. Sorge¹⁵ había publicado sobre el tema días antes de la publicación de la carta de Berlinguer. Se refleja aquí lo que podríamos llamar una posición más avanzada al interior de la Iglesia, pero que tiene una importante influencia en la jerarquía. (De hecho el artículo de *L'Osservatore Romano* recoge en lo fundamental la argumentación jesuítica).

El P. Sorge define la posición de lo que él llama “la esperanza cristiana” frente a “las otras esperanzas humanas” (entre ellas la marxista que “aparece a muchos como la esperanza más grande que el hombre ha concebido para liberarse, para redimirse con su sola fuerza”), como una “postura de complementaridad y crítica”. Complementaridad, por cuanto la esperanza cristiana pertenece a otro “orden” y “no se pone como alternativa, sino que viene a integrar las otras esperanzas humanas”; crítica, en la medida que la esperanza cristiana agrega el elemento trascendente a las esperanzas inmanentes. Refiriéndose más concretamente al marxismo afirma que el “ha contribuido a desarrollar en el mundo una esperanza de liberación, que en sí es buena y verdadera, que no debe diluirse. El error funesto está en el método y en las soluciones propuestas”, refiriéndose con esto último a los países socialistas. Las críticas a las experiencias del socialismo real es un lugar común en todas las reacciones del mundo católico a la carta de Berlinguer, pero sin que en ninguna de ellas se entre a un análisis y fundamentación serios que permita una discusión real y sin prejuicios sobre este tema.

Para terminar, *Civiltà Cattolica* afirma que “es un deber del mundo católico desarrollar en los problemas propuestos por Berlinguer un debate abierto y serio, pero sobre todo — de una y otra parte — honesto”. Hasta el ins-

¹³ Declaración del Comité Episcopal Italiano. Roma 21 Octubre 1977.

¹⁴ “El PCI è un Partito Politico Laico? Riflessioni sulla lettera dell'on. Berlinguer a Mons., Bettazzi”. Artículo S/F aparecido en la *Civiltà Cattolica*, N. 3057. 5 Nov. 1977.

¹⁵ Sorge, Bartolomeo S.I. “La Scelta Decisiva dei Gesuiti: Portare le speranze degli uomini di oggi”. *Civiltà Cattolica*, N. 3054. 17 Sept. 1977.

tante de terminar este artículo, había aparecido una segunda reacción del PCI a través de su diario L'Unità¹⁶, donde plantea dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que no es el cometido del PCI entrar a forzar una reforma de la Iglesia sino a confrontar sus puntos de vista con ella en el desarrollo concreto de la historia, y en segundo lugar, que el diálogo es una necesidad absoluta y válida para hoy día y que en lo fundamental debe circunscribirse a Occidente que es donde se da el tipo de relación planteada en la carta de Berlinguer. A juicio del articulista el diálogo debe responder a los problemas concretos hoy de la relación entre mundo católico y marxista, mundos que no pueden seguir ignorándose, y no volver a situaciones pasadas donde la Iglesia aparecía lejana — y más aun contraria — a los ideales democráticos.

Respecto al art. 5 del Estatuto, L'Unita afirma que Berlinguer no entró en materia porque el próximo Congreso del Partido discutirá su contenido y que en la actualidad, en la base del partido, existe, como es notorio, un debate destinado a resolver su eventual modificación. Afirma también L'Unita que el PCI ha ido más allá de la afirmación de Lenin respecto a que personas creyentes pudieran participar en el partido, pues tiende a superar la reducción de la fe y de los valores implícitos a un puro hecho privado. Por eso M. Gozzini — uno de los católicos elegidos en la lista del PCI — sostiene que el verdadero problema, 60 años después de Lenin, “no toca tanto al creyente militante comunista que cooperaría de tal manera a la extinción de su propia fe (según cierta tradición), sino más bien la actitud hacia la fe de parte de los comunistas no creyentes”¹⁷. Rainiero La Valle — otro destacado católico del mismo tipo — valoriza el intercambio de cartas entre Mons. Bettazzi y Berlinguer como “un importante acto de paz” que reconocería la unidad operante en la base del pueblo italiano.

IV.— CONCLUSIONES

No es posible negar la importancia objetiva que el diálogo a que nos hemos referido tiene no sólo para Italia, sino más allá de ella. Es fundamental si, no apresurarse en sacar conclusiones cuya realidad esté determinada esencialmente por el contexto histórico y político en que este debate se da.

Hay aquí un ejemplo de debate, concreto, veraz, serio y que respeta las especificidades propias de los interlocutores, debate del cual podemos extraer muchas enseñanzas.

¹⁶ “Risposta dell'Unità all'Osservatore Romano: Le ragioni di un dialogo”. Artículo en L'Unità. 13 Nov. 1977.

¹⁷ “Fede religiosa e critica alla società borghese”, Mario Gossini in Rinascita n. 47/2. Diciembre 1977.

Una de las características más sobresalientes del diálogo, es su carácter concreto y orientado a buscar formas de convivencia y colaboración entre mundo católico y comunista para enfrentar de conjunto y en una situación política dada los urgentes problemas que vive la sociedad. Se dan aquí muchos pasos adelante respecto de una forma sólo teórica y filosófica (debate entre marxismo y religión, p. ej.) de concebir este encuentro. Ello no elimina la necesidad de un debate en ese plano, pero tiene la virtud de poner el acento en problemas muy actuales y cuya resolución no puede quizás esperar el tiempo de una clarificación teórica. Más aun, muestra que solo en la práctica y en la historia, las contradicciones tienen posibilidad de comenzar a resolverse si no queremos caer en una disputa estéril. La fuerza del mundo marxista está junto a su teoría, en la capacidad que tiene de ir respondiendo concretamente a los problemas que el desarrollo de la sociedad va poniendo.

El diálogo entre cristianos y marxistas, del cual este debate es una etapa, no ha sido fácil. Largas historias de incompreensión separan a ambos mundos. La Iglesia ha reconocido que gran parte del movimiento obrero se ha desarrollado a espaldas suyas y muchas veces contra ella, en especial cuando aquella ha tomado posiciones en contra del progreso y la justicia. El positivo avance del socialismo y del movimiento comunista no ha estado tampoco exento de dificultades y errores que han pesado negativamente sobre esta relación.

Lo fundamental es que son dos mundos que no sólo no pueden ignorarse, sino además que es de vital importancia que busquen puntos de convergencia y encuentro.

Es importante destacar, además de la concreción y veracidad, la seriedad que el PCI muestra para entender a la Iglesia, sin dejar de plantear sus claros puntos de vista, elemento esencial de un diálogo verdadero. El inequívoco planteo de los objetivos que busca y la consecuencia en el día a día respecto de esos objetivos, hace de los comunistas italianos un interlocutor serio y que no escabulle los problemas de fondo que la relación plantea. Al mismo tiempo es un interlocutor con fuerza en la medida que representa a amplias masas, teniendo en sus filas buenos y consecuentes cristianos, masas a las cuales la Iglesia ya no puede responder con anatemas y condenaciones.

Finalmente el debate muestra, fundamentalmente por parte de los comunistas, el claro planteo de no entrar a reformar la Iglesia, y no plantearse objetivos al interior de ella, respetando su especificidad y realidad. Busca por el contrario, con un lenguaje claro y directo, que la Iglesia se entienda con el verdadero mundo comunista y no con las ideas mistificadas que ella tiene del marxismo. En ese sentido son deplorables los superficiales análisis de algunos de los interlocutores cristianos sobre las experiencias del socialismo real, análisis que no permiten entrar en ese aspecto a un debate serio y clarificador.

Latinoamérica y más específicamente Chile tiene muchos parámetros di-

ferentes y se encuentran allí católicos y marxistas en un contexto distinto al de Europa Occidental. Sin embargo, creemos que de esta experiencia se pueden extraer útiles lecciones para nuestro medio que pueden dar su aporte a la solución de los problemas de nuestro continente.

Raniero La Valle cuenta la siguiente anéctoda, ocurrido en su campaña electoral con los comunistas en 1976:

“en una asamblea del PCI, habiéndose orientado la discusión en forma natural, a raíz de las preguntas y el debate, hacia el tema cristiano, un viejo militante, probablemente de origen católico, le decía a su hijo que lo acompañaba: “A ti no te parece importante que esto ocurra, pero yo no habría creído jamás que podría ver una cosa como ésta en mi vida”¹⁸.



BRASIL: CRECE EL AISLAMIENTO DEL REGIMEN

Antonio Potiguar

El 12 de octubre Ernesto Geisel, presidente de la dictadura brasilera, ha anunciado la destitución del Ministro del Ejército Silvio Frota que ocupaba el puesto desde 1974. El hecho de que en un régimen militar el Presidente (un general elegido por los militares) haya removido a un general que ocupa el Ministerio del Ejército, es de por sí un hecho importante. Pero si a esto se agrega que el Ministro al dejar su cargo ha hecho público un insólito manifiesto a sus subalternos, con violentas acusaciones en contra del gobierno, se puede afirmar que la crisis es realmente seria.

No es la primera vez que desde el golpe de 1964 contra el gobierno constitucional de Joao Goulart, diferentes sectores de las FF.AA. se enfrentan de modo más o menos agudo. Históricamente ello ha coincidido con el renovamiento del mandato presidencial (cada 5 años, que ahora se han transformado en 6), concebido para garantizar la cohesión de las FF.AA. Por otra parte, el mecanismo constitucional ideado por los militares para dar a la dictadura una imagen democrática, se basaba también en un bipartidismo, representado por un partido de gobierno — la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) — y por un partido de oposición autorizado — el Movimiento Democrático Brasileiro (MDB) —. Para hacer coherente esta situación el nombre

del candidato presidencial se somete a la aprobación de la ARENA y del Congreso. En realidad la elección del nuevo presidente es decidida por el alto mando del Ejército, constituido por los 11 generales del grado más alto. El presidente en ejercicio ha influido siempre en la designación de su sucesor.

Este procedimiento ha provocado siempre una acentuación de las contradicciones entre los militares de las diferentes tendencias, las que hasta ahora habían sido contenidas en nombre de la unidad de las FF.AA.

La reciente destitución del general Frota se ha verificado también durante un proceso de sucesión, pero en un contexto político notablemente cambiado. El mandato del general Geisel termina al inicio de 1979 y el nuevo presidente debe ser elegido en octubre de 1978. Como acontece siempre, los ambientes militares se ponen en movimiento con dos años de anticipación para indicar el candidato que deberá ser aprobado por alto mando. Pese a que Geisel, colocándose como árbitro supremo, había prohibido en la práctica el debate sobre la sucesión hasta enero de 1978, se lanzó durante el mes de agosto, en forma indirecta, la candidatura del general Joao Batista Figueiredo, jefe del Servicio Nacional de Información (el CNI brasilero). Esta candidatura presentaba características hasta cierto punto novedosas: a) el general Figueiredo no es aún general de Ejército (status jerárquico considerado hasta ahora indispensable para que un general ocupe la presidencia); b) la candidatura de Figueiredo ha sido sustentada por sectores civiles ligados a la dictadura. Dos circunstancias que han provocado un gran malestar en los círculos militares que apoyaban otro candidato, el Ministro del Ejército Frota, y que han recordado la necesidad de respetar la práctica de la selección del presidente por parte del alto mando del ejército, donde Frota tiene la mayoría.

El enfrentamiento entre estas dos candidaturas militares culminó con la destitución de Frota. Hecho sin precedentes que demuestra la profundidad de la crisis de un régimen que desde 1968 se ha caracterizado cada vez más como fascista.

Los acontecimientos de este año son, en este aspecto, emblemáticos. En abril el gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de reforma judicial. De acuerdo con la Constitución de 1967 habría sido necesaria la mayoría de 2/3 de los votos para la aprobación de una reforma como la propuesta, votos con los que el partido de gobierno solo no contaba, después del revés sufrido en las elecciones de noviembre de 1974 (la primera elección verdadera desde 1964). El partido de oposición MDB votó contra el proyecto, pese a las fuertes presiones del régimen. Las consecuencias fueron notables: Geisel cerró el Congreso por dos semanas en las cuales dictó una nueva “acta institucional” imponiendo la reforma judicial y alterando la Constitución con una serie de disposiciones aún más restrictivas de la actividad política.

Se ha acentuado así el aislamiento social y político de la dictadura. Los estudiantes, después de 8 años de reflujo (las últimas manifestaciones, brutal-

¹⁸ “Un importante atto di pace” Raniero La Valle. Artículo en Rinascita. 21 Octubre 1977.

mente reprimidas, fueron en 1968) han comenzado nuevamente a manifestar por las calles. Sucesivamente han reivindicado peticiones específicas, como la reducción de las matrículas anuales, y han planteado problemas de índole general como los de las libertades democráticas, la denuncia de las torturas y la exigencia de una amplia amnistía y mejores condiciones de vida para el pueblo. Intelectuales, periodistas, juristas y hasta los presidentes de los grandes clubes de fútbol se han declarado favorables a una apertura democrática. También algunos sectores de la burguesía han comenzado a pronunciarse en favor de la liberalización del régimen (en muchos casos sus declaraciones han sido seguidas de críticas por la excesiva presencia del Estado en la economía).

Otro dato que explica el creciente aislamiento del régimen es la difícil situación económica. El modelo de desarrollo de estos años ha consolidado un capitalismo monopólico de Estado dependiente y subalterno a las multinacionales y el imperialismo (y por tanto hipersensible a las fluctuaciones cíclicas del capitalismo mundial), basado en primer lugar en bajos salarios obreros. Un mecanismo de acumulación que ha afectado a vastos estratos de capas medias y que ha sido incentivado por el Estado con la creación de un sofisticado mercado de capitales, que en la práctica se ha transformado en un centro de especulación financiera inmovilizando una gran masa de recursos y acelerando el proceso inflacionario. Este año, a pesar de un leve mejoramiento en la balanza comercial, gracias a los precios excepcionales del café en el mercado internacional, la deuda externa superará los 25.000.000 de dólares y la inflación será de alrededor del 40%. El aumento previsto del Producto Nacional Bruto en 1977, que es de un 6%, es considerado insuficiente por gran parte de la burguesía que ha protestado por las medidas recesivas y antiinflacionarias adoptadas por el gobierno, reivindicando una reducción de la intervención del Estado en la economía.

El gran avance democrático en Brasil se expresa actualmente en el MDB, la Iglesia y en determinadas fuerzas de la izquierda clandestina, entre las cuales asume un rol relevante el Partido Comunista Brasileiro (PCB). El MDB, único partido de oposición tolerado (al inicio fué solamente la expresión de las fuerzas menos reaccionarias que apoyaron el golpe de estado), se ha transformado, poco a poco, en una coalición de las diversas corrientes contrarias a la dictadura, como los socialdemócratas, los demócratacristianos y los socialistas. En los últimos meses la oposición del MDB se ha acentuado hasta aprobar en el Congreso Nacional Extraordinario de septiembre, el lema de lucha de una Asamblea Nacional Constituyente elegida por sufragio popular.

En la lucha por las libertades democráticas la Iglesia ha jugado un rol decisivo. 217 Obispos han aprobado este año un documento titulado "Exigencias cristianas para un orden político", en el cual se expresa claramente la posición de la Iglesia en favor de la democracia, la defensa de los derechos humanos, y mejores condiciones de vida para el pueblo brasileiro: un verdadero manifiesto contra la dictadura. Recientemente la Pontificia Universidad Católica de San

Paulo fué invadida por la policía que destruyó aulas, laboratorios, golpeando y arrestando a más de 2.000 estudiantes. El Cardenal Arns, Arzobispo de Sao Paulo, protestó vigorosamente pidiendo el castigo de los responsables y defendiendo a los estudiantes de la acusación de "subversivos".

En fin, falta por analizar el Partido Comunista Brasileiro. A partir de 1964, cuando algunos errores habían contribuido a aislar a las fuerzas progresistas durante el difícil período que precedió al golpe militar, en el PCB tuvo lugar un constante proceso de maduración política y de conocimiento de la realidad brasileira, pese a la violencia, la continua represión y las rígidas condiciones de la clandestinidad. Durante casi 14 años de dictadura el PCB se ha empeñado siempre en la unidad de las fuerzas democráticas y ha consolidado su influencia en la clase obrera.

El actual aislamiento de la dictadura brasileira se ha agudizado también como consecuencia de factores internacionales. Cualquiera sea la interpretación que se dé a la política exterior de Carter, permanece el hecho de que sus críticas por la violación de los derechos humanos, han constituido un elemento importante de inestabilidad para las dictaduras latinoamericanas. En Brasil, un país fundamental para la estrategia del Pentágono y de la Casa Blanca, los efectos de la política carteriana no pueden ser subvalorados.

Otro factor internacional proviene de la Social Democracia europea, en particular la alemana, que propicia la formación de un partido brasileiro ligado a la Segunda Internacional. El gran interés de la Social Democracia alemana por Brasil (Portugal y España han sido tomados como puntos de referencia), se refleja también en el ARENA, partido de gobierno. Determinados círculos de Alemania Federal, según parece, han manifestado su solidaridad en favor de una liberalización política en Brasil, con el fin de favorecer una mayor apertura hacia el capital internacional.

El núcleo dirigente actual del régimen ha tomado la iniciativa, frente a todos estos factores, de llevar a cabo un proceso de apertura democrática restringida, bajo el directo control del gobierno. Aquí se encuentra la verdadera explicación del conflicto entre Geisel y Frota. Esto último y los sectores que lo apoyan eran de opinión de que la salida de la crisis del régimen se podía obtener solamente con un mayor endurecimiento político, con una represión más dura contra las fuerzas democráticas. Al mismo tiempo, con propuestas económicas de corte liberal, estas fuerzas han buscado el apoyo de sectores de la burguesía que critican la excesiva estatización de la economía. Para realizar sus objetivos el General Frota ideó una "mini-conspiración", lo que explica el violento documento dado a la publicidad al día siguiente de su destitución. Su alejamiento representa, por lo tanto, una victoria parcial de los sectores de la dictadura que comprenden la imposibilidad de mantener el régimen en su forma actual y que tratan de controlar un cambio que aparece inevitable. Se busca así impedir que la solución de la crisis represente una victoria de la alternativa democrática, que la oposición en su conjunto propone y a la cual aspira la gran

mayoría del pueblo brasileiro.

La proyección futura depende, ahora, de dos factores fundamentales: la evolución de la situación en el seno de las FF.AA. y la unidad y firmeza de las fuerzas democráticas. El hecho de que el manifiesto anti-gobierno del General Frota no haya provocado medidas disciplinarias en su contra, indica la complejidad de las relaciones de fuerza entre los militares. Algunas de las denuncias hechas por el General Frota en su manifiesto (infiltración comunista en los altos rangos del gobierno, política exterior excesivamente dirigida al Tercer Mundo, exagerada participación del Estado en la economía) han sido, por otra parte, positivamente recibidas por algunos sectores de la burguesía.

Esta claro, entonces, que la unidad de las fuerzas democráticas y su capacidad de iniciativa son fundamentales para una evolución positiva de la situación. Es importante el hecho que el MDB, pese a asumir una posición abierta al diálogo con las corrientes más liberales del régimen, se mantenga firme en la defensa de su programa, sin ceder en la lucha por una asamblea nacional constituyente. Otro elemento decisivo esta representado por las relaciones entre la oposición democrática legal y aquella clandestina, en particular con su núcleo más organizado y representativo: el PCB. Actitudes discriminatorias bajo la influencia del anticomunismo más atrasado y rabioso que sostiene la ideología de la dictadura, debilitarian al conjunto de la oposición en un momento en el que su consolidación es decisivo para la conquista de la libertad democrática.

Otro factor de agravamiento de la crisis política es el resurgimiento de las agitaciones obreras en la región más industrializada del país, Sao Paulo. Los trabajadores, ferozmente reprimidos desde 1964 (los sindicatos, controlados desde la cúspide, han sido transformados en meros organismos asistenciales), piden a los patronos aumentos salariales superiores a los fijados por el gobierno. La clase obrera no ha salido todavía a las calles pero es previsible que esto ocurra en un periodo breve, a pesar de la dura represión.

PARTIDO

COMUNICADO DE LA COMISION EXTERIOR DE LA UNION DE JOVENES DEMOCRATICOS (U.J.D.)

Realizamos nuestra reunión de la Comisión Exterior de la U.J.D. en los momentos en que llegan a su culminación las celebraciones que se desarrollan en todas partes del 60º Aniversario de la Revolución de Octubre, el hecho histórico que hoy todos reconocen como el más significativo de nuestro siglo, el acontecimiento que abrió un nuevo destino a la humanidad. Para nosotros como jóvenes que integramos la Juventud de un partido de la clase obrera chilena, esta conmemoración tiene una especial significación. Nosotros aprendemos y nos educamos creadoramente en las tradiciones de la revolución que dirigió el Partido de Lenin.

Nos sentimos parte del inmenso movimiento de masas que hoy recorre el planeta y que abre a la humanidad perspectivas ciertas de cumplimiento de los que han sido los objetivos por los que lucharon y dieron sus vidas todos los hombres que en la historia se han jugado por el progreso. Se puede decir que gracias a la Revolución de Octubre victoriosa, gracias a que en 1917 rompió por primera vez y con la activa participación de la voluntad conciente de los hombres, la cadena de la explotación y de la subordinación de unos seres humanos a otros, gracias a eso es que, para nosotros, como jóvenes se hace parte de la realidad, de las posibilidades no utópicas sino profundamente enraizadas en la historia, la conquista de un futuro en que los hombres se liberen de las trabas que les han impedido hasta hoy ser hermanos, convivir en paz, asegurarse un mañana en que la explotación, el hambre, la miseria, la degradación moral y todas las lacras que las sociedades existentes hasta el socialismo llevan consigo.

También nuestra reunión se efectuó en un momento en que en el país se dan circunstancias enteramente nuevas. Se puede decir que el asilamiento de la dictadura se ha hecho cada vez más definitivo e irreversible. Las fuerzas democráticas se pronuncian siempre con mayor fuerza contra la Junta Mi-

litar y se están demostrando capaces de encontrar puntos de acuerdo en los hechos para luchar por la libertad. Esto no es una casualidad. Son cada vez más los chilenos que se pronuncian por un cambio fundamental en la situación del país. Es que a 4 años del golpe nada bueno puede mostrar a su haber la dictadura.

La lucha por los derechos humanos, cuya expresión principal es la lucha por los desaparecidos (y de ellos recordamos con especial y fraternal cariño a nuestros camaradas Carlos Lorca y José Weibel, Carlos Contreras y Ricardo Lagos) esa lucha se une a la que libra el movimiento sindical por la completa libertad de organización, por cambios radicales en la conducción económica del país y en la denuncia cada vez más abierta, de la política fascista.

Nuestra juventud chilena es parte de esta realidad de lucha. Ella a contribuido también a abrir el espacio en que se mueve el movimiento democrático en Chile. El ejemplo más reciente ha sido la inmensa victoria obtenida en la Universidad de Chile, en donde fuimos capaces de infringirle una gran derrota al llamado autofinanciamiento de la Universidad, que demuestra las potencialidades del movimiento unitario de los estudiantes.

También en las últimas semanas ha aparecido una carta a Pinochet de más de 300 dirigentes juveniles de diversos frentes. En ella se denuncia la política fascista en todos los terrenos y se traza un programa de acción concreto para la democratización del país. Como jóvenes de la U.J.D. valoramos altamente el contenido de esa carta, consideramos que en ella encuentra expresión la amplitud siempre creciente que va adquiriendo el movimiento antifascista entre los jóvenes y, aunque no podamos estar de acuerdo con todas sus expresiones, nos sentimos plenamente de acuerdo con su espíritu y con las proposiciones concretas de lucha que allí se hacen. Constituyen, a nuestro juicio, una buena base para el entendimiento de todas las fuerzas juveniles antifascistas.

En nuestra reunión, nos hemos preocupado, de manera especial, por el problema del exilio chileno, por indicación expresa de nuestro C.C. de la U.J.D. en el país. Por primera vez en la historia de nuestro país, el problema de los hombres y mujeres que viven fuera de la Patria se presenta como una preocupación moral, humana, de proporciones. Son un millón de chilenos desarraigados y de ellos miles de miles son jóvenes, adolescentes y niños de toda edad que no tienen contacto directo alguno con su patria, que se educan en decenas de sociedades diversas, desde las más avanzadas a las más retrógradas, con vivencias contradictorias pero siempre distintas a la de Chile. La educación de estos muchachos en el cariño a su país y a su historia, en la fidelidad a su pueblo no es una cosa secundaria, como tampoco lo es la de ser capaces de orientar el sentido democrático y antifascista a esta inmensa cantidad de chilenos que, puestos en movimiento, pueden jugar un rol decisivo en la correlación global de fuerzas entre fascismo y libertad.

Proponemos a las otras Juventudes de la Unidad Popular que nos preocupemos de este problema, que pensemos en los métodos y formas unitarias de ir resolviéndolo. Por nuestra parte, como U.J.D., tratando de contribuir a ese esfuerzo que necesariamente tenemos que hacer todos, proponemos a la Unidad Popular Juvenil, a todos los jóvenes que se encuentran fuera de Chile una plataforma de lucha que contenga los siguientes puntos fundamentales:

- a) *Por los derechos de la juventud.* A la educación, al trabajo, a la expresión de una cultura propia, chilena y americanista, al retorno a la patria.
- b) *Por la organización de la juventud.* Por la formación de centros juveniles, de peñas, liberías, bibliotecas, lugares de encuentro, charlas y todo lo que pueda permitir que los jóvenes se encuentren y eduquen.
- c) *Por la elevación de la conciencia y movilización de la juventud chilena en el exterior.* En la solidaridad activa y concreta con los jóvenes patriotas del país. En el desarrollo, creación y divulgación de la cultura chilena.
- d) *Por la unidad política de la juventud.* Por el desarrollo de organizaciones políticas unitarias de la Unidad Popular Juvenil y más amplias donde ello sea posible.

Pensamos que esta tarea, de inmensa responsabilidad, corresponde a la Unidad Popular Juvenil.

Atribuimos a ella la máxima importancia como organismo que agrupa a la parte más avanzada de la juventud democrática chilena. Creemos que la Unidad Popular Juvenil debe ser sujeto activo de la solidaridad, debe ser la cabeza de nuestros esfuerzos unitarios hacia las otras juventudes democráticas. Al mismo tiempo, a la UPJ, corresponde un papel decisivo en las tareas internacionalistas de la juventud chilena. Es por ello que expresamos nuestra profunda alegría porque todas las juventudes de la UP hayan llegado a un acuerdo en torno a la más grande tarea internacionalista que tenemos por delante: El XI Festival de la Juventud y los estudiantes en La Habana, en julio del 78.

Seguiremos dando el aporte que a la U.J.D. le corresponde, hoy en la más alta responsabilidad colectiva de la UPJ para que siga contribuyendo a la lucha que nuestros compañeros libran en Chile y para que guíe a todos los que se encuentran fuera del país.

En nombre del Comité Central de nuestra U.J.D., de nuestra organización que, en sólo dos años de combate, se ha ganado un lugar en Chile gracias a la lucha heroica de sus militantes en la vanguardia de la juventud antifascista junto a otras juventudes democráticas, saludamos a nuestra organización hermana de la F.D.J. Nos unen a ella lazos cada vez más sólidos e indestructibles. Primero porque somos dos juventudes de partidos obreros, de

organizaciones que tienen tradiciones y destinos comunes. Segundo, porque lo que ustedes han hecho por Chile no será jamás olvidado.

Educamos a nuestros militantes, en Chile y en el exterior, en el cariño a quienes como ustedes, como los jóvenes de los países socialistas y del mundo entero, han entregado tanto por la causa de Chile. Nuestro agradecimiento más profundo por las magníficas condiciones que nos han ofrecido para nuestro trabajo.

Con la guía de nuestro partido y su Comité Central en Chile, con la unidad de todas las fuerzas antifascistas por la que lucha nuestra Unidad Popular, con el apoyo de todos los que sienten nuestra causa como propia, el pueblo chileno recobrará su libertad.

U.J.D.
COMISION EXTERIOR

Berlín, 7 de noviembre 1977

ACTIVIDAD PARTIDARIA

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO PARTICIPA EN CONMEMORACION DEL
60º ANIVERSARIO DE LA GRAN REVOLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE



Jaime Gazmuri en los momentos en que coloca una ofrenda floral a nombre del MAPU O-C en el Mausoleo de Lenin, en la Plaza Roja.

Invitado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, Jaime Gazmuri, Secretario General del Partido, tomó parte en las ceremonias conmemorativas del 60º Aniversario de la revolución bolchevique en la Unión Soviética.

El Secretario General llevó el saludo del Comité Central del Partido al P.C.U.S., participando junto a los principales dirigentes del movimiento obrero internacional en las actividades celebradas en el Kremlin y en el desfile militar y la fiesta popular en la Plaza Roja.

Jaime Gazmuri fué invitado, también, a un encuentro en la Academia Militar FRUNZE - FF.AA. Soviéticas Defensa del Poder Soviético - donde el dirigente pronunció una intervención. "La Revolución de Octubre - dijo Gazmuri - constituye el princi-

pal acontecimiento histórico de este siglo". "En la Rusia de 1917, la aspiración milenaria de construir una sociedad justa aboliendo la explotación, encuentra por primera vez las condiciones históricas concretas para convertirse en realidad".

Más adelante Gazmuri señaló: "En América Latina el imperialismo intenta consolidar un área de poder estable, que le sirva de retaguardia y de campo de repliegue. En nuestras condiciones, la lucha por la independencia se vincula cada vez más a la lucha por la defensa y la ampliación de la democracia. La fase actual de afirmación imperialista y fascista es inevitablemente transitoria. Nuestra Patria y nuestro continente conocerán el socialismo. Lo harán en base a una experiencia propiamente nacional y original. En cada país se darán diversas formas de democracia y diversos ritmos en las transformaciones revolucionarias. Cada una de ellas se inscribirá en el marco del gran proceso iniciado por la Revolución de Octubre, recogerá sus enseñanzas y se apoyará en la particular correlación de fuerzas a nivel mundial dada por la presencia activa de la URSS y el campo socialista".



COMISION EXTERIOR DEL MAPU O-C REUNIDA EN LA R.D.A.

Presidida por el Secretario General, Jaime Gazmuri, se reunió en Berlín, RDA, la Comisión Exterior del Partido encabezada por el Cro. José Miguel Insulza.

La CEX analizó el estado y las perspectivas de la lucha en el interior de Chile, la marcha del movimiento de solidaridad con nuestro pueblo y las tareas del Partido para los próximos meses.



CONDOLENCIAS DEL PARTIDO POR TRAGICA MUERTE DE MARIO GARCIA INCHAUSTEGUI Y ESPOSA

Compañero Fidel Castro
Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba

Profundamente conmovidos por la trágica muerte de Mario García Inchaustegui y su esposa, mientras cumplía tareas al servicio de su Patria, hacemos llegar al Gobierno y al pueblo de Cuba las condolencias de nuestro Partido. Los recordaremos siempre como compañeros comprometidos con la causa revolucionaria, que vivieron junto a nosotros la experiencia del Gobierno Popular de Chile, supieron representar el apoyo decidido de Cuba Revolucionaria a nuestra causa y defendieron con energía y valor los intereses de su Patria en los días del golpe fascista.

Jaime Gazmuri
Secretario General del MAPU O-C



CIRCULA EN CHILE EL SEGUNDO NUMERO DE LA "REVISTA DE LA RESISTENCIA" ORGANO DEL CC DEL PARTIDO



Ha aparecido clandestinamente el segundo número de la publicación del Comité Central del Partido. La revista, cuya portada reproducimos en el número anterior de "Resistencia Chilena", perfecciona notablemente en este segundo ejemplar su calidad tipográfica y de compaginación.

En este número la publicación trae una entrevista al Encargado del Partido en Chile, cuyo título es "La Resistencia Democrática-Nacional y el Partido", que reproducimos integralmente en este ejemplar de "Resistencia Chilena", y, además, dos artículos, uno de política nacional titulado "De mayo a agosto: la crisis del fascismo se profundiza" y uno internacional llamado "La lucha por la democracia en España".



ALEJANDRO BELL EN UP DE VENEZUELA

El Cro. Alejandro Bell, miembro del CC del Partido, asumió la presidencia de la Unidad Popular en Caracas, Venezuela.

Como se sabe, Venezuela es un importante centro de la solidaridad en América Latina y una región con grandes perspectivas de desarrollo en este campo.



MEXICO: APARECE REVISTA "ANALISIS"

El Comité Local del MAPU O-C de México edita en ese país la revista "Análisis", publicación mensual destinada a analizar un tema específico en cada número. El tema del primer ejemplar fué la Democracia Cristiana y el segundo se centró en el análisis de las FF.AA.

La revista es editada sobre la base de materiales del Partido, de publicaciones de la Comisión Exterior y, fundamentalmente, del aporte y la elaboración de miembros del Comité Local México.

La revista, de buen nivel técnico y sobria presentación, se distribuye por suscripciones y se vende.

◇ ◇ ◇

ARTICULO DE "IZVESTIA"

El sábado 26 de noviembre pasado el diario "Izvestia", órgano del soviet de diputados populares de la URSS, publicó en tercera página un artículo firmado por el Cro. Jaime Estevez, miembro del CC del Partido, forma en que el diario lo identifica.

El artículo se titulaba "La Junta en el cerco del aislamiento", y como subtítulo llevaba "Los patriotas chilenos en su lucha contra la dictadura". En él, Jaime Estevez hace un análisis amplio sobre la situación chilena y los cambios ocurridos en el último período, explicando la política del movimiento popular y las perspectivas de la resistencia antifascista.

◇ ◇ ◇

CHILENOS PONEN OFRENDA FLORAL EN MAUSOLEO DE LENIN

En homenaje al 60º Aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, los chilenos residentes en Moscú pusieron una ofrenda floral en el Mausoleo de Lenin, el 26 de Octubre pasado.

La delegación estuvo integrada por el Cro. Jaime Estevez, miembro del CC del Partido y Gonzalo Torres de la U.J.D., por los compañeros Orlando Millas y Alejandro Yañez del P.C. de Chile, Jaime Suarez, del P.S. de Chile, periodistas, mujeres, jóvenes y niños residentes en Moscú.

En la tarde del día 26 se realizó un acto político cultural. A nombre de la U.P. en la Unión Soviética hizo uso de la palabra el Cro. Alejandro Yañez, del CC del P.C.Ch. En representación de la juventud chilena intervino Gonzalo Torres, de la U.J.D., y por las mujeres lo hizo la compañera Lili Suarez, del P.S. En nombre de los compañeros soviéticos agradeció el Cro. Vicepresidente de la Cruz Roja Soviética.

◇ ◇ ◇

REPRESENTANTES DEL PARTIDO EN REUNION DE LA SECRETARIA PARA AMERICA DE SOLIDARIDAD

Los compañeros Ricardo Mercado, miembro del C.C. y Juan Gabriel Valdés, participaron a nombre del MAPU O-C en la segunda reunión de la Secretaría América de Solidaridad con el pueblo de Chile, celebrada en Montreal, Canadá.

La reunión fué presidida por Luis Maira y contó con la presencia de representantes de los comités de chilenos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México y Panamá.

La reunión conoció informes de cada país, del Secretario Ejecutivo Maira, y adoptó un plan de trabajo en América para la próxima etapa.

◇ ◇ ◇

APARECE REGULARMENTE EN CUBA BOLETIN "VENCEREMOS" DEL MAPU O-C

Los compañeros del Partido residentes en Cuba editan regularmente un valioso boletín informativo mensual cuyo nombre es "Venceremos".

La publicación tiene siete secciones que incluyen un análisis nacional, una sección ideológica, otra sobre el Partido, la Resistencia, la Unidad Popular, América y una sección documentos.

El boletín es una publicación editada con el esfuerzo colectivo del Partido en el país. Es particularmente significativo que la publicación no solo reproduzca materiales partidarios o de las fuerzas de la resistencia, sino que la mayoría de los artículos son escritos por los compañeros de la base del partido en el país, e incluso se incluyen materiales del interior de Chile.

◇ ◇ ◇

ENCARGADO DE LA UJD EN CUBA REPRESENTA UP JUVENIL EN COMISION PERMANENTE DEL XI FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Desde el mes de septiembre trabaja la Comisión Permanente del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. La Unidad Popular Juvenil en La Habana designó al Cro. Emilio Sironvalle, Encargado de la UJD, para que la represente. Como se sabe el próximo festival se llevará a cabo en La Habana, Cuba.

◇ ◇ ◇